

Africa América Latina

Revista de ACEL, n.º 1, febrero de 1990

Artículo

Los programas de ajuste del FMI y del Banco Mundial

Thérèse Marchaisse

**Frecuencia del Estado africano a los ciclos y crisis
económicas. Notas preliminares**

Samir Amin

Por una estrategia de desarrollo descentralizado en África

Aracelly García

**Nicaragua: consideraciones sobre la alternativa
estratégica**

León B. Carabaz

Principios y fin de la segunda violencia en Colombia

Una sociedad en transición

**IV Congreso sobre el 'Destino y Esperanza
de la Tierra'**

Declaración de Maragua

**Comité de Emergencia de Ayuda a El Salvador
Militante de El Salvador**

María Elena Casado

**La mujer en el contexto centroamericano:
el caso de Guatemala**

INDICE

MONOGRAFICO

- | | | |
|---|----|---------------------|
| Los programas del ajuste del FMI y del Banco Mundial | 7 | Agit Singh |
| Respuestas del Estado africano a los ciclos y crisis económicos. Notas preliminares | 17 | Thandika Mkandawire |
| Por una estrategia de desarrollo autocentrado en Africa | 27 | Samir Amin |
| Nicaragua: Consideraciones sobre la alternativa estratégica | 39 | Aracelly García |

NOTAS DE ACTUALIDAD

- | | | |
|---|----|------------------|
| Principio y fin de la segunda violencia en Colombia. Una sociedad en transición | 61 | Luis B. Carbajal |
|---|----|------------------|

DOCUMENTOS

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| Declaración de Managua | 73 | |
| Manifiesto de El Salvador | 79 | Comité de Emergencia de Ayuda al Pueblo Salvadoreño |

AVANCES DE INVESTIGACION

- | | | |
|---|----|-------------------------|
| La mujer en el contexto centroamericano: el caso de Guatemala | 83 | Marta Elena Casaús Arzú |
|---|----|-------------------------|

Los programas de ajuste del FMI y del Banco Mundial

Ajit Singh *

Introducción

La actual crisis económica está teniendo un efecto devastador sobre las economías africanas, principalmente por la incidencia de factores externos adversos. La balanza comercial de los países africanos en vías de desarrollo no productores de petróleo ha evolucionado desde un superávit inicial en 1973 hacia un enorme déficit de cerca de 6.000 millones de dólares en 1982; de forma similar, el déficit por cuenta corriente se ha incrementado seis veces durante el período 1973-83.

El principal objetivo de este artículo es examinar la validez del programa y análisis del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con los que se intenta corregir los desequilibrios externos, especialmente de los países africanos con economías de planificación central.

Se examinará con detalle la cuestión de las políticas de devaluación, pieza central de los programas, que constituye invariablemente la clave del enfrentamiento entre el FMI y los países en vías de desarrollo.

Análisis de las devaluaciones en las economías africanas de planificación central. Algunas consideraciones

Uno de los métodos de ajuste para los desequilibrios externos más evidentes lo constituye la devaluación de la moneda de un país, suponiéndose que estimula las exportaciones al reducir los precios en monedas extranjeras y hace descender las importaciones al elevar sus precios en la moneda propia.

Aunque la devaluación no representa más que un simple cambio de precios —el de la moneda propia por extranjeras—, sin embargo es un elemento muy importante de la política económica, puesto que tiene amplias implicaciones para el conjunto de la economía, sobre las áreas de producción, la distribución interna y la inflación.

En los libros de economía la eficiencia de una devaluación depende de los valores de las elasticidades de las importaciones y exportaciones, esto es, el grado de aumento de las exportaciones y descenso de las importaciones, inducido por los cambios de precios. Sin embargo, el análisis económico moderno reconoce la comple-

* Profesor de Economía de la Universidad de Cambridge. Tomado de *Review of African Political Economy*, 1986. Traducción de Antonio Santamaría.

tividad de una devaluación por las profundas repercusiones que tiene en la economía, por lo que el análisis adecuado de una devaluación debe basarse en un cuidadoso examen empírico de las siguientes cuestiones:

- 1) La dimensión del efecto neto en la balanza de pagos.
- 2) La duración de los efectos de una devaluación: ¿seis meses, un año, cinco años?, así como si se ven afectadas antes las importaciones que las exportaciones.
- 3) La certidumbre de los efectos.
- 4) El impacto sobre la distribución interna y la inflación, considerando tanto los efectos a corto plazo tanto los acusados antes por la inflación que por la balanza exterior, pudiendo provocar una reacción en cadena de incrementos salariales, mayor inflación, inestabilidad financiera, etc.

Aparte del ámbito del equilibrio ortodoxo, en el mundo real, donde las acciones se encuentran correlacionadas, cada una de estas cuestiones tienen una importancia vital en la toma de decisiones, respecto a una devaluación. Este planteamiento ha sido el resultado, no de un refinado estudio académico, sino de una lección que los economistas han aprendido de las experiencias recientes de las devaluaciones en diversos países.

Como consecuencia, los economistas son bastante más escépticos en nuestros días de la eficiencia de una devaluación como instrumento de cambio estructural de lo que eran anteriormente.

Para un país africano exportador de materias primas se concibe generalmente que a corto plazo, por un período de un año, es posible vender toda la cantidad de materias que desee a los precios dados internacionalmente.

La elasticidad de la producción de materias primas es usualmente relativamente pequeña a corto plazo, mientras que las importaciones pueden ser desalentadas por los precios más elevados.

En una economía de planificación central que necesita realizar restricciones en la balanza de pagos toda importación innecesaria puede ser suprimida mediante controles establecidos por el Banco Central directamente; hasta incluso las importaciones esenciales que sea necesario reducir, por razones relacionadas con desequilibrios de la balanza de pagos, pueden ser controladas mejor por el gobierno mediante el criterio de prioridades sociales que en base al criterio del beneficio privado inducido por el mercado, desde una perspectiva social.

A la vista de la baja elasticidad de la balanza exterior de un país exportador de materias primas, a corto plazo, existe una predisposición contraria a la devaluación, que no será un instrumento útil si no es compensada por otros factores.

El Fondo Monetario Internacional expone normalmente uno o varios de los siguientes argumentos para justificar las amplias devaluaciones de las economías africanas:

1—La devaluación tendrá un efecto positivo sobre la balanza de pagos, incluso a corto plazo, porque reduce las filtraciones del contrabando, desalienta el mercado paralelo de cambios, disminuyendo la pérdida de divisas por esta vía no gubernamental, e incluso aunque no se incrementen las exportaciones de materias a corto plazo se producirá un efecto positivo sobre la balanza de manufacturas.

2—La devaluación produce un efecto favorable sobre la balanza de pagos a largo plazo.

3—Tanto a largo como a corto, la devaluación ayuda a restaurar el equilibrio del presupuesto gubernamental.

4—La devaluación es esencial, puesto que los índices de inflación de los países africanos han sido más elevados que en el resto del mundo, existiendo, por tanto, una apreciación de las tasas reales de cambio.

Posteriormente retomaremos estos argumentos.

Devaluación y balanza exterior

Respecto al impacto de una devaluación sobre la balanza de pagos, a corto plazo, los argumentos del FMI de que se producirá un efecto favorable se basan fundamentalmente en consideraciones sobre el contrabando y el mercado paralelo de cambios. El Fondo no trata de probar ninguna estimación empírica sobre las ganancias obtenidas en la balanza; sólo argumenta invariablemente que, en términos generales, la clase de devaluaciones que recomienda reduce los mercados paralelos e ilegales, incrementando los recursos oficiales en divisas.

Ante un análisis detallado estos argumentos generales no parecen ser aplicables de forma universal. La situación económica, la estructura institucional, las prioridades sociales y la efectividad del Estado son diferentes en cada país.

He examinado los argumentos del Fondo en el caso específico de Tanzania, encontrándolos deficientes por diversas razones.

Primero, la razón principal para que los productores de café traten de maximizar sus beneficios, vendiendo ilegalmente su producción en otro país, no se debe a que el shilling tanzano esté sobrevaluado, sino al interés que tienen por importar determinados bienes de lujo (radios, tocadiscos, etc.) cuya importación está prohibida para la población. Este tipo de productores continuarían exportando su café ilegalmente aunque el shilling fuera devaluado en un 20 o un 40 por 100 respecto al dólar. Los cambios introducidos en las prioridades sociales en el país contemplan la posibilidad de obtener dichos bienes para aquellos que ingresan divisas como resultado de su actividad.

En este caso no parece que una simple devaluación crease un marco diferente para reducir el nivel del contrabando.

Por lo que se refiere al mercado paralelo de cambio, la demanda está determinada por el deseo de algunos hombres de negocios y personas que se han enriquecido de evadir parte de sus beneficios. El tipo de cambio de este mercado está afectado por la evasión de capitales y no por el grado de saneamiento de la economía o situaciones de cuenta corriente. En este sentido una devaluación empeoraría las cosas en vez de mejorarlas, puesto que tal medida viene acompañada de un incremento de la inflación, demandas salariales, etc., en medio de un estado de gran incertidumbre que intensifica las presiones para la evasión de capitales por canales ilegales; por tanto, si el shilling es devaluado de 10 a 30 por dólar, el tipo de cambio en el mercado ilegal, en vez de bajar, subirá hasta 50 ó 100 shillings.

En el caso de Tanzania soy extremadamente escéptico sobre la posibilidad de que, a corto plazo, la balanza de pagos pueda equilibrarse por una devaluación mediante los efectos sobre el contrabando y el mercado paralelo.

En otros países la situación puede ser diferente, en cuyo caso los argumentos del Fondo Monetario tendrían mayor validez, pero incluso en este caso las consideraciones mencionadas deben también ser tenidas en cuenta.

El tercer argumento, sobre una devaluación y sus efectos a corto plazo, se refiere a las manufacturas. A primera vista parece tener mayor consistencia, pero también la situación es muy distinta en cada país. En concreto, analizando la industria manufacturera en Tanzania, he llegado a una conclusión diferente.

Teniendo en cuenta que, a pesar del descenso en el nivel de actividad económica mundial, existen algunas expectativas de que se incrementen las exportaciones de manufacturas, mi análisis apunta a que este objetivo se alcanzaría mejor, no por una devaluación, sino mediante la concentración en la exportación de un número de bienes a amplia escala (textiles, cemento, etc.), así como por la oferta de subsidios a este tipo de productos; en términos conceptuales, la política más adecuada sería un sistema de cambios múltiples. Pero, desde el punto de vista administrativo, es más simple operar con subsidios a la exportación.

Respecto a las manufacturas importadas, no compiten con la producción doméstica, como argumenté anteriormente, sino que en el nivel presente de desarrollo son absolutamente esenciales para complementarlas.

Esta consideración fortalece aún más el argumento a favor de establecer un criterio de selectividad conjuntamente con tipos de cambios múltiples, subsidios a la exportación y, si fuese necesario, impuestos a las importaciones.

A largo plazo, existen mejores expectativas de un efecto favorable generado por una devaluación sobre la balanza de pagos, tanto respecto a la agricultura como a la industria, siendo necesario tener presentes los siguientes puntos:

1.º Aunque una devaluación puede suponer un incentivo para incrementar la producción agrícola para la exportación a expensas de los cultivos alimenticios, tal tipo de posibilidad sólo puede materializarse si se produce un creciente desarrollo de las infraestructuras y de otros insumos vitales (transporte, fertilizantes, agua...). En muchos países africanos hoy día la obtención de estos insumos tiene un gran peso cuantitativo en la producción de materias de exportación, mayor que el de una devaluación. Esta cuestión puramente empírica y el efecto relativo de los precios, así como de otros factores, deben ser cuidadosamente relacionados con cada bien de exportación, tanto por separado como para el conjunto de la agricultura. Sobre este tema no he logrado ver un análisis satisfactorio del FMI.

2.º Incluso a largo plazo, en las circunstancias de los países exportadores de materias primas, particularmente en los de economías planificadas, un sistema de cambios múltiples opera por medio de subsidios de exportación y aranceles de importación, siendo económicamente más eficiente que una simple depreciación del tipo de cambio (Kaldor, 1982).

3.º Es muy importante resaltar que en este contexto el largo plazo depende directamente de lo que suceda a corto, por la sencilla razón de que los efectos que supuestamente se producen a largo plazo sólo pueden materializarse si la devaluación es una medida efectiva, esto es, si la devaluación no es anulada por la inflación interior; por tanto, el largo plazo no representa una vía diferente de la dinámica a corto generada por una devaluación, como se viene afirmando, debido a la interacción de sus efectos sobre precios y salarios, así como sobre el resto de la economía.

Presupuesto, inflación y devaluación: La política de devaluación

Es esencial para la lógica de una devaluación que se produzca un corte en los salarios reales, haciendo más caros los bienes importados y sus sustitutivos respecto a los salarios de los trabajadores. El programa del FMI basado en la devaluación, restricción del crédito, recortes presupuestarios, liberalización del régimen de comercio exterior e interior, si logra aplicarse con éxito, tiene a corto plazo dos efectos importantes en la economía, induce una caída del consumo general y de los salarios reales, conduciendo a una redistribución del ingreso entre aquellos que producen para la exportación y productos sustitutivos de importaciones, respecto a los que producen para el mercado interno.

La semilla de la inflación y la desestabilización económica descansa en estos dos efectos de la devaluación, como apunta Kaldor:

«El principal obstáculo a esta aproximación es que si se asume que la devaluación puede cambiar las relaciones entre salarios y precios de forma efectiva en un país, incluso cuando las políticas fiscales y monetarias son incapaces de obtener estos resultados. No puede garantizarse que la redistribución del ingreso pueda ser cambiada de forma efectiva por una devaluación, ya que es una manifestación de complejas fuerzas políticas. Parece que a largo plazo una devaluación provocará una elevación generalizada de precios y salarios, así como entre precios externos

e internos, al mismo nivel existente antes de la devaluación.» (Kaldor, 1982.)

La inflación no es simplemente un efecto monetario; de otra forma, el mundo la habría controlado hace mucho tiempo, reduciendo la oferta de dinero. Está relacionada con la lucha por la distribución del ingreso, o como ya argumentamos en Cambridge, se basa en reivindicaciones sobre el ingreso nacional. Ilustraré de una forma muy sencilla cómo funciona este proceso en un país como Tanzania.

Con una producción dada a corto plazo, representa que el salario real de los trabajadores y empleados del gobierno, en Dar-es-Salaam, se vería reducido para beneficiar a los plantadores de café del Kilimanjaro, transfiriendo ingresos de los no exportadores a los exportadores; sabiendo que se ha producido un fuerte descenso en los niveles de vida de la población urbana en los últimos tres años, quizá del orden del 50 por 100, una caída mayor, generada por una devaluación, provocaría de forma inevitable reivindicaciones salariales. Si dichas demandas no son atendidas, desembocarían en conflictos políticos; si fueran atendidas, inducirían inflación, requiriendo nuevas devaluaciones y repitiendo el proceso.

Esta perspectiva de la política económica de las devaluaciones es necesario tenerla en cuenta para examinar los argumentos del FMI. Respecto a la devaluación y el déficit fiscal se sugiere que se equilibre o no la balanza de pagos, la devaluación es deseable porque puede ayudar a equilibrar el déficit presupuestario, ayudando a reducir o eliminando los subsidios a las exportaciones de materias, así como reduciendo los déficits de las «oficinas de comercialización».

Respecto a este argumento me da la sensación de que es necesario plantear una cuestión básica: ¿Por qué se quiere reducir el déficit presupuestario? ¿Para ayudar a la economía real: producción, empleo, etc.? ¿Porque puede reducir la inflación? ¿O es un fin en sí mismo?

Como ya hemos visto en una economía restringida por la balanza de pagos, si una devaluación no es efectiva, el ajuste presupuestario inducido por la devaluación no alcanzará por sí mismo ninguno de los objetivos de la economía real; de hecho, en la actualidad el índice de inflación se eleva más que desciende como consecuencia de la devaluación.

Puede argumentarse que la inflación descenderá a largo plazo, pero éste es un razonamiento totalmente abstracto por lo que respecta a las consideraciones de política económica a corto plazo.

Con una producción dada a corto plazo, una devaluación no puede equilibrar el presupuesto simplemente por mandato; alguien debe pagarla en términos reales, mediante la reducción de sus ingresos o el aumento de los impuestos. (En la suposición de que la población aceptara este recorte en sus ingresos reales como consecuencia de la devaluación, subestimando las aspiraciones del pueblo, que serían otras de ser aplicadas mediante la política fiscal o monetaria.)

La mejora en las posiciones de la balanza de pagos derivadas de una devaluación y las medidas que se le asocian dependen fundamentalmente del índice de inflación, pero además es una función del grado de consenso político sobre la redistribución del ingreso. Por tanto, los índices estimados de inflación fijados por el FMI no son únicamente datos técnicos, sino que reflejan las posiciones políticas del Fondo en el conflicto distributivo.

Ratios de cambio; realidad y efectividad de la devaluación y de la inflación

Respecto a las consecuencias económicas de una devaluación, el FMI ha venido sosteniendo otros argumentos respecto a un país como Tanzania, considerando que el ratio de inflación ha sido mayor en este país que en el resto de los que comer-

cian con él. La devaluación del shilling se considera necesaria para compensar las diferencias de los índices, razonamiento que si bien tiene una cierta credibilidad a primera vista merece un examen sistemático.

Es útil empezar considerando una experiencia histórica con la que estoy familiarizado personalmente, que fue muy reveladora y sirvió de advertencia. Es el caso de México, donde trabajé como asesor económico. En 1981 le fue aplicado el mismo argumento de una devaluación por el FMI basándose en que la inflación era superior a la de los Estados Unidos, su principal cliente; el Banco central debía devaluar su moneda para compensar su desequilibrio.

Por las mismas razones que ya he expuesto, tanto mis compañeros del Ministerio de Industria como yo argumentamos en su momento que la devaluación sería seguida por otras, debido a que se induciría una mayor divergencia entre los índices de inflación de ambos países, generando una espiral de precios-salarios e inestabilidad financiera.

En 1981 la inflación en México era del 28 por 100 y la de Estados Unidos del 10 por 100, con una diferencia, como se ve, del 18 por 100. La devaluación indujo una secuencia de acontecimientos como los que predijimos: más inflación, demandas salariales, nuevas devaluaciones, hasta que finalmente el índice de inflación mexicano era en 1982 del 100 por 100 y la divergencia con los Estados Unidos era de 95 puntos.

Por tanto, el argumento del FMI no se basa en una experiencia práctica o en observaciones actuales, sino en la doctrina clásica de la paridad de poder adquisitivo, sobre la que existe una literatura muy amplia desde que fuera formulada por Gustav Cassells a principios de siglo. El trabajo siguiente demuestra que esta teoría es válida solamente bajo presupuestos muy restrictivos, que para ser aplicada a países como Tanzania, exportadores de materias primas, requiere amplias modificaciones, ninguna de las cuales es tenida en cuenta por el FMI.

En primer lugar, en condiciones de competencia, la teoría sólo tiene sentido si es interpretada en términos de costes más que de precios. En segundo lugar, respecto a los costes el único elemento relevante es el valor añadido respecto a las actividades internas, excluyendo los inputs exteriores de los costes totales. En tercer lugar, el problema de medir la paridad en términos de costes no es sencillo, necesitando saber si los costes relativos de los diferentes bienes y servicios difieren mucho de un país a otro. Es decir, si el ratio de coste de una unidad del bien A (manufactura) con el bien B (materia prima) es cien veces mayor en un país X que el correspondiente a un país Y, también es necesario conocer el porcentaje que representa la producción de cada bien respecto a la producción total de cada país.

Al no existir una forma única de relacionar en una moneda común a dos países los niveles de costes no se obtiene ningún beneficio de calcular promedios entre ambos países, ni existe ninguna razón que lleve a pensar que la paridad de índices es la unidad cuando la balanza de pagos por cuenta corriente está en equilibrio.

Todas estas consideraciones sugieren que la aplicación de la teoría de la paridad de compra a un país como Tanzania sólo es válida si se aplica en relación a los elementos de los costes de los productos primarios.

Pero en el caso de las manufacturas, como ya se ha explicado, es preferible un sistema de cambios múltiples, mediante subsidios y aranceles, a mantener un tipo de cambio simple, debiendo existir una amplia variedad de cambios, que sería tan deseable desde el punto de vista de la balanza de pagos como un cambio único.

Solamente cuando la tasa de cambio está tan sobrevaluada que los niveles de vida de los sectores de producción primaria están muy deprimidos respecto a los de otros sectores de productores es cuando se hace necesario un ajuste para compensar los efectos desfavorables sobre la producción de materias de exportación.

En el caso de Tanzania se ha producido un deterioro efectivo del nivel de vida de los productores del sector primario durante los tres últimos años, pero también se ha producido para el resto de los sectores de población, siendo difícil de creer que los niveles de vida de los productores primarios o de la población rural hayan descendido más relativamente que los de los empleados urbanos.

Tengo pruebas que evidencian todo lo contrario, circunstancia que es necesario observar detalladamente, considerando que la situación en otros países puede ser diferente.

Observaciones generales sobre la devaluación y su dimensión general

Resumiendo, la exposición realizada sugiere que existen poderosos argumentos en contra de la práctica de las devaluaciones e incluso mayores en contra de las devaluaciones del tipo propuesto por el FMI para África, en los países exportadores de materias primas, particularmente en un país de economía planificada, donde el tipo de cambio está dirigido fundamentalmente por el Banco central, en base a las prioridades sociales.

Esto no significa que los países con estas características no deban devaluar nunca, pero tales países deben examinar cuidadosamente las consecuencias y amplitud de cualquier devaluación propuesta, planteándose y buscando las respuestas a las cuestiones mencionadas, porque de otra forma existen serias posibilidades de que empeore la situación económica en vez de mejorar. Se deben evaluar los beneficios derivados de una devaluación general respecto a los de una acción selectiva que utilice tipos de cambios múltiples, articulándose en base a subsidios y tarifas arancelarias.

Finalmente, existe otro argumento general en contra de la devaluación aplicada a países exportadores de materias primas, sin considerar el tipo de país. Durante los últimos años, a pesar del estancamiento o caída de la demanda mundial, el FMI ha venido prescribiendo, grandes o pequeñas, devaluaciones a los países exportadores de materias primas. Suponiendo que todos hubiesen seguido las advertencias del FMI, buscando devaluar de forma efectiva sus monedas, que repercutieran sobre sus niveles de producción y exportación, ¿cuáles serían las consecuencias globales? Se produciría una caída de los precios de las materias primas y los términos de intercambio se moverían desfavorablemente a los exportadores de materias primas.

Contrastan las recomendaciones del FMI para los países pobres con las de otras organizaciones internacionales al servicio de los países ricos, fundamentalmente la Comunidad Económica Europea. Cuando se debió hacer frente a la caída de la demanda de acero, la Comisión de Industria de la Comunidad, ayudó a crear un cártel de productores para reducir la producción, cooperando para estabilizar los precios del acero.

Es interesante resaltar que, a pesar de los amplios excedentes de capacidad de producción del acero, quizá cercanos al 40 por 100, los precios no han descendido, sino que han permanecido relativamente estables. Sin embargo, los precios del café se han hundido hasta casi la mitad desde 1977, a pesar de tener un menor exceso de capacidad.

La respuesta a las dificultades que padecen los productores de materias primas no descansa seguramente en las devaluaciones recomendadas a cada uno de forma individual, sino en la realidad de acuerdos de productores que eliminen los excesos y restauren precios remunerativos.

Hemos venido considerando la política económica y las magnitudes macroeconómicas a medio y corto plazo, según las aproximaciones de ajuste del FMI, hasta ahora he argumentado que una devaluación profunda y las medidas asociadas no son, por lo general, las medidas más apropiadas; sin embargo, para alcanzar los objetivos planteados en los países exportadores de materias primas de economía centralizada es necesario realizar ajustes, ya que, como se mencionó al principio, muchas de las economías africanas se caracterizan por un fuerte desequilibrio estructural.

La corrección de estos desequilibrios requiere amplios cambios, tanto en el desarrollo como en la estructura de la economía real, para la industria y la agricultura.

Los métodos de ajuste alternativos óptimos dependen de las circunstancias económicas y políticas específicas de cada país, por su historia y su entramado institucional; es más, tales cambios deben ser realizados a lo largo de varios años, siendo necesario examinar brevemente las políticas a largo plazo, relacionadas con la corrección de desequilibrios estructurales.

Conociendo con cierta familiaridad el caso de Tanzania, puede servir éste para ilustrar mi exposición. En el caso de este país, a corto plazo, en vista de la caída de ingresos de divisas, no existe otra alternativa que intentar incrementar la producción y exportación de materias primas agrícolas. Un medio diferente para alcanzar este objetivo que no fuese la devaluación recomendada por el FMI podría basarse en una combinación de precios que incentivasen la producción, combinados con cambios en la organización de la agricultura y movilizaciones políticas. ¿Cabe interrogarse sobre el resultado de estas medidas y si corregirán a largo plazo los desequilibrios estructurales?

El principal fallo estratégico de la mayor parte de las economías de los países del Tercer Mundo, incluyendo los países africanos, reside en que continúan siendo productores y exportadores de materias primas. La demanda de estos productos se encuentra totalmente determinada por las políticas económicas de los países ricos, mientras que el subdesarrollo industrial fuerza a los países pobres a depender totalmente de los países industriales para la importación de bienes de capital, e incluso en muchos casos de la de bienes de consumo. Esta es la razón principal para el desequilibrio externo crónico de los países pobres (Taylor, 1982).

«Los países pobres sólo pueden escapar de esta trampa mediante la industrialización, que les proporcionaría altos índices de crecimiento económico y podría cubrir las necesidades básicas de su población» (Singh, 1982; JASPA, 1982). En esta coyuntura de crisis económica para la mayor parte de los países del Tercer Mundo es útil resaltar el éxito de las políticas de dos países pobres ejemplares, India y China.

Desde su independencia han seguido de forma deliberada políticas de auto-desarrollo, basadas en la «sustitución de importaciones» y «objetivos internos» para el proceso de industrialización. Durante los treinta últimos años han logrado instruir a su población, construyendo sus propias infraestructuras técnicas y científicas, desarrollando toda una gama de industrias especializadas en bienes de capital y defensa. Como resultado, el índice de crecimiento económico de India y China es relativamente independiente de la situación económica internacional.

Los factores propios, como, por ejemplo, el clima y el crecimiento de la agricultura, tienen más incidencia en la expansión de sus economías que la coyuntura internacional. Resultando irónico que estos dos países se encuentren mejor situados dentro de la estructura económica mundial que un país tan rico como Francia.

Francia ha tenido los ratios de crecimiento industrial más altos de las dos últimas décadas, tiene elevadas reservas de oro, contando con un presidente socialista preocupado por la expansión del empleo y la producción, pero el crecimiento econó-

mico del país está muy influenciado por las políticas económicas del canciller Kohl y el presidente Reagan (Singh, 1983).

Se podría argumentar que China y la India han logrado un cierto éxito en la creación de economías autocentradas debido a sus grandes dimensiones; aunque existe algo de verdad en esta afirmación, no es menos cierto que también Francia es un gran país, así como México y Brasil, siendo cada uno de ellos más ricos que China e India; sin embargo, tanto Méjico como Brasil se encuentran actualmente inmersos en una profunda crisis económica, hasta tal punto que si no renegocian o dejan de pagar sus enormes deudas se verán condenados a crecimientos muy bajos e incluso negativos durante el resto de la década.

La razón esencial de las diferencias existentes entre ambos grupos de países reside en que durante los últimos quince años Brasil y Méjico eligieron estrategias de industrialización extrovertidas y orientadas a la exportación, sustentadas en las corrientes de inversión internacional y el endeudamiento exterior. Como consecuencia han generado estructuras industriales muy dependientes de las importaciones, que las hicieron muy vulnerables a las variaciones de la economía mundial cuando ésta dejó de expandirse.

A pesar de que las economías africanas tienen un nivel de industrialización muy reducido, su débil estructura industrial sufre el mismo tipo de impactos. La diversificación realizada partiendo de la simple producción de materias primas agrícolas y minerales, llegando a producir algunos tipos de manufacturas, no logró reducir su grado de dependencia de la economía mundial; por el contrario, parece que se ha incrementado (Wangwe, 1983).

Por lo que se refiere a la política económica, la única vía de salvación de los países africanos para preservar su industria y hacerla viable es intentar reducir su propensión a importar, exprimiendo su capacidad importadora tanto como les sea posible. Dado el bajo nivel de industrialización de los países africanos y la coyuntura económica internacional, dichos objetivos son extremadamente difíciles de alcanzar, requiriendo medidas especiales, claramente definidas para cada país en base a su situación particular (Singh, 1982), debiendo discutirse dichas medidas, por tanto, para el caso específico de Tanzania.

Para concluir, no puede extraerse de la crisis actual que la industrialización de los países africanos durante las dos últimas décadas fuera un error, pero sí que las estructuras industriales que se desarrollaron eran inviables e inapropiadas.

En el contexto de una economía mundial que está creciendo lentamente un futuro desarrollo industrial requerirá la reconsideración de sus políticas de industrialización, siendo necesario que se consideren muy especialmente objetivos como la distribución del ingreso, pautas sostenidas de demanda de consumo, una relación adecuada entre el desarrollo industrial y agrícola, tanto a corto como a largo plazo, considerando en los países pequeños formas apropiadas de cooperación económica con otros países.

Conclusión

He venido argumentando en este artículo que la actual crisis tiene importantes implicaciones para el desarrollo nacional y rural en África, tanto a largo como a corto plazo.

Las políticas que están siendo recomendadas por el FMI y el Banco Mundial para hacer frente a la crisis no son las únicas viables, no siendo incluso las más apropiadas para corregir los desequilibrios estructurales básicos de las economías africanas, básicamente exportadoras y con planificación central. En muchos casos tales medidas empeorarán la situación social y económica en vez de mejorarla, pero

incluso en el caso de que tengan éxito el precio del ajuste será pagado de forma desproporcionada por los grupos de asalariados y estratos de más bajos ingresos.

En términos generales, no es difícil de observar que aunque los argumentos del Fondo Monetario Internacional y del BM están expuestos en términos técnicos, están empleando la crisis para empujar a los países africanos socialistas de planificación centralizada hacia un desarrollo no socialista basado en la economía del mercado, ofreciendo a cambio algún tipo de ayuda.

El modelo alternativo al que se enfrentan estos países es intentar solventar sus graves crisis desde el interior de la estructura de sus economías reales y sus instituciones políticas, sin la asistencia del FMI y del BM. De forma que, dada la difícil coyuntura económica, el último método parece muy difícil, particularmente a corto plazo, aunque no es en absoluto inviable (Singh, 1984). Esta es la grave elección a la que se enfrentan los países africanos en nuestros días.



AMNISTÍA INTERNACIONAL

INFORME 1989

PÁGINAS HUMANAS PARA LEER Y ACTUAR

Envíe este cupón a: AMNISTÍA INTERNACIONAL, Paseo de Recoletos, 18 - 28001 Madrid.
Quiero recibir (indique número) ejemplar/res del Informe Anual 1989

Precio por ejemplar: 1.500 pesetas

Forma de Pago:
(indique lo que proceda)

- ☐ Mediante talón nominal
☐ Mediante contrarreembolso

Nombre: _____

Dirección: _____

Provincia: _____

C.P.: _____

Respuestas del Estado africano a los ciclos y crisis económicos. Notas preliminares

Thandika Mkandawire *

El observador de las políticas económicas de los gobiernos africanos durante las dos últimas décadas se asombra ante los giros políticos ocurridos en casi todos ellos. Algunos se dan a través de golpes de Estado para efectuar el cambio de funcionarios; sin embargo, en numerosos casos no se verifican modificaciones palpables en el gobierno. Sencillamente, el presidente promulga una «declaración» que modifica la política, a veces con implicaciones de gran alcance. La *Declaración de Arusha* de Nyerere, el «Avance a la izquierda» de Obote, la *Declaración Mulungushi* de Kaunda, la proclamación de «autenticidad» de Mobutu, figuran entre algunos de los cambios políticos más conocidos sin previa modificación patente del aparato del Estado.

La mayor parte de los cambios políticos han sido desde un orden capitalista «liberal» hacia otro «estatista y nacionalista», y viceversa. La regularidad de este fenómeno es tal, que Mansour (1978) la ha elevado a la categoría de «ley básica de la formación social periférica», que comprende la «alternancia entre el capitalismo liberal y el capitalismo burocrático». Con base en esta ley pronostica lo siguiente:

Es muy probable que en numerosos países africanos *donde no se permiten o se malogran las condiciones subjetivas para ejercer una estrategia auténtica de desarrollo autónomo y autosuficiencia* alternarán una y otra vez una interminable sucesión de regímenes liberal-capitalistas y burocrático-capitalistas, uno haciendo alarde de su microeficiencia (incentivos, propiedad privada y control, etc.), mientras el otro presume de macroeficiencia (una tasa más alta de inversión, mayor empleo), pero ambos ineficaces debido a su patrón común de dependencia.

Al respecto cabe recordar: a) La condición de que esta «ley» se aplica donde no se ha adoptado una estrategia eficiente de desarrollo autosuficiente, y b) El criterio de eficiencia utilizado para sustentar uno u otro tipos de regímenes.

Respecto a América Latina, Petros discute el fin del capitalismo de Estado en términos muy parecidos a lo expresado por Mansour en sus escritos.

* Secretario ejecutivo del Conseil pour le Developpement de la Recherche Economique et Sociale de l'Afrique (CODESRIA). Tomado de *Revista del Colegio de México*. Traducido por María de la Paz Mayo.

La experiencia histórica del Estado capitalista indica, sin embargo, que, sean cuales fueren la dinámica y motivación iniciales, a la larga el estancamiento, la privatización y dependencia externa son fenómenos recurrentes. La inserción en el mercado mundial bajo condiciones inequitativas conduce a una crisis dirigida a la disolución del estatismo como modo de producción (página 89).

Sin embargo, hay una diferencia entre las teorías de Mansour y las de Petros. Mientras aquél describe un proceso cíclico y pronostica alternancias, el segundo es parcial y lineal; sólo explica por qué declinará el Estado capitalista después de algún tiempo, pero sin indicar por qué surgió o puede surgir para reemplazar a un mercado capitalista liberal.

Muchos otros autores han advertido estas alternancias y han ofrecido diversas explicaciones sobre su origen. Algunos las atribuyen a la importancia de los individuos o dirigentes carismáticos de la política africana, y los cambios políticos se toman como reflejo del carácter progresista o retardatorio en lo intelectual o ideológico, o a la sustitución de un líder por otro. Esta interpretación está reforzada por la peculiar abundancia de escritos sobre «el pensamiento político africano», reducidos a compilaciones de discursos y escritos de dirigentes políticos africanos (sobre todo jefes de Estado) sin gran referencia al contexto social o fuerzas que modelan o están representadas por ese «pensamiento». Así la vía decididamente capitalista de Malawi se explica por la educación calvinista de Banda. El «humanismo» y estatismo de Zambia se atribuyen a la perspectiva profundamente religiosa de Kaunda, y así por el estilo.

La fragilidad del Estado en Africa y la posición dominante que disfrutaban algunos dirigentes pueden apoyar el enfoque de algunos escritores sobre el pensamiento de ciertos individuos clave. No hay duda de que los Nkrumah, Kenyatta, Senghor, Nyerere, Houphouët-Boigny, ya no digamos personajes más excéntricos como Idi Amin y Bokassa, han dejado visibles huellas en la política ejercida por sus gobiernos. Sin embargo, concentrarse en las preocupaciones idiosincrásicas de esos individuos, aunque proporciona material biográfico interesante, subestima la importancia de las fuerzas socioeconómicas que sostienen o debilitan las inclinaciones personales de este o aquel líder «carismático», y deja sin explicación la enorme brecha existente entre muchas de esas declaraciones y las prácticas socioeconómicas de sus países. Si no se adopta un punto de vista puramente solipsista debe prestarse atención a los fenómenos socioeconómicos a menudo causa de las respuestas intelectuales o ideológicas de los hombres que están en el poder.

Otra explicación de la inestabilidad de las políticas de las economías africanas se basa en la idea de que sus gobiernos son inestables. Paradójicamente, la inestabilidad de los gobiernos se atribuye a veces a la imposibilidad de la élite dominante para ejercer a largo plazo políticas estables en interés nacional o incluso de las clases. Este *petitio principii* a veces se explica después como falta de cohesión de clase en las élites dominantes. La imagen de esto es que si bien la clase gobernante constituye una «clase en sí», todavía necesita convertirse en una «clase para sí», y mientras tanto existe una lucha interna casi suicida por el reparto del excedente económico, que conduce al cambio de un régimen a otro. La inseguridad sobre los beneficios alienta una mentalidad saqueadora que debilita la cohesión de clase y contribuye a una mayor inestabilidad de la economía y la sociedad. Estas fracciones de la clase gobernante (generalmente consideradas como una «burguesía del Estado»), protegidas por la burocracia estatal, favorecerán un régimen más estatista, mientras los elementos nativos aliados al capital extranjero favorecerán una economía abierta y liberal. Lo mismo sucede con la clase agraria capitalista, que puede oponerse a las condiciones de comercio desfavorables a menudo impuestas a la agricultura por una

industrialización estatista. En el curso de estos conflictos internos de clase triunfará una u otra de estas fracciones e impondrá sus políticas. Existe cada vez más bibliografía sobre el contenido de clase presente en las políticas de Estado africanas, que ha contribuido a la crítica de las explicaciones de la política económica de este continente fundadas en el «carisma» de sus líderes. También ha contribuido a desmitificar el Estado al relacionarlo con las fuerzas sociales reales y sus respuestas a los intereses de las diferentes clases sociales.

Sin embargo, a pesar de las numerosas perspectivas brindadas por el nuevo enfoque, su mayor debilidad estriba en la ausencia de una explicación clara sobre la dinámica de las fuerzas económicas fundamentales que provocan una u otra respuestas del Estado, lo cual propicia el ascenso de alguna fracción y no de otras. *¿Qué ocurre en la economía que tarde o temprano debilita determinada política económica y obliga a cambiarla, ya sea por obra del gobierno o derrocándolo?* Además, gran parte de este planteamiento se ha visto viciado por un intento mecánico de relacionar cada grupo de políticas con el «contenido de clase del Estado». Este enfoque mecánico fracasa al enfrentarse con el fenómeno común de los cambios drásticos en la política sin ningún cambio evidente en la base social del aparato del Estado o en la constelación de sus fuerzas sociales. Además, la tendencia a analizar la política del Estado sin una clara comprensión de su propósito o de la dinámica de las fuerzas socioeconómicas que debe enfrentar por mal ideada o ejecutada que esté, obliga a los analistas a atribuir su fallo a factores subjetivos como la ignorancia, la falta de fibra moral, contradicciones entre los elaborados de las políticas, o sencillamente las desechan como característica común de las «políticas de la pequeña burguesía».

La segunda hipótesis probablemente parezca extrema, considerando la demanda de mayor ayuda e inversión de parte de los gobiernos africanos. Sin embargo, debemos mencionar lo siguiente:

a) Incluso en los países que han favorecido el capital extranjero, como Costa de Marfil o Malawi, cada vez es mayor la proporción de inversión cubierta con los ahorros domésticos.

b) En general, los gobiernos africanos han expresado, por lo menos colectivamente, su preferencia por el comercio en vez de recibir ayuda internacional, supuestamente sobre la base de que disfrutaban de mayor libertad para disponer de sus utilidades en divisas que cuando reciben fondos de ayuda.

c) Como tendremos ocasión de discutir más adelante, siempre que los gobiernos africanos han aumentado sus recursos a través de mayores ganancias en divisas, han tratado de incrementar el control de sus economías, mediante planes ya sea de nacionalización, inversión conjunta o planes de fortalecimiento de la economía doméstica.

d) El nacionalismo sigue siendo una fuerza política, y los dirigentes africanos tienen que demostrar de vez en cuando, por lo menos en lo retórico, que participan de este sentimiento. Sin embargo, las aspiraciones «nacionalistas» del Estado se verán frenadas por tres realidades de sus economías: 1) La dependencia en el comercio exterior para lograr inversión decisiva y otros bienes de consumo y, por tanto, la prioridad de las consideraciones en torno a las divisas en su política económica; 2) La integración de la economía en un sistema capitalista mundial dominado, cada vez en mayor medida, por las compañías transnacionales, y la necesidad de tomar en cuenta las políticas de inversión y comercio de las corporaciones transnacionales; 3) La incapacidad estructural o histórica de la clase gobernante para emprender y aplicar con firmeza los programas nacionales de desarrollo, a través de todas las vicisitudes de la acumulación periférica.

Este grupo de hipótesis explica parcialmente las evidentes ambigüedades de la

burguesía nacional africana, atrapada entre dos fuerzas: el nacionalismo económico y la internacionalización de la producción capitalista. Y según Lubeck (1982): «observar a la burguesía es observar la interacción de esas dos fuerzas en una sola sociedad».

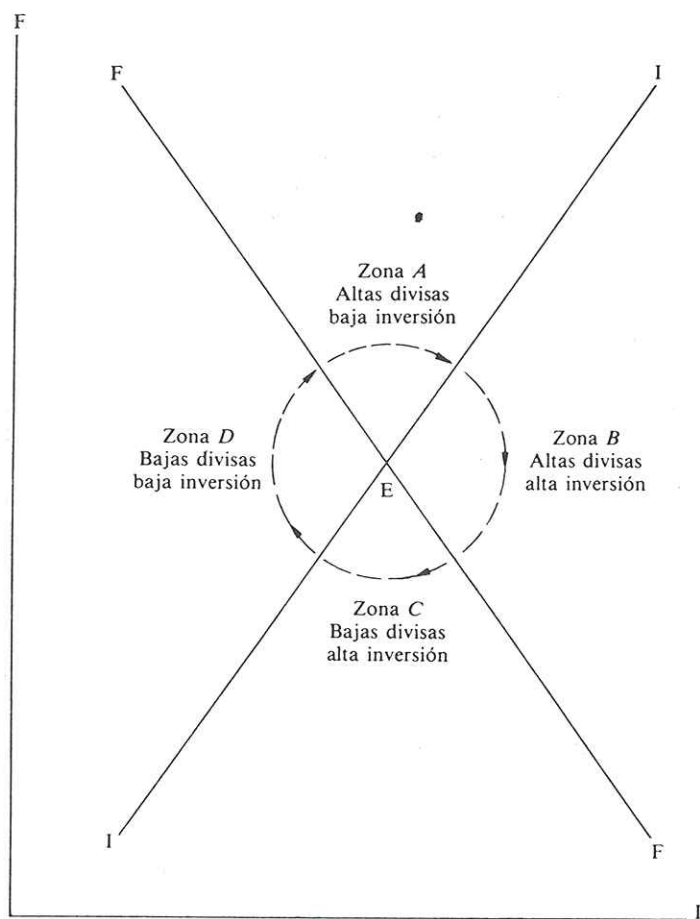
El modelo

El modelo aquí descrito podría expresarse matemáticamente de manera más compacta. Sin embargo, nos limitaremos a una exposición verbal y gráfica. La conocida teoría de la acumulación, de Marx, basada en dos departamentos, nos dice que en una economía cerrada la tasa de expansión del departamento I, donde se producen los bienes de capital, establece el límite superior de la tasa general de inversión de la economía. En los países africanos que prácticamente no producen bienes de capital (Mkandawire, 1982) el sector exportador sirve como «sector cuasi-bienes de capital» porque, aunque gana las divisas necesarias para comprar bienes de capital, no tiene los nexos estructurales con otros sectores generalmente accesibles para un sector interno de bienes de capital, debido a que el sector de exportación no va de acuerdo con la estructura de la demanda de la economía interna.

Entonces, en una «economía abierta» de este tipo la preocupación primordial del Estado estriba en la obtención y crecimiento de la reserva de divisas. El crecimiento de las reservas de divisas estará determinado por la tasa de crecimiento de las utilidades de exportación menos la tasa de crecimiento de las importaciones. En cambio, la tasa de crecimiento de las importaciones estará determinada en gran medida por la tasa de expansión de la economía. Para simplificar más las cosas, la tasa de crecimiento de las importaciones está relacionada positivamente con la expansión de la inversión. En cuanto a las inversiones, serán la suma de las inversiones extranjeras y nacionales. Veamos primero la inversión extranjera. Además del «ambiente» general de inversión (estabilidad política, docilidad o militancia de los trabajadores, posición ideológica del Estado, etc.), la inversión extranjera será estimulada por tendencias favorables en la posición de la balanza de pagos de la economía, ya que esto asegura su capacidad para financiar la repatriación de las utilidades posteriormente. Sin embargo, hay un «freno» interno en la expansión para la inversión extranjera: mientras mayores sean las existencias de inversión extranjera, mayor será la reticencia de los capitalistas extranjeros, ya que temen el «exceso de riesgo» o «jugárselo todo a una carta». Por tanto, puede suceder que, incluso con tendencias favorables en la balanza de pagos, rentabilidad continua y un ambiente de inversión general positivo, los capitalistas foráneos rehusen invertir y de hecho empiecen a repatriar sus utilidades, debilitando así la posición de la balanza de pagos, que a su vez propicia mayor renuencia de los inversionistas extranjeros a invertir, y esto acelere la repatriación de utilidades antes que el desplome de divisas obligue al gobierno a imponer restricciones a la transferencia de fondos al exterior.

Estas dos tendencias de la inversión y las divisas creará un desplome caracterizado por los bajos niveles del crecimiento y la balanza de pagos. Sin embargo, a menos de que ocurra algo drásticamente adverso a las exportaciones, el bajo nivel de inversión y reducción de importaciones puede conducir al incremento de las divisas. El capital extranjero puede otra vez empezar a invertir y por un momento la economía puede disfrutar de un «auge» con mayor inversión foránea y una buena posición de la balanza de pagos. Tarde o temprano la demanda de bienes de consumo superará la capacidad de importación, ocasionando la desaceleración de la inversión. Entonces el patrón que siguen estos movimientos es cíclico.

El diagrama presentado a continuación puede resultar huerísticamente más claro. La figura I muestra el proceso antes descrito. Los dos programas (DD) e (II)



indican los puntos en que se encuentran las divisas (DD) y la inversión (II) en su estado normal. Las declinaciones de la curva se obtienen de suponer que una situación sana de las divisas estimula la inversión, mientras que un alto nivel de inversión actúa negativamente en la acumulación de divisas. Las flechas indican la dirección del movimiento de la economía conforme se hacen ajustes. Los movimientos cíclicos ilustrados aquí son «espontáneos», en el sentido de que no son ocasionados por ningún gobierno. El diagrama muestra cuatro zonas donde la economía se encontrará en algún momento dado.

Zona A: elevado índice de divisas, bajo índice de inversión; zona B: divisas e inversión elevadas; zona C: inversión alta, divisas bajas, y zona D: inversión y divisas bajas.

Bajo algunas hipótesis matemáticas económicamente razonables se puede deducir la curva punteada y la dirección del movimiento de la curva. Ignoramos si el movimiento es o no convergente hacia el punto de equilibrio E.

Lo que se obtiene es un modelo de «ciclo comercial» para una economía sumamente dependientes de la inversión extranjera y de las utilidades en divisas. Este modelo proporciona entonces la ilustración económica de la naturaleza cíclica de las políticas del Estado. Al recordar que éste es «partidario» del desarrollo, y que el control nacional constituye un objetivo deseable, se puede pasar al análisis de las respuestas del Estado a estos ciclos, para lo cual resulta de provecho recurrir a los ejemplos.

Supongamos que la posición inicial de una economía está en A. El Estado, al pensar que el bajo nivel de inversión no garantiza la disponibilidad de divisas, intentará estimular la inversión. Dada la disponibilidad de divisas, el Estado tratará de hacerlo con inversión nacional controlada. En el caso de Africa, donde la clase capitalista es débil, el Estado emprenderá directamente la inversión. Con frecuencia se dará a los programas del Estado un tono nacionalista y estatista. De hecho, el Estado puede no sólo invertir en nuevas actividades, sino también nacionalizar el capital extranjero y tener los medios para pagar una «compensación justa» al capital extranjero por los bienes nacionalizados. Se podría adoptar un programa populista para movilizar los ahorros domésticos.

Los ejemplos de este tipo de reacción ante una inversión extranjera y disponibilidad de divisas lentas los proporcionan casos como Ghana durante el mandato de Nkrumah, el «humanismo» de Zambia, la Tanzania de Ujamaa, el «avance a la izquierda» de Uganda, la «autenticidad» de Zaire. También son indicativos de este tipo de reacción los programas nacionalistas de las economías ricas en minerales. Tomemos el caso de Zambia: en el momento de su independencia los precios del cobre iban en aumento y Rodhesia del Sur dejó de absorber sus ingresos, por lo que Zambia se encontró con una balanza comercial favorable y cuantiosas reservas de divisas. El programa de desarrollo inicial del gobierno supuso que la inversión extranjera estaría atraída al sector manufacturero, mientras el Estado usaría las utilidades de los minerales para proporcionar la infraestructura social y económica necesarias. Resultó que no llegó capital extranjero, y Zambia continuó acumulando reservas de divisas debido a la «baja capacidad de absorción». De acuerdo a lo previsto, por nuestro modelo, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto. La *Declaración Mulungushi* pedía la nacionalización de las minas, y se proclamó una nueva ideología «humanista». El Estado estableció un programa de extensa importación en sustitución de la inversión, y por un tiempo Zambia disfrutó de un alto nivel de crecimiento con una posición favorable de divisas. Por tanto, la economía avanzó hacia la zona B. Tanzania muestra también un proceso semejante; durante la primera mitad de la década de su independencia disfrutó de una balanza comercial positiva, y a pesar de su política, claramente establecida en favor del capital extranjero, dicho capital no llegaba, por haber elegido las empresas internacionales a Kenia como centro de sus actividades en la ahora extinta Comunidad del Africa Oriental. Nuevamente el Estado se vio precisado a intervenir. Cabe mencionar también el agotamiento de reservas de plata de Nkrumah en los bancos británicos, más o menos bajo el mismo modelo. En todos estos casos el modelo pudo estimular el crecimiento y durante algún tiempo éste fue posible con una disponibilidad significativa de divisas. Sin embargo, según lo muestra nuestro modelo, en todos estos casos el programa de alta inversión ocasionará tarde o temprano graves tensiones en la balanza de pagos. La rapidez en la presentación de estas presiones dependerá de los precios mundiales de los principales bienes de exportación. Sin embargo, incluso suponiendo estabilidad en los precios, la alta elasticidad de la importación durante el proceso de industrialización empujará a la economía primero hacia la zona C, donde el programa de inversión se mantiene alto con el empeoramiento de la posición de las divisas. El Estado se verá obligado a gastar más de sus reservas de divisas y a pedir préstamos al mercado internacional. Sin embargo, esto no puede

continuar eternamente y la economía se deslizará a la zona *D*, donde tanto la inversión como las divisas son malas. En estos casos suele apelarse a un cambio de política. Primero se trastocará la macroeficiencia (alta inversión agregada), de la cual podría haberse enorgullecido el Estado y haber justificado todo tipo de micro-ineficiencias (burocracias abultadas, industrias de capital intensivo con manejo ineficiente). El programa nacionalista se enfrentará a los ataques de las fuerzas internas y externas conforme sean mayores las demandas de privatización y «apertura» de la economía. En algunos casos podría ser derrocado el gobierno; sin embargo, a menudo puede cambiar su política el Estado sin cambios drásticos de funcionarios. Para obtener fondos del exterior el Estado podría necesitar negociar con el FMI y el Banco Mundial. Los titulares del *International Herald Tribune* del 23 de octubre de 1982: «Desperate Tanzania Returns to IMF, World Bank Talks», ilustran el desenlace de este drama. El acostumbrado condicionamiento de los programas de ajuste del FMI y del Banco Mundial demandarán la desnacionalización, un grave recorte en los programas de inversión mediante riguroso freno a las importaciones, devaluación, etc., con la esperanza de que esto conduzca a la obtención de divisas mientras la economía entra de nuevo a la zona *A*. Entonces puede iniciarse otra vez todo el proceso.

Cabe señalar que una economía que empieza en la zona *D*, con baja inversión extranjera y bajas divisas, seguirá un programa característico del FMI como forma prioritaria de cumplimiento; sencillamente, no habrá sitio para los programas nacionalistas. En el mejor de los casos, el gobierno estimulará las exportaciones tradicionales, creará una capacidad aceptable de ganancia de divisas, invitará a la inversión extranjera mediante toda una serie de medidas, incluyendo la represión a los trabajadores, para poder mover la economía de la posición *D* a la *A* y a la *B*. Este caso se ve ilustrado por países como Malawi después de su independencia. Sin embargo, incluso en el caso de países como éste, si la discrepancia entre el crecimiento potencial indicado por la capacidad de divisas y el nivel de la inversión real de capital extranjero son grandes, el Estado intervendrá mediante la inversión directa del excedente frecuentemente retenido por las cámaras de comercio.

En una situación donde la mejora de la balanza de pagos va acompañada de una significativa inversión extranjera, la acción del Estado puede quedar limitada a inversiones conjuntas y asociaciones con capital extranjero. Podría exigirse la ubicación de nacionales en puestos clave (como en Costa de Marfil) e incluso estimular la concesión de préstamos a nacionalistas para comprar acciones de compañías extranjeras. El programa nacionalista será básicamente capitalista liberal. Durante esta fase se pueden incluso advertir señales de surgimiento de una «burguesía nacional» fuertemente apoyada por el Estado. Parece ser que Costa de Marfil estuvo en esta situación durante el reciente auge de precios de bienes de consumo. Sin embargo, incluso en este lugar el alto nivel de inversión (tanto extranjero como nacional) debilitará gradualmente la balanza de pagos del país y conducirá a una demanda masiva de reajuste estructural típico del FMI. Esto puede incluir un torrente de bancarrotas entre la naciente burguesía e incluso a un mayor control de los extranjeros sobre la economía.

En cuanto al conflicto interno de clase y entre clases, es evidente que cada grupo de políticas de ajuste favorecerá o desfavorecerá a ciertas fracciones de las clases gobernantes. La respuesta nacionalista estatista suele contar con el apoyo de la incipiente burguesía del Estado creada por este proceso. Todo capitalista agrícola se opondrá a esta opción debido a la tendencia inherente a ella de volver desfavorables las condiciones comerciales para la agricultura, debido a la alta protección brindada a sus ineficientes industrias. Los campesinos podrían oponerse también a esta estrategia por las mismas razones. Los trabajadores pueden ser cooptados en este programa debido a que el alto nivel de inversión y los altos salarios que acompañan

a la industrialización de capital intensivo mejoran los ingresos del empleado, pero desertarán de las filas cuando empiece a fallar el programa. La reducción y escasez de divisas convencerá incluso a la burocracia del Estado de que debe abandonarse el modelo adoptado, por lo que podrían presentarse cambios en la política sin modificación alguna en la composición de clases del Estado. En el caso de Zambia, los sindicatos laborales que antes aplaudieron la nacionalización han empezado a pedir abiertamente la desnacionalización, por lo menos en el sector no mineral, sobre la base de que el Estado no sólo los está explotando, sino que además lo hace de manera ineficiente.

Comentarios finales

Nuestra discusión ha sido muy esquemática, y la presentación de ejemplos inevitablemente tuvo un carácter impresionista. No obstante, nos parece que una elaboración más precisa del proceso de acumulación que siga la forma antes indicada puede proporcionar antecedentes útiles para el debate sobre el Estado y la acumulación en África. Muy especialmente nos podría ofrecer bases teóricas para la «ley» de alternancia de Mansour. Además, podrían quedar resueltas algunas disputas en torno a si las relaciones del Estado con el capital extranjero en las economías africanas son de colaboración o de conflicto, o por lo menos quedarían en una vía provechosa, si se presta atención a la naturaleza de los problemas económicos que enfrenta el Estado en los movimientos cíclicos de sus economías.

Adviértase también que las políticas del gobierno pudieran no siempre ser tan rápidas como cabría esperar. La inercia política y burocrática, especialmente cuando no hay una fracción hegemónica coherente dentro del aparato del Estado, o cuando las clases y sus conflictos internos han conducido a un estancamiento, simplemente puede imposibilitar al Estado para hacer los ajustes exigidos por su estatus periférico y su forma de integración al sistema mundial. Esto me recuerda la historia de Ghana después del mandato de Nkrumah (Ninsin, 1982). En una situación así la economía puede estar estancada en baja inversión y bajas divisas durante largo tiempo. También las presiones extranjeras pueden bloquear ciertas opciones (especialmente las de carácter nacionalista) mediante la desestabilización sistemática o derrocamiento del gobierno.

Este breve comentario muestra que los estudios donde se considera la nacionalización de las industrias africanas como un giro del régimen hacia el socialismo no entienden la verdad. En general, la nacionalización es simplemente un intento nacionalista de controlar la economía y acelerar el proceso de acumulación, y como tal debe juzgarse.

Por último, la crisis económica global de la actualidad ha debilitado las reservas de divisas prácticamente de todos los países africanos, con la consecuencia inmediata de que si bien la década de los sesenta y principios de los setenta fueron la era de la nacionalización, los ochenta son la época de la desnacionalización, conforme un país tras otro sucumben a las exigencias del FMI. El «avance a la derecha» generalizado en África se explica parcialmente por el hecho de que la mayoría de los países africanos se encuentran en la categoría de baja inversión y bajas divisas.

Por una estrategia de desarrollo autocentrado en Africa

Samir Amin

1—El deterioro de la situación económica y social en el conjunto del Tercer Mundo, y especialmente en la gran mayoría de los países africanos durante la última década, obliga cada vez más a las distintas autoridades, nacionales e internacionales, a aceptar un cuestionamiento de los dogmas de la teoría y de la práctica de las políticas convencionales de desarrollo. La cuestión de la opción alternativa de un desarrollo «autocentrado», en oposición a las políticas convencionales «extravertidas», ha alcanzado una popularidad repentina e inesperada. Este éxito y el uso de esta expresión que implica, por parte de unos y otros en contextos diferentes (o incluso en discursos extremadamente vagos), impone la precaución de precisar previamente la historia de la elaboración de este concepto y de su contenido antes de considerar la cuestión de su operatividad en las condiciones actuales de Africa.

1.1. - La primera formulación que emitimos de este concepto se remonta a 1957, y dice literalmente: «Mientras que en el modelo de la acumulación autocentrada las relaciones exteriores se someten a la lógica y a los imperativos de la acumulación interna, en el modelo de desarrollo extravertido, por el contrario, son las relaciones con el exterior las que determinan casi totalmente el ritmo y las características de la acumulación interna.» Esta fórmula concisa sigue siendo nuestra definición de esta cuestión, pero merece una explicación.

1.2. - La oposición modelo autocentrado/modelo extravertido no se deducía de una teoría abstracta formulada *a priori* o de un deseo ideológico. Era la conclusión de un análisis histórico comparativo que, evidentemente, como cualquier interpretación de los hechos, se insertaba dentro del marco de una teoría (la de la acumulación a escala mundial).

Se tenían en cuenta tres familias de experiencias históricas: a) la del desarrollo de los países y regiones del capitalismo desarrollado (Europa, Japón, América del Norte), considerado en su sentido histórico más amplio, desde la época mercantilista hasta nuestros días; b) la del desarrollo de las regiones del capitalismo subdesarrollado (Asia, Africa y América Latina), considerado en el mismo sentido amplio; c) la del desarrollo socialista contemporáneo (URSS, Europa del Este, China).

La teoría de la acumulación a escala mundial, explícita, considera que la historia del desarrollo (capitalista) desde sus orígenes (hacia el siglo XVI) y hasta nuestros días no es la de desarrollos «nacionales» yuxtapuestos, con unos «rezagados» que repiten el camino de sus predecesores, sino la de un sistema mundial que se distribuye en centros motores y periferias arrastradas y dominadas, modeladas por los centros. La unidad (el sistema economía-mundo, «World economy») es lógicamente

superior a las partes («las economías locales»); no es la suma de las mismas. Esta teoría, elaborada progresivamente con un esfuerzo colectivo en el que reconocemos los nombres estrechamente asociados de Samir Amin, Giovanni Arrighi, André Gunder Frank e Immanuel Wagerstein, desarrolla cuatro conclusiones que recordaremos brevemente:

I) La teoría se oponía a la concepción de las «etapas sucesivas» del crecimiento, tanto en su versión convencional (a la Rostow) como en una versión que toma del marxismo el lenguaje de sus conceptos (modos de producción sucesivos).

II) Consideraba, por tanto, que el «subdesarrollo», lejos de ser un sinónimo de «retraso», es el producto del «desarrollo». El desarrollo de unos (los centros) y el subdesarrollo de otros (las periferias) son los productos concomitantes del mismo desarrollo (la acumulación mundial).

III) Reconocía, entre los «centros» y las «periferias», situaciones de «semi-periferia» que basculan en un momento dado, ya sea para acceder al estadio de «nuevos centros» o para caer en la situación de «periferias». Sin embargo, el espacio de indeterminación que permitía el paso del estadio de semiperiferia al de centro deja de existir a partir de finales del siglo XIX. El sistema mundial es ya de tal envergadura, que la mundialización del ordenamiento del proceso productivo por parte del capital de los monopolios de los centros (hoy en día, las multinacionales) ha dado un salto cualitativo, reduciendo este margen a la nada: no hubo ningún nuevo Japón desde el Japón (y los países de reciente industrialización actuales no son «japoneses» en gestación) (1).

IV) Deducía de las conclusiones anteriores que el desarrollo del «Sur» (diferente del crecimiento dominado periférico) implicaba una «ruptura» con la lógica de la acumulación mundial y no podía, por tanto, inscribirse en la misma.

1.3. - La teoría que esbozamos, sin que tratemos aquí de demostrarla, permitía volver a clasificar todos los aspectos principales del fenómeno del desarrollo histórico del mundo moderno.

En los centros el desarrollo ha sido siempre autocentrado desde el principio, pero nunca ha sido autárquico (sin relaciones con el exterior); todo lo contrario. Los centros que progresaron a ritmos más acelerados son aquellos que disfrutaron de un dominio más extenso o más profundo sobre periferias que sometieron a las exigencias de su acumulación autocentrada. En algunos períodos un centro que se convirtió en hegemónico a escala mundial (Gran Bretaña, de 1763 a 1870; los Estados Unidos, de 1944 a 1970) preconizó la ideología de la libertad económica bajo formas adecuadas al sistema de la época: libertad de comercio para la *pax británica* y libertad de empresa para la *pax americana*. Los centros no hegemónicos no aceptaron nunca someterse a las consecuencias de esa ideología. Preconizaron (y sobre todo practicaron) diversas formas de proteccionismo (en el sentido amplio de la palabra) que necesitaban para evitar su periferización. En muchos casos consiguieron acelerar su desarrollo autocentrado e incluso cuestionar las hegemonías. Este proteccionismo (frente a los centros hegemónicos) no era sinónimo de autarquía, sino todo lo contrario, de apertura agresiva hacia las periferias. Centros hegemónicos «liberales» o no hegemónicos «protegidos» inscribieron, unos y otros, su acumulación autocentrada en una división internacional del trabajo modulada por ellos mismos.

Por el contrario, los países socialistas (en el sentido restrictivo: URSS, Europa oriental, China, Corea del Norte, Vietnam...), que son países «menos avanzados» (en distintos grados y con la excepción de Checoslovaquia y Alemania del Este), no sólo adoptaron todos el principio de un desarrollo autocentrado (someter las relaciones externas a su acumulación interna), sino que pasaron prácticamente por una fase casi autárquica. Esta autarquía no venía impuesta por el sistema mundial

en vez de buscada por ellos mismos durante dos décadas o más, sino también estaba aceptada y se extendía incluso a los pequeños países de Europa del Este durante los años cincuenta y los planes estalinistas. El hecho de que la URSS, junto con la Europa del Este, intente reestructurar este sistema por medio del Comecon (y también incluir algunos recién llegados extraeuropeos), que se abra aún más a la división internacional del trabajo, no quiere decir en absoluto que estos países hayan renunciado al principio del desarrollo autocentrado.

El Tercer Mundo forma parte del sistema de la división internacional del trabajo capitalista en posición de periferia. No practicó nunca una estrategia autocentrada; todo lo más, en determinadas circunstancias anunció el cuestionamiento de determinados aspectos de la estrategia periférica extravertida. También se benefició indirectamente en algunos casos del relajamiento del control del centro durante las guerras y las crisis, y es interesante destacar que suele ser en estos períodos cuando se inicia un desarrollo autocentrado que en muchos casos se destruye en la fase ulterior. Incluso durante la guerra de liberación, los maquis, obligados a la autarquía, llevaron las transformaciones hacia un desarrollo de base autocentrado más lejos que en ningún otro caso en el Tercer Mundo. Consignas como *self reliance*, «contar con las propias fuerzas», «chuche», etc., que tienen evidentemente un sentido político (por el que confesamos todas nuestras simpatías), nacieron de un movimiento popular de liberación nacional. No fue por casualidad.

1.4 - Para intentar esquematizar la oposición modelo autocentrado/modelo extravertido propusimos un esquema con cuatro sectores (1, Producción de medios de producción; 2, Producción de bienes de consumo de masas; 3, Producción/consumo de lujo; 4, Exportaciones). Definimos el modelo autocentrado como el que está determinado por la articulación de los sectores 1 y 2, y el extravertido como el que está determinado principalmente por la articulación de los sectores 4 y 3.

El esquema propuesto nos lleva a una conclusión principal. En el modelo autocentrado las remuneraciones del trabajo (salarios y rentas de los agricultores) deben aumentar necesariamente al ritmo del progreso de la productividad. En el modelo extravertido, por el contrario, las remuneraciones del trabajo pueden estar desconectadas del crecimiento de la productividad (2).

Esta conclusión encuentra ahora su sentido político, que es el siguiente:

I) El desarrollo de un país del Tercer Mundo contemporáneo no puede venir del ajuste de su economía a las exigencias de la división internacional del trabajo, sino todo lo contrario, de la desconexión (*delinking*) de esta economía frente a la división internacional del trabajo.

II) -Esta desconexión es una condición necesaria (pero no suficiente) para un desarrollo autocentrado que resulta imposible si no es popular (es decir, si los beneficios del aumento de la productividad no van inmediatamente a amplias masas).

III) Por el contrario, un crecimiento cuyos beneficios estén destinados principalmente a una minoría, no sólo es posible sobre la base de un desarrollo extravertido (aunque no es posible siempre y en todas las circunstancias), sino que incluso exige un desarrollo de este tipo, más eficaz para este objetivo que un modelo autocentrado.

Por tanto, en el Tercer Mundo existe una sinonimia entre desarrollo autocentrado y desarrollo nacional y popular.

1.5. - Esperamos que los razonamientos precedentes hayan puesto de manifiesto algunas ambigüedades del lenguaje.

No habría que trivializar el concepto de desarrollo autocentrado, nacional y popular (DANP), ni que asimilarlo a una serie de «medidas proteccionistas» más o menos serias, por otra parte, o simplemente a la autarquía.

Tampoco habría que confundirlo con el de «dependencia». Evidentemente, las economías periféricas son dependientes, en el sentido en que los ritmos y las estruc-

turas de su crecimiento están gobernados por los de los centros (mientras que esto no resulta cierto en el caso inverso) (3).

Si bien se puede hablar de interdependencia, aunque sea desigual, entre los centros (poder hegemónico y otros, agricultores grandes y pequeños del centro...), no se puede hablar en el mismo sentido de interdependencia entre centros y periferias, sino de dependencia de las periferias. La diferencia entre ambos conceptos (periferia o modelo extravertido, por una parte, y dependencia, por la otra) aparece cuando se consideran los casos de economías dependientes no periféricas: Canadá, por ejemplo, cuyo capital nacional no ocupa más que una posición subalterna y está dominado por el capital de los Estados Unidos, pero cuyo crecimiento de las rentas del trabajo es paralelo al de la productividad. Canadá es más una provincia de los Estados Unidos (y como no lo es, es un Estado dependiente, en cierta forma) que otra cosa. La dinámica de su acumulación (por articulación de los sectores 1 y 2) es similar a la de California o Alabama, no a la de Haití o Brasil.

Tampoco habrá que confundir Periferia y Retraso («subdesarrollo», en su acepción más común). España experimentó un crecimiento durante las décadas de los cincuenta y los sesenta caracterizado por el crecimiento paralelo de las rentas del trabajo/productividad; Brasil, un crecimiento caracterizado por una desigualdad creciente en la distribución de la renta (descenso de los salarios reales y de las rentas agrícolas; aumento de las rentas de las clases medias que fue la causa principal del crecimiento de la demanda). Se puede deducir de ello que España era un centro rezagado y Brasil una periferia.

2— Ahora es posible ver que las políticas aplicadas en África durante las décadas de los sesenta y los setenta (¡y las que preconizan y siguen preconizando instancias como el Banco Mundial!) son básicamente extravertidas.

2.1. - No es posible pasar revista aquí a toda la variedad de experiencias de África. Tampoco es nuestra intención reducirlas todas a un modelo sencillo y único, sin matices. Sin olvidar los contrastes y las diferencias y dándoles incluso más importancia que a lo que constituye su denominador común, podríamos recordar que en este amplio continente ha habido regímenes sociales diferentes y numerosos sobresaltos políticos, encontrándonos al menos con cuatro grupos de experiencias:

a) Los casos de «estancamiento» (en términos de crecimiento) asociados a una pobreza de recursos naturales que, sin ser necesariamente absoluta, lo es en términos de demandas del sistema mundial.

b) Los casos de «estancamiento», a pesar de la existencia de dichos recursos, ya sean potenciales (pero muy conocidos), o incluso explotados (y a veces a gran escala).

c) Los casos de «crecimiento» bastante marcado (a veces fuerte) asociados a la explotación de estos recursos, ya sea por las multinacionales o por el Estado nacional.

d) Los casos de «crecimiento marcado» a pesar de que los recursos explotados (generalmente más agrícolas que mineros) sean «medios», gracias, en general, a una gran apertura al exterior, estando asociado este gran crecimiento a una distribución de sus beneficios más o menos desigual.

Se podrían volver a clasificar estas experiencias en función de un criterio político: a) Afirmación de un objetivo de independencia nacional, y a veces (y con mucha frecuencia) de un objetivo «socialista» y de medidas efectivas acompañando a estas afirmaciones, al menos en el plano de la intervención del Estado (nacionalización, a veces reformas agrarias, sistemas de cooperativas, controles formales de las relaciones exteriores, etc.), estando relacionados (y no por casualidad) los discursos generales (sobre la situación mundial, etc.) y las alianzas internacionales evidentes; b) O afirmación de un objetivo de apariencia neutra de «desarrollo como prioridad», apelación a los capitales (principalmente occidentales), negativa a conde-

nar los principios del capitalismo, de la iniciativa privada, de la estrategia mundial de las multinacionales y de los Estados occidentales, etc.

El lector que conozca, aunque sea superficialmente, Africa cruzará estas dos tramas y pondrá nombres de países y de jefes de Estado en cada uno de los subgrupos.

2.2. - Dentro del marco de esta clasificación formal se distinguen fácilmente, continuando con un análisis tradicional de los «rendimientos económicos» (como hacen los informes del Banco Mundial o todos los de las Administraciones o los centros de decisión del sistema, nacionales e internacionales, públicos y privados):

a) Actividades motrices del crecimiento efectivo, cuando existe: I) el petróleo y las minas en primer lugar; II) la agricultura de exportación (relativamente rica —café, cacao— o pobre —cacahuete—); III) industrias ligeras de consumo gestionadas en forma aceptable, instaladas por las multinacionales o por el Estado, modernas por sus técnicas, para abastecer el mercado interno (sustitución de importaciones); IV) un sector de construcción (ligado al urbanismo acelerado y a la «prosperidad») dinámico; V) gastos administrativos concebidos en términos muy clásicos, cuidando a Occidente en su forma y con pretensiones «sociales» en distintos grados (la educación como prioridad), creciendo a un ritmo fuerte y sostenido; VI) actividades terciarias (comercio, finanzas...), que también son casi siempre de crecimiento más dinámico que el resto de los sectores.

Cuando el crecimiento global ha sido reducido (o nulo, o negativo) la razón parece ser un dinamismo insuficiente de I) y II) y/o un carácter dudoso de III). Si además IV) y V) han sido fuertes, la doble crisis de las finanzas públicas y de la balanza de pagos, inevitable, agrava la situación.

La insuficiencia de dinamismo de I), II) y III) se atribuye: a) a pobreza objetiva del país...; b) a su «nacionalismo» malencarado que rechaza el capital extranjero, factor raro. Se puede agravar con la despreocupación de la «élite», su «corrupción» y su «demagogia», etc. ¿Reconocemos aquí el diagnóstico de los informes del Banco Mundial y, por deducción fácil, sus recomendaciones?

b) Una agricultura siempre en retraso, anticuada, generalmente estancada o casi (salvo quizá en el sector de los productos destinados a la exportación), incapaz, por tanto, de generar excedentes alimenticios comercializados a la altura de la demanda urbana solvente. En los casos más trágicos, el mundo rural se va pudiendo alimentar cada vez peor y aparece el hambre. En los casos más favorables las estadísticas detectan un crecimiento positivo de la producción de alimentos, incluso *per cápita* (que no suele superar el 2 o el 3 por 100 anual en período largo para la producción global del país), un excedente comercializado en aumento, pero casi siempre insuficiente para abastecer la demanda solvente urbana, que es cierto que puede aumentar fácilmente un 4 o un 5 por 100 anual.

Estas catástrofes o estas insuficiencias se suelen atribuir al clima (sequía) o a la burocracia administrativa despreocupada del mundo rural. No se suele entrar en el análisis de las políticas que sangran al mundo rural (términos del intercambio ciudades/campo...). ¿Seguimos reconociendo aquí los análisis del Banco Mundial?

c) Un conjunto industrial que no suele ser casi nunca motor del crecimiento, sino en gran medida producto de una respuesta de ajuste de éste, con efectos de arrastre limitados: I) Insuficiencia de las industrias de base y escasa integración interindustrial; II) Carácter cuantitativo limitado de las rentas que distribuye. Aquí hay que considerar tres matices: 1.º, si la industria se limita a un número definido de unidades de producción en situación de cuasi monopolio sobre un mercado pequeño, y estas unidades suministran bienes de consumo, la industria (generalmente con eficacia, es decir, sin necesidad de subvencionar los precios competitivos con los de las importaciones) es derivada y no motriz; 2.º, si el Estado se mete demasiado en controlar este tipo de industrias, lo hace (experiencia africana) generalmente

mal y además tiene que subvencionar; 3.º, algunos países intentan ir más lejos. Proclaman su voluntad de convertir la industria en el principal motor de la economía. Las «industrias industrializantes», nacionales e integradas sobre la base de una prioridad de la industria de base, deberían permitir «alcanzar» al mundo desarrollado. La cuestión está en saber si este último matiz, que es importante, diferencia cualitativamente las experiencias africanas en las que da de las demás. Esta cuestión, que en nuestra opinión es fundamental, no se suele tener en cuenta. (¡El Banco Mundial no lo hace nunca!)

2.3. - Más allá de rendimientos económicos aparentes y a corto plazo, si integramos el factor político, reconoceremos necesariamente dos familias de experiencias en África:

a) Las que no cuestionaron el motor externo fundamental, y se contentaron con explotar sus «ventajas comparativas» internacionales, agrícolas o mineras, incorporando al crecimiento de estos sectores el de las industrias ligeras de sustitución de importaciones, los servicios y la Administración. Matices «nacionales» o «nacionalistas» (el Estado puede ejercer un control a través de la propiedad pública de sectores más o menos importantes de este crecimiento); matices «sociales», por no decir «socialistas» (los frutos de este crecimiento están en manos del 1 al 15 por 100 de la población), no cuestionan el carácter extravertido del desarrollo. Este, calificado de «neocolonial», hace honor a su nombre, en el sentido de que prolonga la valorización colonial, contentándose con asociar a la misma a la élite local. No cabe duda de que este tipo de desarrollo ha sido posible aquí, pero ha resultado objetivamente imposible para los vecinos, tanto si suministran mano de obra barata al primero (ya vemos quién viene inmediatamente a la memoria) como si están privados de actividades exportadoras motoras. La causa no es tanto la naturaleza de la demanda mundial como su estructura.

b) Las que han querido cuestionar este motor externo. Fruto de una historia política y social del movimiento de liberación nacional, de la asociación de las masas populares a este movimiento, estas experiencias son voluntariamente nacionales. Si hacemos un balance más allá de las intenciones, no pareciera que estas experiencias (una veintena durante las dos décadas de independencias) hayan sido capaces de iniciar la aplicación de un sistema económico nacional integrado, relativamente capaz de autonomía. La única experiencia que ha conseguido ir lo bastante lejos en esa dirección (la del Egipto de Nasser), cayó por la conjunción de sus insuficiencias propias y la hostilidad de Occidente (¡incluido el Banco Mundial!), a pesar de los factores financieros que la favorecen, ¿acaso no se encuentra con los mismos obstáculos internos y externos? Las intenciones de algunos otros (en primer lugar, Nigeria, entre otros), ¿han sido hasta ahora algo más que verbales? Por ejemplo, si retenemos el criterio de la siderurgia, base (entre otros) de un desarrollo autónomo, nos veríamos obligados a constatar que en África sólo existe siderurgia autónoma en Egipto y en Argelia, no sólo por la propiedad formal, sino sobre todo por sus mercados. En otros lugares, la siderurgia, que suele ser una prolongación del comercio colonial de materiales de construcción, sigue centrada en la demanda de construcción, de lujo en muchos de los casos, y no en la del equipamiento de las industrias. La tentativa de Túnez de imitar a Egipto y Argelia se vio limitada por el mercado restringido del país, sus opciones políticas y sus expectativas (¡el turismo!). La de Nigeria, que sigue en el estadio de proyecto, merecería un examen más atento, ya que la desindustrialización de este país por la implantación de las multinacionales (que destruyen las pequeñas y medianas empresas del país y orientan el capital nacional hacia el comercio y la especulación) entra en conflicto objetivo con las opciones nacionales del discurso oficial.

Esta segunda familia de experiencias, la única interesante desde el punto de vista de la alternativa autocentrada, si bien merece el calificativo de «nacional»

(por realidad o por intenciones) es bastante poco «popular». La industrialización nacional que se persigue no tiene como objetivo prioritario la mejora del nivel de vida de las masas más empobrecidas (y centrarse, por tanto, en su demanda real, no «solvente»), sino articularse sobre la demanda en expansión de las clases medias. El «retraso» de la agricultura no es una casualidad, ya que la demanda de alimentos básicos interesa más a las masas pobres que a estas clases. Se prefiere la agricultura de variedades ricas (frutas y verduras, carne para los privilegiados) a los productos básicos (cereales): Egipto es un buen ejemplo, espoleado en esta dirección por los capitales árabes e internacionales (con las bendiciones del Banco Mundial). El modelo de consumo de las clases medias, que es el modelo occidental, absorbe todos los recursos «escasos»: capitales (locales y extranjeros) y mano de obra cualificada. Nuestra estimación del uso de esta última en el mundo árabe nos lleva a la conclusión de que las tres cuartas partes de este bien escaso (es decir, el *stock* de trabajadores que ha pasado por una educación secundaria, técnica o superior) estaban destinadas, directa o indirecta, a la producción destinada a satisfacer el exceso de consumo de los privilegiados.

Por supuesto, el sistema productivo que corresponde a esta opción implica una dependencia tecnológica total. La teoría de que habría que aumentar el tamaño del pastel antes de repartirlo (sentido común aparente) es absurda. No se construyen autopistas (para facilitar la circulación de los que tienen automóviles) para repartirlas mañana, por metros, a los mendigos. La distribución condiciona la naturaleza del pastel, más aún que su tamaño.

Si estas experiencias siguen siendo extravertidas (las primeras sin lugar a dudas, las segundas después de un análisis profundo de su contenido) es porque no son populares, en el sentido que damos aquí a esta palabra («desarrollo, ¿para quién?»).

Este último rasgo, que es común a unos y a otros, se expresa a través del respeto al sacrosanto principio de la «rentabilidad». Si se considera este criterio como decisivo (incluso con matizaciones esporádicas), si está basado (como es el caso) en el sistema de precios mundiales (que refleja la división internacional del trabajo, el reparto de los mercados entre los monopolios etc.), este criterio sólo puede llevar a una opción de estrategia extravertida. Ni el discurso político ni las alianzas diplomáticas modifican el sentido de esta opción.

3—La elección alternativa de un desarrollo autocentrado, nacional y popular, no sólo es posible en África como en cualquier otro sitio, en el sentido de que no existen obstáculos «técnicos» absolutos que lo hagan imposible (el obstáculo es siempre social), sino que es objetivamente necesario, en el sentido de que persistir en el rechazo de esta opción es encerrarse en un callejón sin salida.

3.1.—La estrategia autocentrada nacional y popular descansa en primer lugar en el principio de una distribución de la renta lo más igualitaria posible, principalmente entre el campo y la ciudad, entre los sectores modernos, de mayor productividad, y los sectores retrasados. El excedente de la producción sobre las rentas del trabajo igualadas de este modo constituye un remanente que, si es nacional y se retiene para su acumulación, permite garantizar un marcado crecimiento y una progresión paralela y regular del consumo popular. La estructura de la demanda que se crea de este modo hace aparecer como prioritarias las necesidades de base y orienta el sistema productivo hacia la satisfacción de éstas.

Para ilustrar este principio supongamos una situación de partida (año 0), caracterizada por el predominio de la población rural (80 por 100) y su inferioridad en términos de productividad (la producción de la agricultura sólo representa el 60 por 100 del PIB). Si todas las rentas distribuidas fueran iguales a las rentas rurales medias (es decir, $60/80 = 0,75$), el excedente del PIB sobre las rentas del trabajo definidas de este modo (60 para las zonas rurales, 15 para las urbanas) permitiría, si no se exporta y se desperdicia con el consumo de los pudientes, una acumulación

notable (25 por 100 del PIB) que garantizaría, por ejemplo, un crecimiento del orden del 7 por 100 anual (duplicación en diez años). Al finalizar la década, dado que el PIB se habría duplicado y la población habría aumentado, por ejemplo, en un 25 por 100 (2 por 100 de crecimiento anual), la productividad nacional media (producción *per cápita*) habría aumentado en un 60 por 100 (200/125), habiendo pasado la población urbana del 20 al 30 por 100 de la población total.

Admitamos el principio de un desarrollo autocentrado nacional y popular: a lo largo de la década, la planificación de los precios y de las rentas garantizará un crecimiento igual de las rentas de todos paralelo al de la productividad. Si, por ejemplo, la productividad rural aumentase en un 40 por 100 (menos que la del conjunto de la economía), la renta *per cápita* en las ciudades y en el campo aumentaría también en un 40 por 100 (pasando del 0,75 al 1,05). El excedente destinado a la acumulación aumentaría también en gran medida (del 25 al 35 por 100 del PIB) (4).

El sencillo esquema que presentamos a continuación ilustra este modelo de crecimiento autocentrado, nacional y popular.

	[1] Año 0	[2] Año 10	[2]/[1] Índice
<i>Producción:</i>			
PIB... ..	100	200	200
Agrícola... ..	60	92	153
Urbana	40	108	270
<i>Población:</i>			
Total... ..	100	125	125
Rural	80	87	109
Urbana	20	38	190
Tanto por ciento población urbana ...	20 %	30 %	—
<i>Producción «per cápita»:</i>			
Total *	1,00	1,60	160
Rural	0,75	1,05	140
Urbana	2,00	2,85	143
<i>Renta:</i>			
Renta distribuida <i>per cápita</i>	0,75	1,05	140
Renta: Rural	60	92	140
Urbana	15	40	268
Excedentes... ..	25	68	270

* La paradoja aparente (la producción media «per cápita» aumenta más de prisa para la economía nacional que para cada uno de sus componentes, rural y urbano) se explica fácilmente: la productividad absoluta de las ciudades es muy superior a la del campo y la proporción urbana aumenta de un 20 a un 30 por 100 de la fuerza de trabajo global.

Hay que saber que un esquema de crecimiento de este tipo no puede derivarse del funcionamiento de las leyes de mercado sobre la base del sistema de precios del sistema mundial. La decisión de regular la remuneración del trabajo sobre una base igualitaria determinada por la productividad rural media (igualdad de la «ración»

de cereales en la ciudad y en el campo, escala de salarios urbanos reducida y no calcada sobre la de Occidente...), la de nacionalizar el excedente, de ocuparse de su centralización y redistribución a escala nacional, son decisiones políticas que implican separar el sistema de las opciones económicas del que se derivaría del «análisis de proyectos» y de la «rentabilidad», principios sacrosantos (para el Banco Mundial, entre otros).

3.2. - Sin entrar en una descripción ilusoria de los detalles concretos de las medidas que hay que adoptar para aplicar un esquema de desarrollo de este tipo, se puede decir:

a) Que implica no sólo la proclamación de la «prioridad agrícola», sino su aplicación efectiva. Esta exige que el resto de las actividades, cuya productividad es superior, no sean ocasión de distribuciones de rentas que superen las que se distribuyen en la agricultura. En caso contrario, la demanda se estructura de modo tal, que la atención a las necesidades de los privilegiados absorberá necesariamente la parte más importante de los medios destinados a la acumulación, mientras que se sacrificará a la agricultura. Vemos que la prioridad de la agricultura, especialmente de los alimentos básicos, no debería reducirse a la elección de «proyectos agroalimenticios». Preferir el mijo al alcahuete, opción inteligente en principio, no es suficiente en absoluto; ni siquiera es factible si no se revisa el conjunto de las políticas de distribución de las rentas, de industrialización, de precios, de salarios y de financiación (recogida del excedente por parte del Estado y asignación del mismo a atender estas prioridades). De no ser así los proyectos agroalimenticios no evitarán el deterioro de las rentas de los productores, a causa de la imposición, el crédito, el deterioro de sus términos de intercambio, etc. Es sabido que de darse estas circunstancias los campesinos, que han aprendido de la experiencia, se resistirán a los «progresos» que se les proponen, porque saben que los beneficios de éstos no serán para ellos. En el fondo, la prioridad de «lo alimenticio», si no se revisan en consecuencia las políticas globales, viene a ser querer producir productos alimenticios baratos (a costa de los agricultores) para garantizar la búsqueda de condiciones favorables para el mantenimiento de una mano de obra proletaria barata (en detrimento de los trabajadores y en beneficio del capital únicamente, y más concretamente a través de la especialización que exige la división internacional del trabajo, del capital extranjero). ¿Satisfacción de las necesidades básicas o aumento de la tasa de beneficio?

b) Que implica que la industrialización se conciba principalmente para mantener los progresos de la productividad en la agricultura: producción de insumos adecuados (abonos, herramientas...), trabajos de infraestructura (regadíos, transportes...), conservación y transformación de los productos, etc. Implica además que esta industria atienda a las necesidades de consumo no alimenticio de la población rural y de la urbana, sobre una base lo más igualitaria posible, y que a partir de esta demanda se remonte la cadena de las industrias intermedias y de equipos que condicionan la eficacia de la producción de productos manufacturados de consumo. Es evidente que no se puede renunciar a esta industria nacional sustituyéndola por importaciones, porque éstas se tienen que pagar con exportaciones, y las ventajas comparativas son las derivadas del sistema de precios y de rentas del sistema mundial, en conflicto con la coherencia política que acabamos de esbozar. Es la razón de que la importación deba reducirse al mínimo en cada etapa.

c) Que implica, por tanto, formas nacionales y populares de organización social de la producción: control de los campesinos sobre los proyectos agrícolas, verdaderas cooperativas (que no sean un medio de sangrar a los campesinos a través de administraciones-marco que quiten al agricultor el control de la producción...), instituciones de negociación colectiva de los precios agrícolas, control nacional de las industrias, política nacional de salarios, redistribución de los medios de finan-

ciación a escala nacional, etc. Es difícil concebir un lugar para las multinacionales en este esquema organizativo, a no ser que suministren muy puntualmente y bajo un estricto control nacional algunas «recetas» de producción o de organización.

d) Que implica una relación con la tecnología que no se reduzca a una «transferencia» de la misma. Se trata de crear una capacidad de inventar, no por razones de nacionalismo cultural, sino sencillamente porque las técnicas disponibles, sobre todo las avanzadas, no son neutrales en relación con los tipos de productos, la estructura de las demandas que hay que atender (modelos occidentales), las estructuras de precios y de rentas que condicionan la rentabilidad de dichas técnicas, etc.

e) Que implica relaciones exteriores limitadas radicalmente diferentes de las que se derivan de las estrategias alternativas de industrialización, de sustitución de importación o de industrialización de exportación. La sustitución de importación se basa en una demanda que ya existe, en una estructura de distribución de la renta caracterizada por una enorme desigualdad y, sobre esta base, respeta los principios de la rentabilidad (como mucho, con argumentos de «protección moderada de las industrias infantiles» durante una breve transición). Sólo puede desplazar las importaciones hacia bienes intermedios (el aparato industrial sigue sin estar integrado) y bienes de equipo sofisticados (ya que la demanda que hay que atender, en competencia con las importaciones, reproduce el modelo de consumo occidental, exigente en capitales). Sigue siendo extravertida. Por el contrario, la industria autocentrada nacional y popular no se construye para responder a una demanda preexistente; la crea sobre la base de la satisfacción de las necesidades populares (política de rentas) y de las necesidades intermedias y de equipos que se derivan de ellas. La importación, que sigue existiendo, se ocupa de tapar agujeros, dentro de la gama de las necesidades derivadas, reduciendo progresivamente su importancia relativa (aunque no necesariamente su volumen absoluto). Somete las relaciones exteriores a la lógica de la acumulación interna, y por ello merece el nombre que lleva. Por lo que se refiere a la industria de exportación, es, por su misma definición, extravertida, sobre todo teniendo en cuenta que, obligada a competir con la industria de los países avanzados en su propio terreno, debe importar masivamente tecnología avanzada. Es lo que explica que los países de reciente industrialización más avanzados en esta dirección sean también los más endeudados: la industria de exportación no aligera la situación de la balanza exterior (al contrario de lo que pretenden los argumentos que la promueven, especialmente los del Banco Mundial); la agrava.

f) Que implica la construcción de una estructura nacional de interdependencia precios/medios de financiación que entra en conflicto con los principios del criterio de la rentabilidad microeconómica. Efectivamente, la industria autocentrada, si tiene que atender a las necesidades populares, debe aceptar la yuxtaposición de unidades productivas muy desiguales (industrias modernas, manufacturas semimecanizadas, fabricación artesanal). La unidad de las remuneraciones del trabajo y la de los precios lleva a excedentes desiguales. Hay que redistribuirlos para evitar que el progreso se polarice en las unidades modernas y, por el contrario, financiar la modernización progresiva de los sectores retrasados con el excedente de los sectores modernos. Eso sólo es posible a gran escala con una propiedad pública de gran envergadura: la empresa privada nacional y, menos aún, la filial de una multinacional no pueden aceptar verse desligadas hasta tal punto de la rentabilidad. Como es sabido, actúan en el sentido exactamente opuesto, destruyendo el artesanado no competitivo, contribuyen a agravar el paro y a privar al mismo tiempo a la población de productos útiles.

3.3 - Los obstáculos para aplicar estos principios son evidentes. ¿Son inexpugnables? ¿Cuál es la naturaleza de los obstáculos más serios?

El obstáculo del tamaño de los países africanos es evidente. Sin embargo, opera sobre todo en lo referente a la industria y no tanto a la agricultura. Muchos de los problemas inmediatos de la agricultura se pueden resolver mediante la acción directa en la base y de la base. Sin duda, la solución de estos problemas exige algunos medios materiales que habrá que importar cuando no los pueda suministrar la industria local. El obstáculo no es tanto la imposibilidad de suministrar estos medios como el marco social que impone la estrategia global. Si la función de la agricultura es suministrar un excedente para, en el mejor de los casos, una industrialización que no le concierne o, en el peor, un consumo parasitario, es inútil contar con la movilización de las energías rurales, porque de hecho se trata de quebrar la autarquía de los campesinos, no para mejorar su suerte, sino para explotarlos. Los métodos aplicados se resienten de esta opción: se prefieren grandes presas y perímetros de colonos organizados, implantaciones agrícolas de multinacionales y revolución verde asociada a la pequeña y gran propiedad modernizada (expulsando a los campesinos pobres de sus tierras), granjas estatales y cooperativas que imponen a los agricultores los productos y las técnicas que permitan obtener un excedente en aumento. Estos métodos vienen muy bien a la agroindustria proveedora de insumos, pero son extremadamente costosos y de una dudosa eficacia, a causa de la propia resistencia del campesinado. Un progreso difuso, basado en millares de pequeñas mejoras (control del agua en pequeñas superficies, asociación agricultura-ganadería intensiva, etc.), exige un marco social completamente diferente y una estrategia global que no trate de obtener un excedente cada vez mayor de los campesinos. El obstáculo del tamaño opera muy poco en este estadio. Podemos ver cómo algunos de los grandes países de África donde no existe este obstáculo no se las arreglan mejor que los otros.

Este obstáculo no debería impedir que se inicie una industrialización autocentrada, al menos en países de más de cinco millones de habitantes. Sin duda, no podría ser «completa» en estos países y no evitaría una dependencia relativa de las importaciones importantes. Además, este obstáculo se podría reducir con una cooperación intraafricana, basada en la aplicación de complementariedades planificadas. Sin embargo, esta cooperación, a su vez, no sería compatible con las fórmulas de «mercados comunes» que acentuarían las desigualdades en lugar de reabsorberlas.

El obstáculo real es el social: el desarrollo autocentrado sacrifica el crecimiento privilegiado de las clases medias. Además es internacional, en el sentido de que el sistema de los intereses de las multinacionales y de los Estados desarrollados, preocupados ante todo por la seguridad de su aprovisionamiento en materias primas, se opone a la opción autocentrada. ¿No es sintomático que los esfuerzos del FMI tengan por objeto participar en la desestabilización de las experiencias que puedan iniciar este tipo de desarrollo? ¿No es sintomático que las condiciones que impone este organismo sacrifiquen siempre sistemáticamente los intereses populares (bloqueo de los salarios, liberalización de los precios, ahorro en gastos sociales...), en detrimento del discurso sobre las necesidades básicas? Esta política, acentuando la desigualdad social, refuerza la falta de salidas de la estrategia extravertida.

El obstáculo exterior podría debilitarse, sin duda, si se escuchara la demanda del Tercer Mundo de un Nuevo Orden Económico Internacional. Este Nuevo Orden no es una estrategia autocentrada, sino básicamente una revisión de la división internacional del trabajo en un sentido favorable al Sur. No obstante, esta mejora de los medios que pueda tener el Sur a su disposición podría ponerse al servicio de un desarrollo autocentrado que se haría menos difícil. Podría ponerse también al servicio de un proyecto nacional no popular, aunque sea asimismo un callejón sin salida, con la condición de que no se confunda el Nuevo Orden Económico Internacional, en el sentido que le dan los 77, con el proyecto de nuevo despliegue de las multinacionales. Ya hemos expresado en otro lugar nuestra opinión sobre

estas cuestiones, y allí remitimos al lector. Sin embargo, el Norte ha rechazado el Nuevo Orden Económico Internacional, ¡y con razón!

3.4 - Finalmente, vemos que el desarrollo autocentrado es sinónimo de desconexión (*delinking*), que ocupará un largo período histórico (al menos varias décadas). A su término, y sólo entonces, en un mundo modificado por el refuerzo de las Naciones y de los Pueblos del Sur, se podrá volver a hablar de «reconexión» (*relinking*), reconociendo las ventajas de la división internacional del trabajo. Pero no antes.

NOTAS

(1) Evidentemente, esta opinión está muy discutida. Sería muy largo explicar aquí las razones por las que no creemos que *en este momento* sea posible, a partir de un crecimiento ampliamente extravertido (por la importancia masiva de los capitales y de las tecnologías que imponen una participación activa en la división internacional del trabajo), crear un desarrollo nacional, abierto al exterior, claro, pero capaz de imponerse, es decir, de situarse en la división internacional del trabajo a alturas dominantes.

(2) El esquema (véase «The Law of value and historical materialism», part V, the end of a debate, Monthly Press, 1978) relaciona la demanda (y las rentas que la condicionan) con el progreso de la productividad del trabajo. En un sistema cerrado, esta relación impone un aumento de las rentas del trabajo, sin el que la crisis por insuficiencia de la demanda bloquea el crecimiento. En un sistema abierto, esta relación puede desaparecer para reaparecer a nivel global del conjunto de los países interrelacionados en la división internacional del trabajo. Es precisamente lo que caracteriza el sistema mundial actual: la demanda popular insuficiente en la periferia no bloquea el sistema porque está compensada por la demanda local de los privilegiados y la de los países dominantes, que se benefician de la transferencia de valor asociada al intercambio desigual, consecuencia de la división internacional del trabajo desigual. Para nosotros es precisamente la definición que separa cualitativamente los países del centro de los de la periferia.

(3) ¿Se puede hacer una excepción con las economías petrolíferas? Es evidente que si se toma la palabra «dependencia» en la acepción que le da el lenguaje corriente, las economías del Norte «dependen» de la energía importada, como «dependen» también en gran medida de otras materias primas vitales para su desarrollo, procedentes del Tercer Mundo. Pero ése no es el problema. Se sitúa en la naturaleza de la división internacional del trabajo que organiza el sistema. Los países exportadores de petróleo no ocupan los lugares predominantes en esta división internacional del trabajo.

(4) Este esquema demuestra que es posible un excedente suficiente para financiar el desarrollo, incluso en un país «pobre», lo que demuestra, por otra parte, la experiencia de China. Evidentemente, hay otros aspectos del problema, ligados al tamaño del país, a su dotación de recursos naturales potenciales, etc., que no consideramos aquí. El argumento a favor de la «apertura» se basa en tres consideraciones: I) La necesidad de apelar masivamente a los capitales exteriores y a la tecnología importada; II) La ventaja comparativa de la especialización; III) La cuestión del tamaño (recursos naturales, mercados, etc.). El primer argumento obvia el precio que hay que pagar por todas esas importaciones de capitales y de tecnología y fomenta la indolencia. El segundo argumento está basado precisamente en una tesis de las ventajas comparativas que ignora el concepto de división internacional del trabajo desigual y, por tanto, las transferencias de valor inherentes al sistema de los precios mundiales. El tercer argumento es el único que tiene una parte de verdad.

Nicaragua: Consideraciones sobre la alternativa estratégica

Aracelly García *

Ser feliz es construir nuestra casa, cosechar, cocinar la propia comida, curarse, cuidar el derecho de aprender con nuestros errores. Ser del tamaño de nuestro trabajo, de la habilidad y torpeza de nuestras manos y mentes (1).

Introducción

Creemos que la problemática económica en la coyuntura actual es de una tal extensión que nos obliga con urgencia a extraer las enseñanzas generales de su propia dinámica.

La interpretación adecuada de los fenómenos económicos, políticos y sociales que se desarrollan se convierte en una necesidad indispensable e ineludible, sobre todo para los investigadores sociales que estamos involucrados en procesos vivos de transición social.

El compromiso va más allá de la discusión teórica, de la calificación de posiciones entre clásicos, neoclásicos, ortodoxos, heterodoxos, etc. Se trata, en consecuencia, de aportar a las reflexiones que, partiendo de la realidad de Nicaragua, deben servir como base para el debate y toma de decisiones, en donde está hipotecado el presente y futuro de un pueblo, y en cierta medida la experiencia de futuras transiciones en América Latina.

Entendiendo la responsabilidad que esto representa, el INIES, como un instrumento de la investigación económica y social en Nicaragua, se inscribe con entusiasmo en esta tarea, con la advertencia de que una de nuestras herencias del sistema anterior fue el difícil ejercicio de las ciencias sociales, que limitó seriamente los estudios para obtener un conocimiento riguroso de la realidad nicaragüense y centroamericana, así como la formación de investigadores experimentados en las ciencias sociales.

Aclarando nuestras limitaciones, pretendemos en este trabajo introducirnos en un ejercicio analítico sobre la estrategia de desarrollo, considerando como hilo conductor la concepción genérica de la misma.

Nos interesa abordar dos aspectos fundamentales, que a nuestro juicio están en el centro del debate: a) la dimensión estructural relativa a las líneas de desarrollo y la organización social, y b) el control y regulación de la economía nicaragüense dentro de la crisis.

* Antropóloga. Investigadora de INIES. Tomado de *Revista Nicaragüense de Ciencias Sociales*.

1. La crisis económica en la región

Existe un consenso bastante generalizado acerca de que la problemática económica regional es repercusión directa de la pérdida de coherencia en la economía y en las relaciones comerciales y financieras internacionales. Siendo más precisos, es resultado de la crisis del capitalismo mundial, al cual nos encontramos ligados directamente.

Algunos opinan que esta crisis expresa los síntomas de una enfermedad incurable, que sea cual fuere el tratamiento el enfermo morirá. Históricamente es inevitable. Pero, en su larga agonía, el capitalismo nos hará pagar los costos más altos de la historia.

Para todos los países del Tercer Mundo estos costos ya han significado en los últimos cinco años la transferencia a los países capitalistas desarrollados de 500 billones de dólares, fenómeno asombroso en la historia económica (2). Las perspectivas empeoran al considerar que el proceso de reconversión industrial y los avances tecnológicos disminuyen cada vez más los requerimientos de recursos naturales y de fuerza de trabajo, componentes que los países del Tercer Mundo aportan a la economía mundial.

Hace varias décadas empezamos a tener plena evidencia del agotamiento del modelo agroexportador. No sólo como «vía de desarrollo», sino también en su incapacidad para sostenerse como vía de subsistencia económica. Las cifras son concluyentes para demostrar lo anterior, y de hecho no es gratuito que Honduras y Nicaragua ocuparan en la década anterior el segundo y tercer lugares, respectivamente, de subdesarrollo entre todos los países de América Latina (3).

No existen grandes diferencias entre los restantes países del área, ya que todos mantienen una estructura productiva semejante, intercambio, recesión económica, disminución de la capacidad productiva, distorsiones del sistema financiero, inflación, déficit fiscal y abrupta reducción del nivel de vida de la población trabajadora.

En síntesis, la crisis del área centroamericana tiene como denominadores comunes la dependencia de los países capitalistas desarrollados y un subdesarrollo material y humano de lo más agudo.

2. Modalidades de la crisis en Nicaragua

Las diferentes modalidades de la crisis en cada uno de los países centroamericanos están dadas, fundamentalmente, por las diferentes respuestas o alternativas que cada uno de ellos adopta para enfrentarla.

2.1. *La diferencia: El proceso de transición*

Para Nicaragua, la diferencia fundamental estriba en dos aspectos determinantes: a) En toda Centroamérica es el único país que cuenta con la voluntad política para su autodeterminación, lo que significa que hasta el momento es el único que puede romper en términos prospectivos con la dependencia actual, buscando genuinamente un nuevo modelo de desarrollo y nuevas formas de inserción internacional; b) Derivado del anterior, el costo que este proceso de autodeterminación representa es el enfrentamiento directo con el imperialismo norteamericano, lo que hace más compleja y difícil la situación de la economía nicaragüense.

Para ilustrar esta diferencia podemos mencionar que en la presente década los países vecinos de Nicaragua han recibido, como «ayuda» bilateral de los Estados Unidos, la suma de 5.600 millones de dólares, un verdadero respiro para sus economías (4).

La lucha por su autodeterminación ha significado para Nicaragua dos costos adicionales a la crisis: primero, las pérdidas causadas durante la guerra de liberación, que se estiman en 4.328 millones de dólares (5); segundo, la agresión norteamericana, cuyo costo es de 3.000 millones de dólares (6) en daños a la infraestructura productiva, sin contar con el desvío de recursos económicos financieros y humanos para la defensa, la subutilización productiva en las zonas de guerra, los costos políticos, sociales y económicos por la pérdida de vidas humanas, etc. Ambas afectaciones alcanzan la suma de 7.328 millones de dólares, con los cuales se podría pagar la deuda externa (6.115 millones de dólares para 1987) (7), y aún restarían 1.213 millones de dólares para nuestro desarrollo.

Además, debemos considerar las repercusiones no cuantificables, que son mucho más profundas que su costo en dólares. Los daños han reducido la capacidad productiva, y el bloqueo económico y comercial, que cerró el mercado para el 40 por 100 de productos exportables que tradicionalmente se colocaban en los Estados Unidos —históricamente considerado el mercado natural de Nicaragua—, dejó al aparato productivo (dependiente en su mayoría de la tecnología norteamericana) sin condiciones de mantenimiento y reparación por no poder adquirir los insumos y repuestos necesarios.

Otros elementos diferenciales de la crisis en Nicaragua, que se derivan del proceso de transición de la Revolución Popular Sandinista, son las transformaciones en la estructura productiva. En el agro los cambios en la tenencia de la tierra y el reordenamiento territorial han alterado la dinámica anterior de algunos sistemas productivos. Es el caso de la ganadería, que antes ocupaba el 54 por 100 de las tierras aptas del territorio y que ha sido desplazada de las tierras más fértiles para potenciar la producción agrícola.

Lógicamente, este reordenamiento productivo afecta directamente la producción ganadera. Sin embargo, esta medida era necesaria para potenciar integralmente el agro, en base a la vocación de la tierra en todas las regiones.

En el sector industrial los cambios en función de racionalizar la producción requirieron un nuevo ordenamiento interno de las empresas, la fusión de fábricas y la introducción de nuevos productos.

A nivel general, la conformación del Estado con sus nuevos ministerios representó un cambio en su funcionamiento y un cambio casi total de los cuadros dirigentes y administrativos.

Todos estos cambios significaron un empezar de nuevo, que a lo inmediato afectó la producción de bienes y servicios.

Concluyendo, podemos decir que las modalidades de la crisis en Nicaragua se derivan del proceso de transición de la RPS, que conlleva a enfrentar la agresión norteamericana y a realizar las transformaciones necesarias para crear, desarrollar y consolidar las condiciones para avanzar hacia una nueva formación social.

2.2. *Situación económica actual*

Hemos puntualizado los cuatro elementos fundamentales que son directamente responsables de la crisis económica en Nicaragua. Los dos primeros afectan a Centroamérica en su conjunto: la crisis del capitalismo y el subdesarrollo, y los dos últimos son modalidades propias del proceso de transición: enfrentar la agresión imperialista y realizar las transformaciones estructurales que ha definido la RPS.

Podemos exponer las repercusiones concretas de esta situación a través de las siguientes cifras (evolución de 1980 a 1987, véase cuadro al final del artículo), que nos muestra una panorámica realmente difícil.

- La población de Nicaragua ha mantenido una tasa anual de crecimiento demográfico del 3,4 por 100, la segunda más alta de América Latina. Este creci-

miento debe considerarse muy seriamente, dado que las tensiones para mejorar el nivel de vida de la población crecerán en la misma magnitud (8).

- En 1987 el PIB tuvo un incremento que se reflejó en una tasa positiva del 1,7 por 100. Sin embargo, este incremento se debe a los productos de exportación, bienes que no están dirigidos al consumo interno.

- La relación de la producción *per cápita* de alimentos ha disminuido durante el período de 1979-1985 en un 10 por 100. Independientemente de que el consumo diario de calorías no varió en el período señalado, a partir de 1986 este consumo seguramente disminuyó (9).

- El PIB *per cápita* continúa siendo negativo (1984-1987), con una tasa de -1,4 por 100. El indicador incluido al final del artículo refleja la caída en el nivel de vida de la población.

- La inflación ha aumentado sensiblemente en los últimos tres años, alcanzando una tasa anual del 1.161 por 100 en 1987.

- A pesar de los incrementos salariales, éstos generalmente se quedan muy por debajo de la inflación, y el poder adquisitivo se contrae en 1987 en un 30 por 100.

- La composición de la PEA nos refleja un 25 por 100 de desempleados. Un 50-55 por 100 ubicados en el sector informal y el 20-25 por 100 restante corresponde a los asalariados. Por tanto, la pérdida del poder adquisitivo impacta directamente a la cuarta parte de la PEA.

- Para 1987 ya se habían tomado medidas para contener el gasto público. No obstante, los gastos totales del gobierno mostraron una tasa de crecimiento del 398 por 100 (1980-1987) debido a que se mantuvieron los gastos de defensa, salud y educación, que abarcan el 75 por 100 del presupuesto.

- Con una política tributaria agresiva (gravando a sectores de comercio y servicios que tradicionalmente no tributaban) se alcanzó una tasa de crecimiento del ingreso corriente del gobierno en un 407 por 100. No obstante, para 1988 se estima una fuerte reducción debido a la recesión en que se debate la economía.

- El déficit fiscal se elevó considerablemente en 1984 (24 por 100 del PIB), considerándose como uno de los más altos del mundo. Debido al aumento en los ingresos corriente del gobierno y a la reducción del 10 por 100 del gasto público, este déficit ha disminuido hasta mantenerse en los últimos dos años (1986-1987) en un 15,8 por 100 del PIB. Sin embargo, la perspectiva de su incremento es posible por la razón anterior.

- Con la caída del precio de las exportaciones se estima que las pérdidas por términos de intercambio cayeron (1908-1985) entre el 11 y el 34 por 100. Con seguridad, en los años siguientes fueron mayores (10).

- El valor corriente de las exportaciones mostró una tasa anual de crecimiento del 18,5 por 100 para 1987. Y el valor corriente de las importaciones fue del -1,4 por 100 en el mismo año.

- La deuda externa alcanzó en 1987 la suma de 6.115 millones de dólares, considerando en esta cifra el corto, mediano y largo plazo, ubicándose entre una de las más altas de la región.

Todo lo anterior demuestra que en Nicaragua estamos transitando por una aguda subsistencia económica y que indudablemente la solución se encuentra en el largo plazo, considerando que el proceso de recuperación sólo podrá iniciarse cuando termine la guerra de agresión.

Esto no quiere decir que tenemos que esperar a que esto suceda. Al contrario, hay mucho que hacer. La revolución ha dado sus primeros pasos y continúa caminando. Lo importante ahora y en el futuro es buscar el mejor camino, poniendo el acento en los errores y limitaciones en el manejo de la política económica, ya que esto sí está a nuestro alcance y profundizando los avances ya logrados, a fin de atenuar hasta donde sea posible los efectos de la guerra.

3. Alternativa estratégica

Pensar en el futuro de los países de América Latina se traduce generalmente a pensar en las revoluciones sociales. Sin embargo, para Nicaragua, por muy difíciles que sean los obstáculos a enfrentar, éste ya es un camino de realidades en el que debemos reflexionar muy seriamente.

En este sentido la alternativa estratégica cobra una importancia fundamental. Y para delinearla nos enfrentamos a una serie de riesgos que pueden retrasar los objetivos que persigue la revolución.

El primer riesgo es la concepción con la que se interpreta la realidad para definir las líneas estratégicas de un modelo de desarrollo económico.

No podemos olvidar que el desarrollo económico se mide por sus resultados, aunque ello no quiere decir medir únicamente el incremento en la producción, en la productividad o en la gestión. Se sopesa fundamentalmente por la construcción de una nueva organización económica y social que soporte el aumento sostenido del nivel de vida de los sectores populares que son el sujeto de la revolución.

Este objetivo, traducido a las líneas estratégicas de desarrollo, requiere descifrar por qué y para qué deseamos determinado desarrollo, y luego considerar la cuestión de cómo lograr, ubicando con precisión las condiciones reales, los obstáculos inmediatos y mediatos.

En este sentido ha surgido, sobre todo en los países subdesarrollados, dos ideas diferentes. Una de ellas es el enfoque tecnicista y productivista, donde la optimización del sistema pretende lograr una producción eficiente a costos socioeconómicos difíciles de aceptar y cubrir por nuestras reservas económicas y culturales. La otra concepción parte de la interpretación de nuestra dinámica económica con un enfoque nuevo y humanista, en el cual, al hablar de sistemas de producción, involucremos no sólo factores técnico-económicos, sino también al hombre como el actor principal de su propio desarrollo y destino.

3.1. *Concepción de desarrollo*

Por esta razón no debe extrañar que en Nicaragua se reivindique la concepción popular de necesidades básicas como criterio para la selección de tecnología y sus consecuencias sociopolíticas (11).

Esto significa la ruptura con el sistema económico anterior para construir uno que observe las posibilidades reales de desarrollo y elegir las formas y ritmos de socialización de la vida económica, política y cultural que mejor se ajusten al legado histórico de la población, permitiendo la realización de la nación como entidad en el concierto mundial (12).

Los pueblos de Mesoamérica, en particular, contamos con raíces históricas (cultura nahualt y maya fundamentalmente), que marcan una diferencia conceptual de los sistemas productivos y de la economía.

Recordemos que la cultura europea (incluyendo a Estados Unidos) parte de que el mundo y la naturaleza han sido creados para el hombre (más concretamente, para ellos); por tanto, ellos pueden disponer libremente de todos los recursos del planeta. Esto ha significado que el capitalismo atente contra la naturaleza y contra el equilibrio biológico, poniendo en peligro el género humano, y que atente también contra el desarrollo integral de los países del Tercer Mundo: todo en función del capital y la ganancia.

En contraposición, nuestros ancestros sostenían la concepción de que el hombre es parte del universo y, por tanto, debe convivir con las otras partes que lo componen. Como los mayas, que afirmaron:

«Nosotros somos una parte del universo, somos una planta, una piedra y un astro. Somos uno y todo, eslabón y cadena» (13).

«Los mayas fueron creados para que todo tenga su lugar, desde la pequeña hormiga hasta la majestuosa estrella. Todo depende de todo. La plantita ha nacido por el trabajo comunitario de lluvia, sol, tierra y otras fuerzas conjuntas. Cuando se mata a un animal o se coge una planta, no se rompe el equilibrio natural si nos alimentamos con ellos; nos comemos al universo entero» (14).

«Los dzules (los españoles) no conocen el espíritu de esta tierra que mucho tiene aprendido de los astros y mucho más olvidado de los hombres» (15).

«Ser feliz es construir nuestra casa, cosechar, cocinar la propia comida, curarse, cuidar el derecho de aprender con nuestros errores. Esta era la sabiduría maya: ser del tamaño de nuestro trabajo, de la habilidad y torpeza de nuestras manos y mente» (16).

De las citas expuestas se desprenden varios conceptos de nuestras raíces culturales; del concepto cosmológico se derivan contenidos de respeto, soberanía, autodeterminación y otros. Pero también se deriva la armonía que debe potenciar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y humanos, en combinación con los adelantos de la ciencia.

En Mesoamérica, y también en Perú, existía una interpretación de la utilización de los recursos, que se fundamentaba en el mejor aprovechamiento de los mismos. Hay que recordar que contaban con un bagaje científico avanzado en relación a la agricultura y a la naturaleza.

Por ejemplo, en la integración de sus sistemas productivos no desarrollaron la ganadería. Si bien es cierto que en América no habían bovinos ni equinos, sí existían especies mayores, como el venado, la llama o vicuña en Perú.

Basaban su desarrollo en la agricultura, complementando su alimentación con especies menores y aves; las especies mayores se las dejaban a la naturaleza, obteniéndolas a través de la caza cuando las necesitaban (pieles, carne, etc.).

Dentro de su racionalidad de costo y beneficio, no consideraban rentable dedicarle a un animal una gran cantidad de tierra (sus asentamientos se encontraban ubicados en tierras muy fértiles), para que después de tres o cuatro años este animal les proporcionara sólo el 60 por 100 de su peso en carne. La tierra misma les daba mucho mayor beneficio en producción y variedad de alimentos.

Esta racionalidad la entiende perfectamente el capitalismo. Por eso no es gratuito que los Estados Unidos se hayan convertido en uno de los mayores productores de granos básicos y nos asignen a nosotros el papel de utilizar nuestros recursos naturales para producir carne para ellos.

Esto no significa que hoy debemos abandonar la ganadería; tampoco que debemos volver mecánicamente a lo que fueron nuestras raíces —perdidas y atrasadas— después de siglos de haber sido alimentados por una estructura productiva dependiente, la cual ha creado también una relación de dependencia en los hábitos de consumo social y productivo.

Nos parece necesario recordar este potencial latente —tal y como lo apreciaron los mayas: «el espíritu de esta tierra, mucho tiene aprendido de los astros y mucho más olvidado de los hombres»— porque en la concepción popular estaba presente el respeto por la ciencia (los astros), algo generalmente olvidado en las estrategias de desarrollo.

Dicho en otras palabras, hoy debemos evitar tratar con la suma de diversos sistemas productivos (agricultura y ganadería) y buscar el resultado de la interacción de estos sistemas, complejos dinámicos donde se integran e interactúan insumos, productos, procesos y tecnologías, en función de obtener productos agropecuarios. Si hoy le devolvemos a la agricultura las tierras más fértiles y ubicamos al ganado en zonas marginales, debemos buscar la alimentación del mismo con los subpro-

ductos agrícolas y apoyar la agricultura con la ganadería (sin descuidar la producción de carne para exportación y consumo interno), con la producción de animales de trabajo para tracción, carga, transporte, etc.

Pero hay un elemento todavía más importante. No es suficiente entender que el agro es un complejo armónico, sino que a su vez también es parte de una estructura mayor: la economía. Esto pareciera una afirmación evidente, o un concepto suficientemente claro para todos; mas no es así. En Nicaragua, el modelo económico estaba abocado a procesos productivos aislados y competitivos, totalmente divorciados de esta integración y armonía económica.

Por eso es muy importante rescatar el legado histórico de la concepción popular, ya que así se podrá garantizar una alternativa viable, capaz de ser autoconstruida por el pueblo, tanto para la estrategia de desarrollo como para organizar la economía.

3.2. *Líneas estratégicas*

El principal lineamiento estratégico de la revolución se basa en organizar la economía en función de: a) la consolidación y defensa de la soberanía nacional, y b) la construcción de un sistema social en el que las mayorías nacionales, campesinos y obreros, asuman el papel dirigente del proceso de generación de riqueza nacional, siendo éstos los beneficiarios más inmediatos de los resultados de la actividad económica.

De entrada, la alternativa económica se formula en base a la autodeterminación de una nueva formación social. Quedan eliminadas las propuestas de intereses externos, tradicionalmente definidos por el imperio para nuestros países.

Sin perder de vista esta premisa se ha decidido mantener el perfil estructural de la economía, continuando con la agroexportación, pero potenciando la agroindustria.

Esto significa que el eje de acumulación coincide con el eje de desarrollo propuesto, lo cual nos recuerda un debate que ya se ha presentado en otros países en transición, en donde se han asumido diferentes opciones.

En torno a este debate, Lenin decía que el socialismo es la electrificación en toda la Unión Soviética, más el poder de los soviets. Era necesario desarrollar las bases de la industrialización, independientemente de que el eje de la acumulación continuara siendo el campo.

No pretendemos ahora discutir sobre ejes de modelo de desarrollo; únicamente lo señalamos como un aspecto a reflexionar y analizar.

La alternativa estratégica de Nicaragua precisa en este caso que la vocación agropecuaria del país se mantendrá todavía por varios años «hasta que los efectos multiplicadores de su desarrollo sobre los demás sectores de la economía alcancen niveles de suficiente amplitud y complejidad como para definir una estructura menos dependiente de ese sector, cuya vulnerabilidad a los factores externos y a las catástrofes climáticas determinan ciertas discontinuidades en el proceso de desarrollo» (17).

Los efectos multiplicadores a los que se refiere son: la demanda de bienes de capital, insumos y servicios que necesita el sector agroindustrial en su expansión. Por ende, los sectores energéticos, industria, construcción, etc., se desarrollarán satisfaciendo las necesidades del eje principal: la agroindustria.

El segundo componente de la estrategia es la expansión programada y orientada hacia la producción de alimentos, que cubrirá el objetivo de autosatisfacer el consumo interno de la población. Esto es determinante en función de mejorar el nivel de vida, salud y garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo en general.

Este desarrollo implica la importación de bienes de producción para modernizar y ampliar la capacidad productiva, constituyéndose así en el principal eslabón de acumulación nacional.

Por tanto, se ha adoptado la introducción de tecnologías de punta, provenientes fundamentalmente del apoyo de los países socialistas, como vía de superar el bloqueo y dependencia tecnológica norteamericana. La definición de este tipo de tecnología ha originado un debate necesario, ya que en ella se concreta la política inversionista de Nicaragua.

Es conocido que la revolución está ejecutando grandes proyectos agroindustriales, manteniendo esta tasa de inversión muy superior en relación a América Latina. De 1979 a 1985 se iniciaron 37 proyectos de inversión, cuyo monto total asciende a \$ 1,254.500 millones de dólares, y C\$ 50,172.200 millones de córdobas (córdobas de 1986) (18). Únicamente el monto en dólares representa el 25 por 100 de la deuda externa pública desembolsada hasta 1985.

Dicha inversión ha estado dirigida a la introducción de las tecnologías de punta que mencionamos. Con ello se pretende un desarrollo más acelerado del conjunto, siempre y cuando existan condiciones para que se dé un efecto multiplicador de la tecnología y la modernización en el agro. Cuando planteamos que un proyecto ha de ser el eje de desarrollo y de articulación productiva de una región, y que éste se caracteriza por una tecnología muy superior a la existente en su entorno, se corre el riesgo de que no existan ni siquiera posibilidades de comunicación o enlace entre las actividades productivas y/o económicas.

Tal es el caso del Proyecto del Valle de Sébaco, complejo industrial para enlatar verduras y frutas, cuyo componente tecnológico es elevado y de pretenciosos efectos multiplicadores.

Sin embargo, a poca distancia del complejo los campesinos continúan sembrando con espeque (arado de tracción humana). Este desequilibrio no permite al proyecto cumplir con su papel de punta y lo convierte en tecnología de polos. Situaciones parecidas se pueden encontrar en otros proyectos en ejecución.

Al mismo tiempo el efecto multiplicador de desarrollar la agroindustria con tecnologías de punta contemplaba estimular otros sectores, como industria, energía, construcción, etc. Sin embargo, al seleccionarse una tecnología tan avanzada, el resolver las necesidades de estos proyectos se convirtió en una tensión mayor que el resto del aparato productivo.

En años anteriores el sector construcción destinó todos sus recursos (asegurando únicamente los de defensa y salud) para satisfacer la demanda de los proyectos; evidentemente, con ello se tuvo que desatender la infraestructura productiva existente en todo el país.

En el mismo caso, los recursos de energía, insuficientes ya para la demanda del aparato actual (existen proyectos de inversión, pero de larga maduración), tuvieron que priorizarse para atender a la agroindustria. Ello tuvo consecuencias muy graves en 1987. Cuando hubo necesidad de racionalizar la energía, la industria trabajó a la mitad de su funcionamiento normal, y los daños a los equipos industriales, debido a los cortes de energía, fueron cuantiosos; además, la producción industrial se contrajo.

Por otro lado, para el mantenimiento de las agroindustrias de punta se requiere de insumos, materiales, repuestos, etc., que la industria no está en capacidad de proveer. Para lograrlo se debió haber invertido paralelamente en crear una base industrial mínima para mantener los proyectos.

Por ejemplo, para que el Proyecto Chiltepe pusiera a funcionar su primer ordenador fue necesario ir a comprar las mangueras a Costa Rica. Si la industria no tiene condiciones de suministrar una manguera, mucho menos podrá hacerlo con repuestos y otros materiales que requieren estas tecnologías de punta.

Prácticamente, lo que se consideró como efectos multiplicadores fueron más bien efectos de competencia, en donde el aparato productivo actual tuvo que competir con los proyectos, por los escasos recursos existentes.

Finalmente, las tecnologías de punta absorbieron casi toda la capacidad de inversión y los recursos internos disponibles, lo que repercutió en el mantenimiento de toda la capacidad instalada del país, desventaja que hace más grande la distancia entre los proyectos y el resto de la estructura productiva.

Los proyectos también han sido cuestionados por su rentabilidad financiera, por su limitado aporte al empleo, por su larga maduración, por no corresponder a las prioridades de los programas económicos y por significar costos económicos y socio-culturales muy difíciles de cubrir. Esta sería una discusión sobre la implementación de las líneas definidas, a nivel de la gestión del Estado.

En este caso lo que nos interesa destacar es la selección de tecnologías, que debe corresponder al modelo planteado. Este es otro aspecto que debe ser objeto de reflexión, estudio y análisis, en donde el elemento sustantivo entre los proyectos actuales tiene poco impacto sobre la estructura de producción existente, y muy pocas posibilidades de articulación para cumplir con su papel multiplicador.

Otro elemento fundamental del modelo económico es buscar una reinserción en el mercado internacional. Tradicionalmente, el mercado es otro eslabón de dependencia con los países capitalistas desarrollados. El proceso de transición ocasiona, por un lado, el cierre del mercado con el principal proveedor y comprador, los Estados Unidos, pero al mismo tiempo abre otros mercados permitiendo una inserción con la comunidad socialista, con el Tercer Mundo y con otros países desarrollados que pugnan también por un nuevo orden económico internacional.

La reinserción en el mercado es otra manera de ubicarse en la división internacional del trabajo, que permite nuevas relaciones de intercambio, en los productos, en la transferencia tecnológica, en las inversiones, préstamos, etc. (19).

Para Nicaragua esta nueva modalidad de comercio exterior ha sido favorable, ya que la cobertura política de apoyo con que cuenta la revolución es muy amplia, y se ha concretado en donaciones, créditos blandos y precios preferenciales, especialmente durante los tres primeros años de revolución.

Aún así los precios internacionales seguirán rigiendo las relaciones de intercambio desigual, y seguirá siendo necesario el apoyo financiero estratégico que sólo pueden brindar los países socialistas.

En los últimos años también se han buscado nuevas relaciones de intercambio con Centroamérica, situación que sería muy favorable ante la escasez de divisas. Pero esta opción estará sujeta a la disciplina de los países del área con el imperialismo norteamericano, disciplina que estará en tensión con las necesidades propias de intercambio que tienen todos los países de Centroamérica.

Es importante destacar los esfuerzos por activar nuevas relaciones de intercambio en la región, buscando la integración centroamericana. Pensamos que este proceso ha venido cobrando fuerza gradualmente, ya que es una necesidad evidente para el desarrollo de todos los países del área.

En síntesis, la alternativa de una nueva inserción es diversificar la dependencia en el mercado de exportación e importación y de fuentes de financiamiento.

3.3. *Organización social.*

Hemos planteado que tanto la concepción como las líneas estratégicas de desarrollo parten de garantizar la soberanía nacional, refiriéndonos claramente a una soberanía que responde al objetivo de autoconstruir una nueva formación social, en donde los sujetos fundamentales de transformación son las clases mayoritarias.

Sin la transformación de la organización social no tendría cabida el modelo de desarrollo que hemos planteado. Por tanto, no se puede hablar de las medidas en el plano económico sin abordar las acciones político-organizativas que requiere este proceso de transición.

Si lo entendemos de otra manera, tendríamos que preguntarnos qué cosa es la economía política del socialismo. A nuestro juicio, es la búsqueda de un proyecto económico que no sacrifique la ideología, un proyecto en donde evolucionan paralelamente la economía y la conciencia, evitando el razonamiento de que primero nos desarrollamos y después nos hacemos socialistas. O sea, que el éxito económico no resuelve el problema del proyecto socialista, algo que está en discusión hoy en día en el proceso de renovación que viven los países socialistas.

Muchos son los factores que determinan una nueva formación social: el papel del Estado, de la sociedad civil, de las organizaciones populares, de los sindicatos, el papel de la vanguardia, etc. Pero para el nivel de generalización que estamos tratando sólo abordaremos el planteamiento global de la organización de la actividad económica y la organización social de la producción.

En la actual etapa de transición en Nicaragua se ha considerado necesario mantener una economía mixta, regulada y controlada por el Estado —el cual se define como representante de los intereses populares—, dentro de un marco de organización y participación en que los diferentes sectores populares serán garantes de construir las nuevas relaciones sociales que se inician desde la esfera de la producción.

La economía mixta contempla, por tanto, la concertación de la propiedad social y la propiedad privada, con la hegemonía de la primera. La existencia de ambas en la revolución obedece a una característica importante de la Revolución Popular Sandinista.

El Área Propiedad del Pueblo (APP) se conformó con la confiscación de los somocistas; no precisamente por ser terratenientes o grandes burgueses, sino por ser somocistas, y las afectaciones realizadas por la Ley de Reforma Agraria han sido orientadas a la entrega de tierras a los campesinos.

Por otro lado, la propiedad privada continúa, impuesta por las necesidades de la unidad nacional en torno a la soberanía y el desarrollo. Tiene un lugar reservado en el proceso —incluso el capital extranjero—, pero su relevancia económica está y estará fundamentada por su incidencia en las actividades productivas, por su propia capacidad de reproducción ampliada (lo que es difícil que suceda por la actitud política de la burguesía) y también por las concesiones que el Estado le otorgue en función de garantizar el proyecto.

Algunos han denominado a la economía mixta nicaragüense como participación igualitaria de la propiedad social y la propiedad privada con hegemonía popular, y la correlación de fuerzas en torno a la posesión de los medios de producción —que han ido adquiriendo las diferentes formas de propiedad— tienen una estrecha relación con las líneas estratégicas (20).

La *actividad agroindustrial* se encuentra concentrada en el APP, administrada por el Estado e integrada por agroindustrias confiscadas al somocismo y por nuevos proyectos de la revolución. De ahí surge la viabilidad de potenciarla como eje de acumulación y desarrollo.

La *producción para la exportación y el consumo interno* es la actividad productiva mayoritaria hasta el momento. Su incidencia por formas de propiedad es la siguiente (21):

ESTRUCTURA	1978	1984
1. Gran Propiedad Privada	60,1	35,6
2. Pequeña y Mediana Producción	39,9	31,4
3. Area Propiedad del Pueblo	...	17,0
4. Propiedad Social (Cooperativas)	...	16,0
	100,0	100,0

La gran propiedad privada mantiene el 35 por 100 de las tierras, concentrando su actividad en productos de exportación, exceptuando algunas actividades, como la producción de arroz.

El Area Propiedad del Pueblo también dedica la mayor parte de sus actividades agrícolas a los productos de exportación, atendiendo también los proyectos dirigidos a la explotación intensiva de granos básicos para el consumo interno.

Finalmente, *la producción de consumo interno* es sostenida por la pequeña y mediana producción y las cooperativas. También en estos sectores se realizan actividades para la exportación, como café, ganadería y algodón. Este sector representa a la población campesina de Nicaragua y en él descansa el segundo componente de la estrategia: garantizar la autosuficiencia alimentaria.

En las demás actividades económicas se observa la siguiente relación: en la industria manufacturera el APP administra el 41 por 100 de los medios de producción (22), controlando mayoritariamente la rama metal mecánica, materiales de construcción y textil, y mantiene una participación importante en las otras ramas productivas como alimentos, vestuario, química-farmacéutica, plástico y papel, madera, etc.

El sector construcción se encuentra administrado casi en su totalidad por el APP, con un porcentaje del 92,9 por 100. Y la minería y la energía son totalmente administradas por el APP (23).

En transporte y comunicaciones, la proporción del Estado es del 60 por 100 aproximadamente. Y el último sector en el que tiene un peso relevante el área privada es el comercio, donde controla el 70 por 100 aproximadamente (24).

Trasladándonos nuevamente al hilo conductor de nuestra reflexión, la concepción de la alternativa estratégica, se puede constatar que el área socializada y los campesinos mantienen en sus manos los dos componentes clave de las líneas estratégicas: agroindustria y consumo interno.

También el área social controla las actividades fundamentales para apoyar los ejes anteriores, en el mantenimiento de la infraestructura: la rama metal-mecánica, la construcción, la energía y la mayoría de los servicios a la producción.

Sin embargo, el área privada mantiene un peso importante en la producción de exportación, que actualmente proporciona la mayor parte de las divisas al país, y también controla, aunque sea de forma diversificada y anárquica, la actividad comercial de Nicaragua.

Esta macroforma de división del trabajo por tipos de propiedad nos muestra que existe viabilidad para la ejecución de las líneas estratégicas. No obstante, en el corto plazo se mantiene una importante dependencia económica con respecto a la gran producción privada de agroexportación.

Otro elemento relevante en la organización de la actividad económica es la dinámica de relaciones que se establecen en esta nueva estructura de propiedad de los medios de producción.

Se ha planteado que el área socializada, el sector más avanzado tecnológicamente, compita directamente con la gran producción privada, obligando de esta manera a que los sectores de la burguesía desarrollen su producción. Pero, por otro lado, se le ha asignado la tarea de apoyar e impulsar la pequeña producción y las coope-

rativas, tanto en el campo como en la industria, brindándoles apoyo directo en servicios y asistencia técnica a la producción.

Como último elemento de la organización económica, la existencia del APP es vital desde la óptica de la planificación. La planificación trata de optimizar los recursos humanos y materiales que Nicaragua posee. La gran capacidad reguladora que implica el poseer más del 40 por 100 de los bienes de producción y servicios que el pueblo concentra en el área social debe ser dirigida de la mejor manera posible por medio de la planificación global de la actividad económica.

Aquí no pretendemos evaluar cómo se han llevado a la práctica estas orientaciones, sino señalar cuál es el papel asignado a cada uno de los sectores por tipo de propiedad y sus relaciones, para objetivizar su coherencia con las líneas estratégicas.

Siendo que el APP debe entrar en competencia abierta con el sector privado grande y mantener relaciones de intercambio preferenciales para formas de producción más atrasadas, que son realizadas por sectores populares, queda de manifiesto la intención de que la economía se organice a nivel macroestructural en función de los intereses del proyecto económico y social.

El mayor potencial con que cuenta Nicaragua para contrarrestar las limitaciones y debilidades del desarrollo convencional ha sido la movilización popular en torno a la producción y el desarrollo.

Esta participación ha adquirido tres modalidades distintas que corresponden a los diferentes niveles de inserción de los sectores populares en el proyecto.

La primera modalidad es la lucha de algunos sectores populares por ser considerados —además de sujetos políticos de la revolución— como sujetos económicos del desarrollo, en función de lograr sus reivindicaciones históricas. Tal es el caso de la Costa Atlántica y de los campesinos de las zonas de guerra, que voluntariamente tomaron las armas como medida de presión para obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

Esta situación presionó al proceso nicaragüense a dar un salto cualitativo en torno al reconocimiento de las etnias en Nicaragua, como sujetos políticos y económicos de la integración nacional, a la vez que aceleró el aletargamiento del avance de la reforma agraria en las zonas de guerra.

La segunda modalidad es la movilización al trabajo voluntario masivo, en el que han participado amplios sectores de la población, principalmente jóvenes estudiantes, integrantes de los barrios, trabajadores estatales, obreros, etc. Su aporte ha sido significativo para contrarrestar la insuficiencia de fuerza de trabajo en los rubros de exportación.

Y la tercera modalidad, a nuestro juicio la más sustantiva en torno a la nueva formación social, se concreta en el proceso de apropiación de la conducción económica al interior del área socializada.

Con la conformación del Área Propiedad del Pueblo nacieron nuevas relaciones de producción, que podemos objetivizarlas en la esfera de la producción, a lo interno de las fábricas o de las unidades productivas en el campo. La primera característica de cambio es que la acumulación que se genera en estas unidades ya no es apropiada para el enriquecimiento de un capitalista, sino que por ella se pretende generar nuevas posibilidades de producción o de satisfacción de las necesidades de reproducción del pueblo en su conjunto.

A lo interno de las empresas sociales ocurren infinidad de experiencias tendentes a la participación de los trabajadores en la conducción y gestión de las mismas, en donde las relaciones de los cuadros técnicos y dirigentes con los obreros se matizan (aunque sea de manera incipiente) por atender la problemática de la producción.

La participación debe entenderse como un mecanismo totalmente nuevo, como una situación a la que se asiste sin tener conocimiento previo, a veces más por intuición que por conciencia, y que surge de la práctica diaria de la producción.

En la dinámica interna de las fábricas y empresas se puede palpar claramente la concreción de la concepción popular para organizar la producción, en contraposición con la respuesta limitada del Estado para resolver los problemas de la producción.

El problema del crecimiento de la productividad se orientó durante mucho tiempo a lograr un mayor aporte de los trabajadores. Sin embargo, en algunas fábricas los obreros demostraron que la principal reserva productiva estaba en la organización social de la producción. De ahí surgieron las Brigadas Económicas, que demostraron la eficiencia del trabajo colectivo, sobre todo en los procesos en cadena (25).

Esta no es una simple respuesta a los cuellos de botella de la producción, sino que es un avance tecnológico potencialmente a desarrollar. Cabe señalar entonces que la reserva productiva más importante en estos momentos es la creatividad de los trabajadores.

Las diversas experiencias de participación de los trabajadores nicaragüenses adquieren una cantidad de formas concretas que harían imposible su exposición. Incluso no pueden desligarse del tipo de tarea productiva que se realiza, y en particular de la historia específica de los trabajadores en cada centro (26).

De cualquier forma, lo importante es que «las clases que sustentan la revolución están, hoy por hoy, frente al imperativo histórico de capacitarse para el ejercicio del poder político» (27), y el poder económico. Del mismo proceso de trabajo se van gestando las nuevas relaciones sociales que, con el apoyo de la movilización popular en torno a la producción, deberán consolidarse, desarrollarse y generalizarse hacia la sociedad en su conjunto en el proceso de transición.

3.4. *La base del modelo*

Ahora veamos cuáles han sido las bases de despegue que contempla el nuevo modelo, las transformaciones estructurales necesarias para la consecución de la alternativa estratégica.

El primer paso transformador fue la creación del APP, que cambió sustancialmente la correlación de fuerzas en la estructura de tenencia de los medios de producción y modificó la incidencia económica de los diferentes sectores.

El segundo elemento ha sido la implementación de la reforma agraria que con sus componentes de política permite afectar el latifundio y racionalizar el uso de la tierra en base a su potencial y vocación agrícola, mediante la creación de zonas de desarrollo agropecuario.

Finalmente, identificamos el nuevo papel del Estado, fundamentado, en primer lugar, en una clara orientación por regular y administrar la economía en función del proyecto revolucionario; en segundo lugar, porque incorpora en su gestión el interés y opinión de los sectores populares como vía de crear mecanismos de participación directa en las instancias de dirección económica.

Estos tres elementos se constituyen en base fundamental de los cambios; se garantiza una incidencia en las actividades puntuales que se pretende potenciar, se da un nuevo ordenamiento productivo macroestructural y se asigna al Estado el control y regulación de la economía.

4. Control y regulación de la economía

Aquí es donde nos planteamos el reto fundamental del momento: ¿Cómo lograr, en el mismo tiempo y espacio, sortear una de las crisis más agudas de la historia, enfrentar una guerra de agresión y construir las bases para un desarrollo económico dentro de una nueva formación social?

En términos más concretos: ¿Cómo controlar y regular la economía, dentro de tantas irregularidades, cuando los países sin irregularidades (desarrollados) no han podido hacerlo? ¿Cuáles deben ser los instrumentos de política económica que se pueden y deben utilizar?

Nicaragua, con errores y aciertos, ha tratado de dar respuestas en la práctica a estos interrogantes, a la vez que ha definido diferentes componentes para la política económica, que han sufrido modificaciones como producto de diversos efectos coyunturales.

Se sigue considerando que el primer instrumento de conducción es la *planificación económica y el control de excedentes*. Se complementa con un segundo instrumento que es *el control del sistema financiero y el comercio exterior*, nacionalizados con el triunfo de la revolución. Y el tercero es la política de *redistribución del ingreso*.

La misión de estas tres herramientas combinadas es ordenar los recursos económicos, financieros y humanos en torno a las líneas del proyecto. Sin embargo, las medidas de política económica no han tenido los efectos esperados y en algunos casos han agudizado algunos desequilibrios económicos.

Esto ha ocasionado que, dentro de las prioridades nacionales (sin desatender la defensa), se centre hoy la atención en la problemática económica. Todas las instancias del Estado, los organismos de masas, los institutos de investigación, el sector privado, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc., hoy realizan evaluaciones, análisis y conclusiones, que fluyen de manera intermitente, dando paso a un amplio marco de reflexión nacional.

Se trata de medir con objetividad cuáles han sido los resultados de la política económica en sus diferentes momentos de ejecución, deslindando los efectos positivos y negativos; cuáles de ellos son producto de condiciones insalvables por el momento, y cuáles de ellos son errores de concepción, de diseño o implementación de la política económica.

El aspecto más general en el que se concentra el debate parte de ubicar cuál es el papel de las relaciones mercantiles en una transición como la nuestra. Esta discusión no es exclusiva de nuestro proceso, ya que también en los países socialistas es objeto de análisis. Asimismo cuál es el fin último de las relaciones mercantiles dentro de una economía centralmente planificada.

Este planteamiento surge fundamentalmente a partir de las medidas económicas del 14 de junio de 1988, en donde se establece la liberación de los precios (con excepción de algunos productos sensibles), la liberación de los salarios (en función de la rentabilidad de cada empresa) y la devaluación de la moneda. Se plantea que precios, salarios y moneda serán regulados por el mercado, lo que significa entrar a la competencia y, en consecuencia, a mejorar la eficiencia, aumentar la producción y la productividad.

La aplicación de estas medidas generó un amplio debate sobre los riesgos y consecuencias que puede tener el dejar a la regulación del mercado aspectos tan sensibles para el nivel de vida de la población.

En consecuencia, se dio inmediatamente la corrección de los precios de la gasolina, derivados y de todos los productos que dependen de éstos, así como de aquellos que consumen insumos importados. Como respuesta, el sector privado felicitó al Estado por sus medidas; en cambio, la respuesta de los sectores populares fue de

sorpresa y preocupación. Intuitivamente se consideraba que dichas medidas no iban a detener la inflación, pero sí disminuía aún más el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados.

Este paquete de medidas ha tenido un costo político muy alto. La inconformidad de los sectores populares se ha manifestado a todos los niveles, en asambleas, entrevistas, encuentros, etc. A pesar de las manifestaciones de inconformidad y preocupación, la respuesta popular pone de manifiesto el enorme capital político con que cuenta la revolución. Ningún país de América Latina se encuentra en condiciones de realizar dichos ajustes, sin enfrentar una enorme reacción popular que sólo podría ser contenida con represión.

Los debates sobre estas medidas han sido muy categóricos. A su vez, la burguesía y la derecha han aprovechado esta coyuntura para afirmar que el fracaso de la economía planificada ha obligado a los sandinistas a regresar a la economía de mercado.

Por otro lado, los investigadores y analistas han entrado a una amplia discusión de posiciones, a veces muy categóricas. Nosotros no queremos introducirnos a las apreciaciones, en donde de entrada se establece una contradicción insalvable entre la planificación y el mercado, o las afirmaciones de que en Nicaragua nunca ha existido planificación. Más bien pensamos que existe un ejercicio válido de planificación económica que ha mostrado limitaciones y errores, pero que también ha tenido aciertos. Ya se ha mencionado que la disminución del déficit fiscal ha sido un avance importante. Y, en general, dadas las condiciones habría que preguntarse en qué situación se encontraría Nicaragua si sólo nos hubiéramos regido por la ley del mercado.

Pensamos que Nicaragua ha sido, no sólo en la política y la defensa, uno de los procesos más creativos, dinámicos y cambiantes, con una admirable capacidad para saber interpretar la coyuntura, con la habilidad de aglutinar a las fuerzas determinantes y con la suficiente madurez para no desdeñar ninguna trinchera de lucha.

Esta no es una característica exclusiva de la política o la estrategia político-militar, sino que puede y debe aplicarse también a los fenómenos económicos.

Sin pretender obviar los errores cometidos, pensamos que en Nicaragua hay importantes esfuerzos de planificación económica, con la utilización de mecanismos administrativos y mercantiles válidos y correctos.

Recordemos que hace diez años existía un debate similar en torno al proceso insurreccional, en donde se planteaba si era posible o no hacer la revolución en Nicaragua (28). Ahora se debate si será posible o no conducir la débil economía nicaragüense por el camino de la recuperación, combinando la planificación y el mercado, en tránsito hacia el socialismo.

Superando esta disyuntiva de contradicción insalvable, podemos ubicarnos en el terreno, a nuestro juicio correcto, de analizar el comportamiento de la economía en función del instrumental de política económica, en donde se trata de retomar la discusión sobre cuáles son los aspectos de la dinámica económica que deben ser controlados por el Estado y cuáles deben soltarse para que los regule el mercado.

Es decir, cómo se van a relacionar y coexistir el mercado oficial y el mercado libre, sin perder de vista que muchas de las leyes del mercado no funcionan para Nicaragua. Por ejemplo, el caso del precio de la divisa. Esto podría servir como un estímulo a la producción, aunque no funciona de forma automática, porque aquí las importaciones se realizan en función de las necesidades y no en base a criterios del valor de la divisa (29).

Todo lo anterior no implica que no podemos revisar y evaluar cómo se realiza y ejecuta la planificación, en donde sí existen limitaciones que pueden y deben ser superadas.

En el caso de la planificación, lo que más se ha hecho evidente es la desarticulación de los programas y las políticas sectoriales, situación que no solamente afecta a los sectores no priorizados, sino que, a la larga, también repercute en el sector priorizado por su relación con éstos. Es necesario romper con esta equivocada priorización, que ha dado como resultado, por ejemplo, un descuido considerable en el sector industria.

Otro elemento determinante ha sido la gestión del Estado, resultado de la misma desarticulación programática, orgánica, y de los niveles de formación y concepción de los cuadros en las diferentes instancias de dirección y ejecución.

La organización del Estado no fue transformada de manera sustancial. Aunque se crearon algunos ministerios y se ubicó a los cuadros más capacitados en los ministerios priorizados, no se dio una reestructuración orgánica que correspondiera al nuevo papel del Estado dentro del proyecto definido y a la interrelación de las diferentes funciones de gestión.

En cierta medida, esto ha sido el origen de la compactación del Estado, iniciada en los últimos meses como una medida complementaria a la Ley de Reforma Monetaria decretada en febrero de 1988. No se trata solamente de reducir el aparato, sino de integrar los niveles de gestión que deben caminar en forma conjunta. De ahí surge la integración del Ministerio de Economía, que asume funciones complementarias de Industria y Comercio Interior, así como la fusión de otros entes estatales.

Independientemente de que estas medidas pueden ser adecuadas, creemos que el problema de fondo está en transformar el funcionamiento del Estado, definir sus relaciones con el sector socializado, con el sector privado y sus relaciones internas; pero, sobre todo, transformar sustancialmente la manera en que se toman las decisiones económicas.

A nuestro juicio, el aspecto central en la formulación de medidas de política económica a corto plazo debe ser el incorporar, como una línea de trabajo, la movilización popular en la producción, como un proceso que balancee la agresividad del monetarismo de hoy.

Cuando decimos movilización popular no nos referimos a actos de masas, ni al trabajo voluntario masivo, sino que nos referimos a un movimiento de integración nacional, sobre todo de los sectores populares, en torno a resolver o minimizar la problemática productiva y económica. Este movimiento puede adquirir múltiples expresiones orgánicas, pero lo importante es impulsar a todas las fuerzas sociales mayoritarias para que se apropien del proyecto económico y contrarresten las recetas económicas como generalmente suelen darse.

Todos los factores relacionados con el control y regulación de la economía son meritorios de análisis profundo, fundamentalmente en información sistematizada y ordenada de sus resultados. Actualmente se están realizando importantes esfuerzos que seguramente abrirán una nueva perspectiva para los cambios a realizar en política económica. Nuestra pretensión era plantear lo que consideramos los aspectos centrales de esta reflexión.

Observación general

Hemos propuesto un hilo conductor de análisis de la problemática económica, que parte de considerar el devenir de la economía frente a la crisis, en función de la alternativa estratégica y sus componentes. O sea, precisar cuál es la respuesta del proceso de transición en Nicaragua frente a la crisis, identificando los interrogantes y soluciones que se plantean a corto, mediano y largo plazo.

Al abordar la dimensión estructural, nos parece necesario retomar las líneas estratégicas, rescataando un marco conceptual que debe surgir de la identidad de nuestro pueblo. Precisar cómo debe entenderse esta concepción en relación a los sectores populares, no sólo como sujetos políticos, sino como sujetos económicos del desarrollo.

Pensamos que la vanguardia, como conductora del proceso revolucionario, asume la tarea de articular los lineamientos y directrices necesarios en el ámbito político, social y económico. Aunque objetivamente es imposible separarlos, si retomamos la dimensión económica podemos identificar cómo la vanguardia económica ha puesto el acento en el avance tecnológico, dejando de lado, en cierta medida, el potencial latente existente en las percepciones populares de cómo organizar e integrar las actividades productivas y cómo organizar la economía.

Esta concepción popular ha sido, hasta cierto punto, anulada por la dependencia. Sin embargo, a pesar de la transculturación de los hábitos de consumo social y productivos, aún existen raíces que podemos y debemos retomar, lo cual no debe tomarse como un requerimiento de voluntad política, sino como una necesidad de incorporación consciente de los sectores populares al desarrollo.

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 1980-1987

Concepto	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
<i>Indicadores económicos de corto plazo</i>								
	TASAS DE CRECIMIENTO							
Producto Interno Bruto	4,6	5,4	-0,8	4,6	-1,6	-4,1	-0,4	1,7
Producto Interno Bruto <i>per cápita</i>	1,5	2,0	-4,1	1,2	-4,9	-7,4	-3,7	-1,4
Tasa de desocupación	22,4	19,0	19,9	18,9	21,1	20,9	22,1	25,0
<i>Precios al consumidor</i>								
Diciembre a diciembre	-2,9	23,2	22,2	32,9	50,2	334,3	747,3	1.161
Sueldos y salarios reales	...	1,1	-5,0	1,7	-6,9	-5,7	-30,0	-40,0
Ingresos corrientes del Gobierno	139,2	21,4	34,6	40,9	54,2	136,9	278,2	407,0
Gastos totales del Gobierno	113,4	32,2	32,1	80,8	33,9	138,8	227,0	398,0
Déficit fiscal/PIB	9,2	12,4	13,6	30,0	24,8	23,3	15,8	15,8
Valor corriente de las exportaciones	-26,4	11,9	-19,2	5,4	-8,7	-21,4	-13,6	18,5
Valor corriente de las importaciones	77,9	14,1	-20,6	9,3	-1,7	9,3	-1,8	-1,4
MILLONES DE DÓLARES								
<i>Sector externo</i>								
Deuda extena pública, desembolso	1.825	2.566	3.139	3.788	4.362	4.936	5.773	6.115

Fuente: CEPAL. *Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe*, 1986, Nicaragua, 1987. Estimaciones de SPP. Elaborado: SPP, enero 1988. Publicado en *Barricada*.

Tanto la estrategia de desarrollo como la dinámica de la economía tienen que buscar el encuentro en donde podamos interrelacionar lo nuevo (la tecnología seleccionada) sin copiarlo, y lo viejo sin repetirlo. En las raíces culturales existe el respeto por el avance científico y también el sentido común que aporta la experiencia histórica heredada, tanto para el desarrollo como para organizar la economía.

Ser selectivos con el avance tecnológico nos permite utilizar al máximo nuestros recursos. Por ejemplo, un recurso abundante en nuestro país es el sol, y creemos que Nicaragua no debe escatimar esfuerzos por incorporar los avances tecnológicos para la producción de energía solar. Impulsando paralelamente la modernización de la producción mayoritaria, no podemos pensar en el desarrollo mientras el 80 por 100 de los campesinos siembren todavía con espeque. En este caso sería un avance introducir, en donde sea factible, la tracción animal. Aún no hemos aprovechado al máximo el riego por gravedad, la utilización de subproductos agrícolas (pulpa de café, rastrojos agrícolas, gallinaza, etc.) para la alimentación del ganado. Aún hace falta organizar el proceso de trabajo en las fábricas, en las instancias de servicios y estatales, etc.

Todavía existen muchos recursos sin aprovechar. La crisis económica nos debe obligar a observar que en nuestra realidad existen muchas reservas productivas, capaces de ser aprovechadas, logrando que la creatividad popular se convierta en un enorme movimiento masivo en torno a organizar y hacer más eficiente la producción a través de mecanismos impulsados y no ignorados por la vanguardia económica.

El proyecto político nicaragüense tiene un enorme arraigo en las sectores populares. Nadie duda a estas alturas de que la revolución ha sido apropiada por el pueblo en su conjunto; pero no sucede lo mismo con el proyecto económico, porque no ha incorporado estas apreciaciones populares en torno a la economía política del proceso, que, insistimos, tiene que desarrollarse paralelamente a la conciencia.

Y ésta no se adquiere por decreto, sino que se va construyendo en forma cotidiana, con las mismas o mayores limitaciones que impone la crisis.

NOTAS

(1) Alatríste, Alatríste: «La rebelión de Canek», México: *Historia de un pueblo*, SEP, Editorial Nueva Imagen, 1980.

(2) Editorial *Pensamiento Propio*, CRIES: «Desarrollo autónomo y negociación soberana», número 47, diciembre 1987.

(3) López Pérez, Francisco: «¿Economía de mercado vrs. economía planificada?», *Boletín Socio-económico*, núm. 8, INIES, junio-julio 1988.

(4) Timossi, Gerardo: «La ayuda no es gratuita», *Pensamiento Propio*, CRIES, núm. 47, diciembre 1987.

(5) Varios autores: «Nicaragua: Cambios estructurales y política económica (1979-1987)», *Boletín Socio-económico*, núm. 4, INIES, julio 1987.

(6) Valverde, Juan: «La crisis y las distorsiones de la economía nicaragüense», *Boletín socio-económico*, núm. 8, INIES, junio-julio 1988.

(7) S. P. P.: *Nicaragua, principales indicadores*, 1980-1987.

(8) Valverde, ibídem.

(9) Valverde, ibídem.

(10) Valverde, ibídem.

(11) Coraggio, José Luis, y Deere, Diana: «Introducción: Las condiciones de la transición en los pequeños países periféricos», *La transición difícil*, Editorial Vanguardia, 1987.

(12) Coraggio, y Deere, ibídem.

(13) Alatríste, ibídem.

(14) Alatríste, ibídem.

(15) Alatríste, ibídem.

(16) Alatríste, ibídem.

- (17) Midinra: «Marco estratégico del desarrollo agropecuario», vol. I, *Conceptualización e Instrumentalización de la Estrategia*, diciembre 1983, Div. Gral. de Economía.
- (18) Cabieses, Hugo: *Economía nicaragüense* (1979-1986). *Marco global para su análisis*, UNAN-ULA, julio 1987.
- (19) Coraggio, y Deere, ibídem.
- (20) Cabieses, ibídem.
- (21) Cabieses, ibídem.
- (22) Castillo, Melba: «Implicaciones de un reajuste monetario en el sector industrial», *El debate sobre la forma económica*, CIERA, 1988.
- (23) Cabieses, ibídem.
- (24) Cabieses, ibídem.
- (25) García Gallardo, Araceli: «La productividad en FANATEX», *Boletín Socio-económico*, número 6, INIES, diciembre 1987.
- (26) García Gallardo, Araceli: «Apuntes sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas de la COIP», ponencia a la Mesa Redonda Internacional sobre Autogestión y Participación Laboral en Países en Desarrollo, OFIPLAN-CPE-CDAD, enero 1982.
- (27) Ruiz, Henry, Cdte.: «El papel político del APP en la nueva economía sandinista», exposición en el Seminario del 19-20 de abril de 1980, mimeo COIP.
- (28) Núñez Soto, Orlando: *La transición difícil*, Editorial Vanguardia, 1987.
- (29) Elizondo, Ligia: *Comentarios. El debate sobre la reforma económica*, CIERA, 1988.

BIBLIOGRAFIA

- CIERA: *La mujer en las cooperativas agropecuarias en Nicaragua*, 1984.
- Dirección General de Reforma Agraria: *Elementos sobre la atención al campesinado y promoción cooperativa*, enero 1988.
- : *Registro Nacional de Cooperativas - 1986*, febrero 1987.
- Garret, Patricia: «La reforma agraria, organización popular y participación de la mujer en Chile», 1964-1973, en *Las trabajadoras del agro*.
- Instituto Nicaragüense de la Mujer: *Inventario de las organizaciones campesinas en las regiones II, IV y VI*, Dirección de Investigación.
- : *Marco teórico para el análisis de la mujer campesina en Nicaragua*, Area de Investigación, marzo 1988.
- : *Mujer campesina y organización*, Area de Investigación, marzo 1988.

Principio y fin de la segunda violencia en Colombia. Una sociedad en transición

Luis B. Carbajal C. *

Introducción

A diferencia de los demás países de América Latina, hasta mediados de la década de los setenta, Colombia fue un país de una relativa estabilidad económica y política, con excepción del período 1948-1957, que se conoció como la época de la violencia, con una lucha homicida entre los Partidos Liberal y Conservador que arrojó cerca de 200.000 muertos.

En los últimos tres lustros ha surgido un nuevo período violento, pero de connotaciones y significados distintos, con protagonistas diferentes y como expresión de un cambio social importante.

Sin embargo, la violencia de hoy no se expresa en una «guerra convencional» (como podría pensarse por el sensacionalismo de las informaciones periodísticas), en la cual existen bandos que se confrontan abiertamente, con una virtual parálisis de las actividades cotidianas. No. Lo que se está viviendo en el país es una lucha irregular entre diferentes grupos o fracciones, mediante persecuciones, secuestros, actos terroristas, etc., que crean un permanente estado de zozobra e intranquilidad, si que también numerosas víctimas, tanto en los sectores populares como en los sectores medios y altos de la población.

Arrojar luz sobre las características de esta etapa violenta, sus protagonistas, sus causas y consecuencias es el objeto principal de este trabajo.

I. Las violencias

Para un observador prevenido, como la mayoría de la prensa extranjera, la violencia que se presenta cotidianamente tiene la apariencia de un conflicto único que amenaza la estabilidad del país y que hace de Colombia una nación parecida al Líbano o a El Salvador.

La verdad es un tanto diferente, pues en la actualidad existen varios conflictos violentos, con manifestaciones diferentes, aunque de causas comunes.

A continuación se resumen los tres tipos principales de conflictos violentos que se están viviendo:

* Corresponsal del *Financial Times* en Bogotá. Economista.

1. *El conflicto gobierno-trafficantes de drogas*

Se trata de la más amplia confrontación en la cual están comprometidos, de una parte, el gobierno y el establecimiento —las fuerzas armadas, los medios de comunicación, el poder judicial, los organismos de investigación, etc.—, cuyo poder se ha concentrado con el fin de perseguir y capturar a los cabecillas de los «cárteles» y a sus bandas y organizaciones armadas. El otro contrincante está compuesto por los traficantes de drogas, reunidos en dos cárteles principales (o «familias», en el lenguaje de las mafias), que ejercen su acción en Colombia, y que son: el cártel de Medellín y el cártel de Cali, con verdaderos ejércitos clandestinos de sicarios y mercenarios que cumplen funciones de retaliación e intimidación, mediante secuestros, asesinatos y actos terroristas. El primero de ellos dirigido por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y el segundo, por Rodríguez Orejuela.

Estas organizaciones tienen como función el procesamiento de la coca, especialmente traída del Ecuador y del Perú, y el transporte y comercialización de la cocaína hacia los mercados de consumo, especialmente Estados Unidos y Europa.

El cártel de Medellín opera fundamentalmente en las regiones de Antioquia y la Costa Atlántica, en tanto que el de Cali tiene sus principales bases de operación en el suroccidente del país.

Estos dos cárteles, además de mantener una férrea y sangrienta competencia entre sí, son también los responsables de numerosos asesinatos de personas vinculadas a movimientos políticos, especialmente de izquierda (Unión Patriótica, en particular), jueces, empresarios, periodistas, etc., que no han accedido a sus peticiones o que han denunciado sus actividades. Estos crímenes se cometen a través de organizaciones paramilitares, entrenadas por mercenarios extranjeros, y que en un comienzo fueron promovidas por las propias fuerzas armadas, bajo la idea de organizaciones de autodefensa contra los grupos guerrilleros.

El ministro de Gobierno de la época (1987) y hoy precandidato liberal, César Gaviria, en debate suscitado ante el Congreso de la República, reconoció la existencia de más de 140 grupos armados y de numerosas bandas de sicarios al servicio de dichos carteles.

A estas organizaciones y a sus cabecillas se les atribuyen en los últimos años estos hechos delictivos:

- Asesinato de jueces, dirigentes políticos y altos funcionarios públicos, tales como el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; el procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán; el comandante de la Policía de esa región, y, más recientemente, el precandidato presidencial, Luis Carlos Galán, cuya muerte al decir de muchos rebosó la copa de la paciencia del Establecimiento y del gobierno.

- Corrupción e intimidación de funcionarios estatales, tanto militares como civiles.

- Terrorismo sobre la población, especialmente en el presente año, mediante amenazas y bombas colocadas en los más disímiles lugares, tales como establecimientos comerciales, financieros, centros educativos, medios de comunicación, etc.

Este conflicto, a nuestro entender, ha sido estimulado y auspiciado por los Estados Unidos, con ayuda militar y fuertes presiones diplomáticas y económicas.

Sería prolijo examinar las diferentes hipótesis sobre las razones de esta actitud de los Estados Unidos, pero es bueno indicar que van desde la concepción que han tenido los norteamericanos respecto a que el combate antidroga debe realizarse exclusivamente enfrentando su producción y oferta hasta razones de orden geopolítico, en el sentido de una estrategia orientada a aislar a Noriega, en búsqueda de su derrocamiento y la posterior denuncia del tratado Torrijos-Carter para la devo-

lución del Canal de Panamá, o su interés en aislar a Cuba y Nicaragua, acusándolos de apoyo al narcotráfico. Ello sin mencionar, en una interpretación bastante torpe, que el interés de los Estados Unidos en esta lucha es simplemente una actitud defensiva por la sangría de dólares de su economía.

¿Cuáles son las características de este conflicto en la actualidad? Por el lado de los cárteles existen dos acciones que involucran a la población y que se cumplen en forma reiterada. Por una parte, actos terroristas con la colocación de bombas (dos a cuatro diarias de promedio) en diferentes ciudades. Por otra parte, la amenaza permanente a dirigentes políticos y funcionarios públicos de alto nivel. Ello ha obligado al gobierno a ampliar los operativos de seguridad, sobre todo porque el país está en plena campaña electoral, que culminará en marzo del año entrante, para elegir al presidente de la República, alcaldes y renovación de los cuerpos colegiados, a nivel regional y nacional.

Más que el impacto real de estas acciones —de las cuales son más los daños materiales que las víctimas humanas, a pesar de su importancia individual— debe valorarse el impacto psicológico y de intranquilidad pública de toda acción terrorista, orientada a que los ciudadanos presionen cambios de actitud del gobierno, especialmente en su persecución a los cárteles, o eventualmente un cambio de gobierno, por un golpe militar.

Por el lado del gobierno, la lucha se expresa en cuatro acciones específicas:

- Allanamiento e incautación de las propiedades de los traficantes, con lo cual se busca, ingenuamente, desquiciarles su poder económico, cuando en verdad el mayor volumen de su inmensa riqueza y poderío se encuentra depositado en otros países.

- Persecución de los cabecillas, especialmente de dos de ellos: Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Por la denuncia de su paradero el gobierno ha ofrecido 250.000 dólares.

- Extradición a los Estados Unidos, mediante procesos administrativos sencillos. Se trata de la principal arma contra los traficantes, pues es a lo que más le temen, a tal punto que el concepto de «extraditable» es el más grave calificativo que a alguno de ellos se le pueda imputar.

- Acciones tendentes a lograr una mayor solidaridad y apoyo internacionales.

El balance de las acciones del gobierno, con excepción de la gestión internacional, es bastante modesto, aunque se han incautado propiedades de gran valor. Lo mismo sucede en cuanto a la captura de miembros prominentes de estas organizaciones, tal vez con excepción del real o supuesto tesorero del cártel de Medellín y algunos otros personajes de nivel secundario.

No obstante, en el campo internacional, el gobierno, y en particular el presidente Barco, sí viene registrando éxitos de consideración, sobre todo en cuanto a *vender la idea* (correcta, por lo demás) de que el problema del tráfico ilícito de drogas y narcóticos no es de carácter nacional, sino internacional, para cuya erradicación se requiere el concurso tanto de los países productores como de los consumidores y el apoyo y la comprensión de los países industrializados, tanto en el campo específico de dicha lucha como en la solución de sus problemas de financiamiento y comercio exterior, particularmente el adecuado manejo de la deuda externa. Consecuencia inmediata de esta gestión de Barco ha sido el cambio (leve, si se quiere) de los Estados Unidos en relación con el Pacto Internacional del Café.

Por el lado de los traficantes, han logrado intimidar a la población en una cierta proporción a tal punto que se empiezan a escuchar voces que piden buscar «otras vías de arreglo», pero no a tal grado que se vislumbre la posibilidad de un cambio brusco del gobierno, como es usual que se rumoree en épocas de zozobra pública.

En síntesis, este conflicto gobierno-trafficantes, a pesar de su importancia, no constituye, hoy por lo menos, una amenaza real contra las instituciones. Más aún. Como se verá más adelante, todo parece indicar que se perfila la posibilidad —así sea remota— de que se establezca un nuevo trato del problema a mediano plazo.

2. El conflicto guerrillero

Antes de describir las características de los diferentes grupos guerrilleros que operan en el país, valga anotar que la mayoría de ellos actúa en zonas de colonización, es decir, en áreas periféricas, de una baja densidad de población. De allí que su impacto real, económico y social, es relativamente pequeño y su opción de ganar el poder por las armas es prácticamente nulo. Sin embargo, su importancia política y su influencia en el estado de ánimo público es de alguna significación.

Los grupos que operan en el país, y algunas de sus características y efectos en el orden público y en la comunidad son:

—*Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)*, el más antiguo grupo guerrillero, con un número de militantes no inferior a 15.000 efectivos, diseminados en más de 30 frentes, cuya acción es reivindicar la tierra para los campesinos y presionar a los terratenientes en búsqueda de mejor trato para ellos. Su acción ha logrado el dominio de algunos espacios geográficos, pero su beligerancia es relativamente pequeña, y sólo por razones de seguridad o para consolidar sus «conquistas» realiza enfrentamientos con el ejército.

—*El Ejército de Liberación Nacional (ELN)*, de origen castrista, y que opera básicamente en zonas selváticas del centro y nororiente del país, en las áreas de explotación petrolera y sus oleoductos. Su acción en los últimos años ha estado orientada a reivindicar los derechos nacionales sobre el petróleo. Se trata de un grupo muy beligerante y de impacto público, por cuanto sus atentados contra los oleoductos aparecen en la primera plana de los periódicos y han menoscabado el ingreso petrolero, a tal punto que recientemente el gobierno se vio obligado a aumentar el precio de la gasolina y a aceptar un debate abierto en el seno del Congreso Nacional sobre las condiciones de la inversión extranjera, el cual se realizó con el resultado de que hubo cierto consenso sobre la conveniencia de mejorar la participación colombiana en los contratos de asociación.

A pesar de ello, dado que estos atentados, además del efecto económico, traen serios daños ecológicos, le han restado simpatía dentro de la población.

—*El Ejército Popular de Liberación (EPL)*, de origen maoísta, cuya acción política se orienta a las reivindicaciones de los sindicatos agrarios, especialmente en la zona de Urabá, región dedicada a la exportación de banano. Es un grupo de presión para obligar a mejorar las condiciones de los trabajadores, mediante amenazas, chantajes, secuestros, etc.

—*El grupo Quintín Lame*, de orientación indigenista, que opera en el suroccidente del país, y cuya reivindicación principal es la defensa de la tierra para los grupos aborígenes.

—*El Movimiento 19 de Abril (M-19)*, conformado con ex dirigentes de las FARC o comunistas, nacido como propuesta a un «supuesto» robo de las elecciones al general Rojas Pinilla, candidato presidencial en 1970. Hasta hace algunos años era el movimiento guerrillero de más raigambre popular, con una plataforma populista y nacionalista, con acciones de un amplio efecto publicitario, tales como el robo de la espada de Bolívar, la toma de la Embajada Dominicana y del Palacio de Justicia. Sus errores tácticos y la sangrienta matanza que propiciaron con su acción en la toma del Palacio de Justicia, donde fueron inmolados casi la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, le restaron popularidad entre la población. Además, la muerte de sus principales dirigentes lo ha llevado a una

decadencia y a una merma de su capacidad de combate. No representa en realidad una amenaza seria para el Establecimiento.

Es con el único grupo con el que el gobierno ha logrado llegar a unos acuerdos preliminares para un proceso de paz.

Hecha esta visión panorámica del conflicto guerrillero, según la cual no se percibe tampoco como una amenaza evidente contra el Establecimiento, queda el interrogante de las razones por las cuales los últimos gobiernos le han dado tanto énfasis a una «política de paz» con estos grupos. Tres factores explicarían este comportamiento:

- La presión que ejercen los terratenientes de las zonas con presencia guerrillera ante la pérdida de dominio sobre vastas extensiones que, por periféricas que sean, no dejan de tener importancia. Y además porque los grupos guerrilleros los someten a pagos de impuestos, denominados «vacunas», que afectan igualmente su patrimonio.

- Porque en dos casos concretos constituyen una amenaza seria a renglones productivos significativos como en el caso del petróleo y del banano, productos de exportación.

- La presencia, voluntaria o involuntaria, de una alianza que los robustece mutuamente entre cárteles y guerrillas por tratarse de zonas de procesamiento de coca, con excepción de los casos en que aquéllos formaron sus propios ejércitos privados —con auxilio de terratenientes y las autoridades— denominados «grupos paramilitares» o de «autodefensa» para no pagar las contribuciones que la guerrilla les exigía y para combatirla so pretexto de que se trata de «comunistas apátridas», en una expresión clara de una ideología de corte fascista.

3. *El conflicto de la delincuencia común*

Finalmente, otra de las violencias que sufre Colombia es la delincuencia común, como el robo, el atraco, el secuestro y el pillaje de «cuello blanco» (desfalcos en grandes entidades financieras, públicas y privadas).

II. Las causas

Comprender la actual realidad colombiana es imposible cuando se hacen conjeturas o evaluaciones «voluntaristas» achacando la raíz de los problemas a una cierta inclinación «violenta» de los colombianos, que convierte a algunos de ellos en «malos de la película», mientras otros (generalmente el gobierno) son los buenos, si que también pretende explicar la acción de ciertos individuos o grupos por resentimiento moral o equivocación racional. Un análisis objetivo, por el contrario, indica que este panorama de violencia inercial es consecuencia de factores estructurales de la organización colombiana, que vienen haciendo crisis en los últimos tres lustros de manera evidente.

En un reciente libro, Edgar Reveiz, ex decano de Economía de la Universidad de los Andes (una de las más importantes universidades del país) y actual consultor de Naciones Unidas, afirma que en Colombia, a través de su historia y por diversas características, se configuró una *sociedad con escasas oportunidades* para la gran mayoría de la población, en la cual prima el privilegio y la prebenda para unos pocos grupos, tanto en lo político como en lo económico y lo social.

Sostiene que la sociedad colombiana conformó así, en lo económico, un *capitalismo político* que, a diferencia del capitalismo simple y llano, no obtiene su beneficio principal mediante una sana competencia en el mercado, sino apoderándose de parcelas del Estado, para controlarlas y explotarlas en su propio beneficio.

Además, esta sociedad privilegiada se maneja mediante una serie de «contratos», la mayoría de ellos informales y *ad-hoc*, distintos a la ley y a la Constitución, que no sólo orientan y dirigen las diversas actividades, sino que limitan el acceso a innumerables personas con capacidad e iniciativa, pues encuentran fuertes barreras a su entrada, tales como el manejo restringido del crédito, las licencias de importación, los monopolios *de facto*, las protecciones arancelarias, los controles administrativos, el clientelismo político, la segregación social, etc.

Igualmente esta sociedad —«cooptada», en el lenguaje de Reveiz— impone severas limitaciones para la participación en el campo político por la dificultad para ingresar en él aquellas personas que se separen del bipartidismo, no tengan un padrino o no gocen de las prebendas que da el poder parlamentario mediante el reparto de auxilios oficiales o puestos burocráticos en el Estado.

En el campo social el dominio oligopólico de los medios de comunicación, el escaso acceso a la educación, la concentración de la propiedad, configuran una sociedad de poca movilidad. Además de que, como todo país periférico y dependiente, tiene una economía débil y con enormes carencias en materia de servicios sociales (educación, salud, vivienda, recreación, etc.).

Sin embargo, la propia dinámica social, con un crecimiento demográfico muy significativo en las últimas décadas y el aumento de las expectativas, fue el caldo de cultivo para que pudiesen presentarse comportamientos por fuera de la «legalidad», que en forma de «contrapactos» han buscado salidas y respuestas frente a esta sociedad de privilegios.

Así se comprende la aparición de grupos guerrilleros que, de una manera o de otra, se abrogaron la representación política de la ciudadanía contra situaciones de privilegio. Tal es el caso, como se mencionó antes, de las FARC con su lucha reivindicativa de la tierra, el ELN frente a los contratos de explotación petrolera y el M-19 ante la ausencia de apertura política, etc.

Igualmente se explica la aparición y expansión del tráfico de drogas, pues surge de la búsqueda de oportunidades de numerosos y ávidos «empresarios virtuales» que encontraron una salida económica y social con este comercio ilícito, para el cual Colombia, coincidentalmente, cuenta con ventajas comparativas importantes, como su localización y conformación geográfica, el espíritu empresarial agresivo (sobre todo en la región antioqueña) y una abigarrada «mano de obra» disponible. Todo ello frente a un mercado (el norteamericano) de una enorme capacidad de compra y de dimensiones escalofriantes (200 millones de consumidores).

Puede afirmarse entonces que la aparición y expansión del negocio de las drogas (marihuana, primero, y cocaína, después) a mediados de la década de los setenta (precedido por el contrabando de esmeraldas) tuvo un gran impacto en la sociedad colombiana, particularmente en Antioquia (una de las regiones económicas más importantes del país), pues posibilitó el surgimiento de una nueva clase propietaria y empresarial («nuevos ricos») a quienes la sociedad tradicional les puso el calificativo despectivo de «clase emergente», la cual, habida cuenta de los enormes ingresos recibidos, se convirtió en el gran comprador de tierras (1.000.000 de hectáreas), viviendas urbanas, obras de arte, vehículos, empresas, etc.

Esta nueva clase creó toda una red de negocios (tierras, constructores, armas, lavado de dólares, etc.) que involucró e involucra numerosos sectores de la población sin haber encontrado hasta 1984 resistencia mayor, a tal punto que durante muchos años la sociedad en su conjunto fue «permisiva», como lo atestigua el hecho de que aún el mismo gobierno adoptó normas que facilitaron el cambio de dólares por moneda nacional, que los comentaristas económicos, con humor negro, denominaron «la ventanilla siniestra».

III. Consecuencias

La aparición de esta nueva fracción de clase trajo profundas repercusiones en la sociedad, que podemos enunciarlas de la siguiente manera:

—*Corrupción generalizada*: Además de la ilicitud aceptada por los participantes directos en este negocio, también muchos elementos de las actividades públicas y privadas se dejaron tentar por sus millonarias oportunidades, tales como banqueros, industriales, transportadores, comerciantes, vendedores de fincas, fuerzas policiales y militares, quienes han recibido propinas, partijas y prebendas para actuar, por acción u omisión, en beneficio de dichos traficantes.

Tal fue el fenómeno de corrupción, que indujo un cambio en la ética de los negocios a tal grado que difícilmente se encuentran hoy en Colombia personas que no estén dispuestas a enriquecerse rápidamente, no importa la moral, siguiendo el ejemplo de la nueva clase.

—*Violencia*: La conformación de bandas de sicarios, destinadas a amedrentar, asesinar o secuestrar a aquellas personas que no cooperan, y la acción de grupos de autodefensa (paramilitares) destinada a combatir a la guerrilla en las zonas de producción y a hacer retaliaciones sangrientas contra los opositores políticos, especialmente líderes de izquierda (filocomunistas o no), son dos circunstancias que han agudizado los fenómenos violentos implícitos en una sociedad en crisis.

Para la mejor intelección de este fenómeno y guardadas las proporciones debidas es bueno recordar la historia del Oeste americano durante el siglo pasado. Evidentemente existen muchas analogías que explican en ambos casos los comportamientos violentos.

—*Cambio económico*: Particularmente en los sectores agropecuario, de la vivienda y la construcción, y el comercio de bienes muebles y suntuarios, la enorme capacidad de compra de los traficantes condujo a aumentos exagerados de los precios y a un *boom* en dichos sectores, en cierta forma ficticio o de una gran inestabilidad

No era extraño que una propiedad fuera comprada por un traficante por su capricho por dos, tres o cinco veces su valor comercial. Además, como un mecanismo para el lavado de dólares (es decir, su conversión en moneda nacional), hubo en los últimos años una proliferación del contrabando de mercancías.

Por otra parte, aunque existen grandes discrepancias entre los analistas del tema, el ingreso de divisas al país por concepto de este tráfico ha alcanzado entre 500-1.000 millones de dólares anuales, lo cual significa entre el 10 y el 20 por 100 de las exportaciones, que ha evitado una probable crisis cambiaria en el país, frente al aumento de los egresos, especialmente por concepto del servicio de la deuda.

El otro efecto es, obviamente, la apropiación de empresas o la creación de nuevas, especialmente en el sector de los servicios.

—*Impacto político*: Este fenómeno, como decíamos antes, fue aceptado por la sociedad colombiana hasta época muy reciente (1984), a tal punto que, a pesar del trato despectivo, la clase dominante tradicional llegó a permitir la presencia de muy destacados representantes de estos negocios en prestigiosas juntas directivas de entidades bancarias y «grupos financieros». Además, lentamente venían accediendo a posiciones sociales. Sin embargo, este proceso fue súbitamente interrumpido cuando la nueva fracción de clase pretendió escalar el poder político en forma directa y no se contentó, como lo había hecho antes, con influir en las decisiones oficiales a través de representantes y voceros indirectos a quienes les dieron y les dan su apoyo económico. «Allí fue Troya», como se dice coloquialmente. Todo fue aceptable hasta el momento en que Pablo Escobar pretendió llegar, como, en efecto, llegó, al Congreso de la República, y cuando Carlos Ledher, otro de los grandes «capos», hoy preso en Estados Unidos, creó un movimiento político propio.

En este instante se movilizaron los grupos en el poder para atajarlos, so pretexto de la moralidad pública y la defensa de las instituciones. Luego de escaramuzas y denuncias mutuas, se abrió el fuego de esta «guerra» con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno Betancur.

De allí en adelante se comienza este proceso sangriento, en el cual los traficantes han recurrido a toda clase de armas a fin de evitar su captura y principalmente la extradición, acallando periodistas, intimidando funcionarios, etc.; mientras el gobierno, a través de sus organismos armados, realiza su persecución, no exenta de arbitrariedades, corruptelas y desviación de acciones hacia grupos contestatarios, especialmente en la izquierda.

IV. Conclusiones

Resumiendo, podríamos decir entonces que la situación de violencia y malestar que sufre Colombia es la expresión clara de un proceso de cambio social que se inició hacia comienzos de la década de los setenta.

Este proceso se expresa en una confrontación que libran tres sectores de la población por aumentar su influencia respectiva en el conjunto social o preservar el que ya tenía. Se trata, por una parte, de los grupos de traficantes de drogas; en segundo lugar, de los grupos políticos vinculados a acciones guerrilleras, y en tercer lugar, los grupos establecidos en el poder y que han dominado ancestralmente los mecanismos del Estado y de la sociedad civil.

Es obvio pensar que este cambio social podrá tener diferentes resultados, dependiendo de la correlación de fuerzas que finalmente predomine. En todo caso, la sociedad colombiana, después de estos tres lustros, cruciales en su historia, ya no será igual.

Las principales manifestaciones de este cambio social son:

1) El surgimiento de una nueva clase propietaria, que con un enorme poder económico incursiona agresivamente en diversas actividades, tales como la compra de tierras y viviendas, la apropiación de empresas, especialmente en el comercio y los servicios financieros, la actividad del contrabando, etc., generando grandes distorsiones en la economía y amenazando los poderes «tradicionales» en estos campos.

2) El notorio cambio que se ha vivido desde mediados de la década de los setenta en la «ética empresarial», cuando logró un predominio absoluto el afán de enriquecimiento rápido, sin importar los medios.

3) La presencia de grupos guerrilleros que han venido presionando, con algún éxito, para que el Establecimiento ponga en marcha procesos de reforma agraria, renegociación de los contratos petroleros, mejoras en el trato a los sindicatos agrarios y organizaciones indígenas.

En todos los casos, dentro de un infortunado y lamentable marco de pérdida dolorosa de vidas humanas y riqueza nacional.

¿Qué irá a pasar?

Aunque resulta difícil prever el desarrollo que puedan tener los acontecimientos en una etapa de crisis, este informe quedaría incompleto si no expusiéramos algunas hipótesis sobre el particular:

1.^a Si bien voces destacadas de la clase tradicional y de la izquierda, y aún dirigentes políticos como el alcalde de Medellín y el precandidato presidencial Alberto Santofimio, han sugerido la posibilidad de un diálogo con los traficantes para

suspender «hostilidades», el actual gobierno ha negado esta opción. En consecuencia, es previsible que continúe la persecución por parte del presente gobierno y, obviamente, la respuesta agresiva de los traficantes mediante actos terroristas. Sin embargo, la capacidad de asimilación de la población no llegará a un estado febril que pueda desembocar en probabilidades reales de «golpe de Estado» o de «derrota total» de los traficantes, pues se trata de un enemigo con una gran capacidad de mimetización.

2.^a No obstante las dificultades propias de una situación de esta naturaleza, la campaña electoral se continuará desarrollando, y aunque habrá algunas regiones en donde se dificultará dicho proceso, la mayoría del país participará, así sea con temor, en las definiciones políticas.

3.^a Existen razones para pensar que la dirigencia tradicional —por su capacidad de transacción— ha entendido que el país requiere ciertas reformas sociales importantes. Es posible que en el curso de este año se apruebe una reforma constitucional de amplio espectro, que tiende a mejorar los mecanismos judiciales, la organización y acción del Congreso, y principalmente aumentar la participación popular como una manera de asimilar, institucionalizándolas, las nuevas corrientes sociales.

4.^a Los gastos extraordinarios que ha tenido el gobierno en estas acciones de represión hacen previsible que se registre un importante déficit fiscal. Igualmente que se produzca una notoria baja en la inversión privada y una disminución de los ingresos externos, todo lo cual hará que se agrave la situación de recesión económica, por lo menos hasta mediados del año entrante.

5.^a A pesar de todo, el país en pocos años asimilará esta transición, la cual será menos traumática en la medida en que se logre un acuerdo internacional para la legalización de la droga o para su manejo por instrumentos multinacionales.

6.^a En relación con los grupos guerrilleros es de esperar que continúen haciendo presencia, pero es probable que se puedan lograr «acuerdos de paz» en la medida en que se convenzan de que tienen muy pocas posibilidades reales de triunfo.

Es, pues, una visión optimista sobre Colombia. Otra visión, apocalíptica, sólo es probable en el evento de que los Estados Unidos y demás países industrializados insistan en que nuestro país debe aportar los mayores esfuerzos, económicos y en vidas humanas, sin la contraprestación de un apoyo efectivo y real preferencialmente en ayuda financiera, apertura del comercio exterior y, ojalá, con un trato más comprensivo y «político» del tráfico de drogas.

Declaración de Managua *

Más de 1.200 participantes provenientes de más de 60 países y de numerosos grupos y organizaciones de todos los continentes se reunieron en Managua, Nicaragua, del 5 al 9 de junio de 1989 en el IV Congreso Bial sobre el «Destino y Esperanza de la Tierra», para discutir estrategias de desarrollo, conservación y restauración ambiental, la paz y el desarme. El Congreso analizó los vínculos entre estos temas y compartió experiencias para así forjar esfuerzos de cooperación que nos conduzcan hacia una sostenibilidad global.

Este Congreso es el resultado de la evolución de tres Conferencias previas sobre el Destino de la Tierra (Nueva York, 1982; Washington, 1984; Ottawa, 1986). Se está haciendo por primera vez el esfuerzo consciente de emprender un análisis colectivo desde la perspectiva del Tercer Mundo. Al celebrarse el IV Congreso en América Central, se reúne en una región convulsionada que sufre los efectos de la explotación del hombre y de los recursos naturales. Al reunirse aquí los participantes se están congregando en un país que a, pesar de ocho años de agresión militar y económica, ha sabido integrar la defensa de su medio ambiente a la defensa integral de la soberanía nacional y la autodeterminación de su pueblo.

1. Los participantes están profundamente preocupados por el futuro de la vida en nuestro planeta. Las crecientes crisis en el medio ambiente, los derechos humanos, el subdesarrollo y el militarismo son síntomas de una serie de problemas más complejos. Es preciso ir a la raíz de los problemas en vez de atacar esos síntomas.

2. El Congreso reconoce que para todos los pueblos del mundo, vivir y desarrollarse en un ambiente sano es un derecho fundamental.

3. El Congreso denuncia la irresponsabilidad de políticas inspiradas en criterios eminentemente economicistas y consumistas, cuya visión cortoplacista beneficia a unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de los pueblos del mundo. Es cada vez más obvio que el deterioro social y del medio ambiente está íntimamente entrelazada entre el Sur y el Norte. Los problemas ambientales se desplazan del Norte hacia el Sur para luego completar el círculo y regresar a su país de origen. Estamos además destruyendo mucho más de lo que estamos permitiendo que se regenere. La biosfera (el habitat colectivo de todas las especies vivas que permite la vida en nuestro planeta) está, por primera vez en la historia, seriamente amenazada. Es por un sentimiento de justicia y solidaridad por lo que personas en todo el mundo se están uniendo para rebelarse contra estas condiciones.

4. El Congreso ha analizado la interrelación que existe entre los problemas ambientales y aquellos que amenazan la paz y la seguridad global. Los participantes están de acuerdo con las conclusiones de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el informe Brundtland, que recomienda que «los gobiernos y las agencias internacionales deberían evaluar la eficacia en función de los costos,

* Declaración final del IV Congreso Bial sobre «Destino y Esperanza de la Tierra», Managua, junio 1989.

en términos de alcanzar la seguridad, entre los fondos que se utilizan en la compra de armamentos y los que se emplean para aliviar la pobreza y restaurar el daño causado al medio ambiente». Los participantes asumieron como propia la Resolución 42/186 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante», la cual señala que «una atmósfera de paz, seguridad y cooperación, libre de la presencia y amenaza de todo tipo de guerras, sobre todo la guerra nuclear, en la que ninguna nación desperdiciará sus recursos intelectuales y naturales en armamentos, propiciaría considerablemente el desarrollo ambientalmente racional».

5. Dentro de este contexto, el Congreso reafirma que la más inmediata amenaza al medio ambiente y a la vida misma en todas sus formas, es el holocausto nuclear. A pesar de los adelantos positivos alcanzados en la esfera del desarme en los últimos meses, la supervivencia del planeta continúa siendo amenazada por enormes arsenales de armas nucleares, que se perfeccionan y crecen constantemente.

6. De igual manera el Congreso denuncia las políticas y prácticas de dominación e intervención, así como el uso o la amenaza de armas químicas, armas convencionales, la fuerza, la agresión, la ocupación, la presión, la coerción económica y la injerencia que siguen afligiendo a muchas regiones del mundo. El Congreso señala en particular al África meridional, al Oriente Medio y a América Central, donde los esfuerzos desplegados en la búsqueda de soluciones pacíficas están siendo obstaculizados por dichas políticas. Además, el militarismo y la intervención continúan siendo obstáculos para el desarrollo y la restauración ambiental.

7. Los participantes reiteraron su convicción de que las consecuencias económicas, sociales y ecológicas de la carrera armamentística exacerban las asimetrías de las actuales relaciones económicas internacionales. Destacaron la importancia de la Conferencia Internacional sobre Desarme y Desarrollo celebrada en 1987, y exhortan a todos los Estados a que apliquen el Programa de Acción aprobado por dicha Conferencia con miras a liberar, mediante medidas de desarme, recursos adicionales para un desarrollo sostenible y socialmente justo y para la defensa del medio ambiente, especialmente en favor de los países en desarrollo.

8. Los participantes señalan que dentro del actual sistema económico internacional se sigue profundizando la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo, principalmente a través de los mecanismos impuestos por los organismos financieros multilaterales y comerciales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La principal consecuencia de esto es la crisis de la deuda externa que aumenta la miseria y las tensiones sociales en los países en desarrollo, impidiendo a estos últimos hacer frente a las necesidades básicas de sus pueblos y materializar sus prioridades de desarrollo sostenido. La deuda también pone en peligro la libre determinación, la independencia, la soberanía y la integridad territorial y ambiental. El Congreso, por tanto, reafirma que en un mundo cada vez más interdependiente, la paz y la estabilidad internacional sólo pueden construirse sobre bases económicas sólidas y justas que permitan la creación de verdaderos programas de desarrollo ambientalmente sostenido.

9. El Congreso reafirma igualmente el derecho soberano e indeclinable de cada pueblo a escoger, sin interferencia alguna, el modelo de organización social, económica y política que más convenga a sus propios intereses, que mejor se identifique con su propia historia, cultura y tradición. Teniendo en cuenta que nuestra responsabilidad común es proteger la biosfera, el Congreso condena de manera particular cualquier intento por transferir a los países en desarrollo los actuales modelos de industrialización; tales modelos conllevan a un consumo y un desperdicio excesivo y a la destrucción del medio ambiente. Los países industrializados alcanzaron sus niveles de desarrollo a costa de los recursos naturales del planeta, cuyo deterioro va en aumento, y de la biofera, cuya contaminación sigue creciendo.

Todos los habitantes de la Tierra están pagando el precio por el nivel de vida de los países industrializados del Norte.

10. El Congreso reconoce que, para los pueblos indígenas, la protección de sus instituciones, sus propiedades, su organización, su trabajo, su territorio y sobre todo de su medio ambiente natural, es un derecho fundamental. La supervivencia de estas culturas contribuye directamente al desarrollo sostenido no sólo de los países donde viven, sino también del mundo entero.

LINEAS DE ACCION

A. El Congreso reafirma que la paz y la seguridad, al igual que el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, son factores esenciales para impedir la degradación ambiental en los países en vías de desarrollo. El Congreso aboga por el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que permita a estos países acceder a los medios económicos, técnicos y científicos para su desarrollo que ahora les son negados por el injusto orden existente. Este nuevo orden internacional implica un proceso de cambio en el que el uso de los recursos y el desarrollo tecnológico estén orientados a satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.

B. De igual manera, conscientes de que grandes regiones en el mundo presentan una aguda degradación ambiental, producto tanto de políticas expoliadoras y cortoplacistas como de los daños causados por la guerra y las catástrofes naturales, el Congreso hace un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos para restaurar y rehabilitar los ecosistemas degradados o dañados. El Congreso igualmente aboga por el establecimiento de instrumentos legales que prohíban las prácticas ambientalmente nocivas. Exhorta además a que se aplique un criterio contenido en los principios de la ley internacional en los tratados vigentes y otros acuerdos internacionales, especialmente en la Resolución 42/186, donde se establece que quienes causen daños ecológicos deben dar cuenta de ellos. El Congreso aboga por la creación de un Tribunal Mundial del Medio Ambiente.

C. El Congreso reconoce la participación activa de la mujer en el esfuerzo por impulsar acciones alternativas que alimentan la esperanza de un futuro común en paz y estabilidad. Dentro de este contexto coincidieron en promover una «Red Mundial de Mujeres en todas las tareas relacionadas con la protección del medio ambiente».

D. Los participantes al Congreso expresan su total respaldo a que América Central se transforme en una zona de paz, y dentro de este espíritu los participantes respaldan los acuerdos firmados por los cinco presidentes centroamericanos en Costa del Sol, El Salvador, el 14 de febrero de 1989. Tomaron nota con satisfacción de que en dichos acuerdos se incorporara la creación de una «Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo», como mecanismo regional de cooperación para promover el uso racional de los recursos naturales del área, la prevención de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico. El Congreso apoya la combinación de iniciativas ambientales con los esfuerzos por la paz y la cooperación internacional en América Central, particularmente las iniciativas de crear áreas protegidas para la paz, incluyendo el Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz (SI-A-PAZ) en la Cuenca del Río San Juan.

E. De igual manera el Congreso expresó su reconocimiento a todos los gobiernos que han incorporado la variable ecológica en sus planes de desarrollo y los exhortaron a incorporar en todos sus sistemas educativos formales e informales el concepto de «cultura ecológica» a fin de desarrollar en las generaciones futuras una

actitud responsable frente al medio ambiente y a los recursos naturales; en algunas culturas esta actitud ya existe.

F. Los participantes al Congreso acogen con gran satisfacción la convocatoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. El Congreso quiere hacer énfasis en la gran importancia que tiene la participación de las Organizaciones No Gubernamentales en dicha Conferencia. El Congreso apoya igualmente la resolución de las Naciones Unidas sobre el Programa Ambiental para la elaboración de un convenio sobre cambios climáticos globales, al igual que la creación dentro de la ONU de un Centro de Ayuda Ambiental de Emergencia.

G. Ya que los refugiados son a menudo refugiados ambientales, y dado que los refugiados ambientales y políticos frecuentemente se ven forzados a destruir los recursos naturales para sobrevivir, el Congreso exhorta a los países desarrollados a dar un mayor aporte para resolver los problemas de los refugiados.

H. El Congreso identificó nuevas amenazas a la vida en los desastres ambientales provocados por el hombre tales como Bhopal. De igual manera el Congreso observó que los desastres naturales, como las inundaciones, los huracanes, las sequías y los deslizamientos de tierra son agravados por los problemas ambientales arraigados en el injusto modelo de desarrollo. El Congreso acuerda promover una cooperación y una acción internacional más eficiente entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y civiles para hacer frente a los desastres naturales y responder a las necesidades de las personas y los ecosistemas afectados por dichos desastres.

I. Este Congreso, consciente del continuo saqueo de los recursos naturales y la degradación de la tierra que el sistema del *apartheid* provoca en África del Sur; conscientes de la intervención de tal sistema en los Estados de la Línea del Frente, especialmente en Angola, y conscientes de que no puede haber vida sin protección ambiental y que no puede haber seguridad ambiental sin paz, hace un llamamiento para que:

- 1) Cesen todas las relaciones económicas, culturales, diplomáticas y comerciales entre los países industrializados y el sistema de *apartheid* en África del Sur;

- 2) Se levante el estado de emergencia y se libere a Nelson Mandela y a todos los presos políticos existentes en Sudafrica;

- 3) Se apoye la legítima lucha conducida por el Congreso Nacional Africano en contra del injusto sistema del *apartheid*.

J. El Congreso se une al Movimiento de los No-Alineados en condenar duramente «los planes que se dice tiene el régimen del *apartheid* y otros de crear en el desierto namibio, en la costa occidental de Namibia, un depósito para desperdicios tóxicos y radiactivos. Exhortaron a los países involucrados a abandonar de inmediato tales planes, que pondrían en peligro la salud y el bienestar del pueblo de Namibia y de los Estados vecinos». El Congreso condena igualmente la intervención de África del Sur en Namibia y sus maliciosas campañas en contra de la SWAPO e insta a que se mantenga el apoyo internacional para asegurar el triunfo de esta organización en las elecciones en noviembre. Los participantes también pidieron la creación del Estado Palestino, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y vivir en un ambiente sano y pacífico.

K. El Congreso expresa su solidaridad con las luchas por la libertad y la participación de los afroamericanos, los latinoamericanos, de otras personas originarias de países en desarrollo, así como de otras comunidades pobres que viven en los Estados Unidos, quienes han sido los receptores de la mayor parte de los desechos industriales en ese país. Creemos que su participación destacada dentro de los Estados Unidos es vital para el cambio social en dicho país.

L. El Congreso se opone firmemente a la exportación de desechos dañinos a los países del Tercer Mundo, la exportación de los plaguicidas que han sido prohi-

bidos en países industrializados, a la exportación de tecnologías sucias al Tercer Mundo, y la incineración o eliminación de desechos nocivos en los océanos.

M. El Congreso se opone a las actividades nucleares en todas sus formas, incluyendo la extracción de uranio, generación de energía y la producción de armas. Estas actividades contribuyen a la grave degradación del medio ambiente al igual que representan riesgos extremos e inaceptables para el futuro del planeta y deben cesar. Tales actividades actualmente causan daño a muchos pueblos, desde comunidades indígenas que tienen que vivir con los residuos de la explotación del uranio hasta otros ciudadanos del mundo que viven con los efectos de la contaminación de la cadena alimenticia, los suelos, el aire y el agua, por los productos de la tecnología de la fisión nuclear. El Congreso enfatiza que la energía nuclear no es una solución al calentamiento del globo.

N. El Congreso apoya firmemente el retiro permanente de las instalaciones militares extranjeras en las distintas regiones del mundo, incluyendo Asia, el Pacífico Sur, Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Estas instalaciones han causado severos problemas de salud, ambientales y sociales, y han ignorado los asuntos de soberanía nacional y el derecho a la libre determinación. El Congreso se opone a que los países vendan a otros el derecho a usar su territorio y espacio aéreo para llevar a cabo pruebas y maniobras militares.

O. Los participantes del Congreso reconocen que los problemas ambientales no se pueden resolver sin justicia, paz y la participación popular. Expresan su preocupación de que algunas organizaciones ambientalistas no gubernamentales corren el riesgo de ser manipuladas por los intereses económicos globales, que están utilizando el financiamiento y el patrocinio para obstaculizar el papel que el movimiento ambiental puede jugar como un agente para el cambio social.

P. El Congreso afirma su convicción de que la protección y la restauración del medio ambiente global solamente se puede lograr por medio de la participación activa e informada de todos los sectores populares. El Congreso considera que los modelos de desarrollo jerárquicos (de arriba hacia abajo) son parte del problema y apoya su sustitución con un desarrollo desde las bases. El Congreso propone una estrategia de concienciación ecológica como el medio para lograr la meta de la participación de las bases.

Q. Los participantes del Congreso realizarán esfuerzos para que la Comisión de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos incluya dentro de su programa la redacción de una Declaración Universal sobre el derecho a un medio ambiente sano.

R. El Congreso adopta el proyecto de la Declaración Universal sobre Derechos Indígenas tal como aparece en el documento (E/en 4/sub 2/1988/25), que fue elaborado por el grupo de trabajo de la ONU sobre pueblos indígenas. Este debe servir de guía a las naciones estados para la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

S. Puesto que el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente americano se celebrará en 1992, siendo la República Dominicana el centro de actividades, los participantes al Congreso instan a que se coordinen todos los esfuerzos regionales para crear un movimiento continental que difunda información sobre los efectos devastadores de la conquista en la cultura, la población y las riquezas naturales de este continente. Este esfuerzo de coordinación es aún más pertinente dado el hecho de que los invasores de ayer encontraron un voraz usurpador en los invasores de hoy, quienes han continuado a través de los pueblos de las Américas.

T. Los participantes al Congreso desean señalar que la degradación del pueblo y de los recursos naturales de Nicaragua están a la par con la agresión en el resto del planeta. Los problemas urgentes que enfrenta Nicaragua se pueden observar en todo el mundo y sólo se pueden resolver a través de la paz, la justicia y la demo-

cracia económica y política. La lucha del pueblo de Nicaragua, su destino y esperanza los comparten todos los pueblos del mundo. El Congreso, por tanto, reitera su apoyo al derecho del pueblo nicaragüense de desarrollar sus recursos humanos y naturales de manera independiente, con dignidad y con absoluta soberanía nacional.

U. En el Décimo Aniversario de la Revolución Nicaragüense, el Congreso exhorta a todas las naciones del mundo a reconocer y apoyar plenamente esta oportunidad especial de fortalecer la evolución de una sociedad que tiene la voluntad política de desarrollar sus recursos económicos en armonía con las prioridades ecológicas dentro de los principios de democracia política y económica tal como los establecidos por el pueblo de Nicaragua. Igualmente el Congreso extiende un llamamiento a la Comunidad Internacional para que brinde a Nicaragua todo el apoyo que necesita para restaurar su medio ambiente, que padece de una explotación indiscriminada de sus recursos naturales que le fue heredada, de los efectos de una injusta guerra de agresión que ha sufrido durante los últimos ocho años y del daño causado por los desastres naturales.

V. El Congreso condena el acuerdo bipartidista adoptado por el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 1989 que aprobó más de 60 millones de dólares para la denominada «ayuda humanitaria» para los «contras» e insta al Congreso norteamericano a que modifique esta ayuda para que se utilice en la restauración de los daños causados durante los ocho años de guerra.

W. El Congreso denuncia además la campaña de los Estados Unidos para desacreditar y quebrantar el proceso electoral de Nicaragua, que culminará con las elecciones en febrero de 1990.

X. El Congreso exige que el gobierno de los Estados Unidos cese inmediatamente todas las amenazas, los actos hostiles y las medidas económicas coercitivas contra Nicaragua y respete así la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 27 de junio de 1986.

Y. El Congreso resuelve reunirse nuevamente dentro de dos años. Mientras tanto, el Congreso continuará teniendo su sede en Nicaragua, y la estructura del IV Congreso continuará funcionando a nivel global.

Z. Los participantes establecen que trabajarán juntos por la meta común de salvaguardar la Tierra como su más preciosa herencia a las generaciones futuras. Los participantes se comprometen a aumentar la comunicación y cooperación mutuas, así como también a trabajar junto con otros movimientos nacionales e internacionales, cumpliendo con la tarea urgente de defender el Destino y la Esperanza de la Tierra.

Finalmente, el Congreso agradece a Nicaragua, su pueblo, sus ONGs y su gobierno sus tremendos esfuerzos en la organización de este evento histórico, su hospitalidad, su cordialidad y su espíritu revolucionario.

Manifiesto sobre El Salvador

Comité de Emergencia de Ayuda al Pueblo Salvadoreño *

El movimiento popular salvadoreño ha sufrido durante décadas una durísima represión, que alcanzó altos niveles en el inicio de los años ochenta, con hechos como los asesinatos de monseñor Romero, religiosas norteamericanas, sindicalistas, estudiantes, campesinos...

Los sucesivos gobiernos no han tenido voluntad de diálogo con el movimiento popular y con el FMLN, con lo que los grados de miseria y opresión se han ido agudizando hasta llegar a las tasas actuales de cerca del 70 por 100 de subempleo y el 60 por 100 de extrema pobreza, todo ello agudizado y sostenido por los casi dos millones de dólares diarios de ayuda de la Administración de los Estados Unidos al ejército y gobierno de El Salvador.

Con la reciente subida al poder del gobierno de Arena, los Escuadrones de la Muerte y demás cuerpos represivos han actuado en la más absoluta impunidad intentando la desarticulación de las organizaciones populares con atentados como los de Fenastras, Comadres, etc. Tal impunidad ha sido confirmada por las declaraciones de un desertor de la primera brigada de infantería, César Dilmás Joan Martínez, quien declaró que la base de los Escuadrones de la Muerte es una sección especial de esta brigada y recibe órdenes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República.

A raíz de esta dramática situación y vista la poca voluntad del gobierno de Arena, el FMLN lanzó a partir del sábado 11 de noviembre una ofensiva contra las Fuerzas Armadas. El gobierno de Cristiani, en respuesta, está bombardeando indiscriminada y masivamente a la población civil, así como asesinando a personas que siempre han buscado la paz y la justicia para el pueblo salvadoreño.

La última muestra de ello es el cruento asesinato de seis sacerdotes jesuitas pertenecientes a la UCA y de dos mujeres salvadoreñas.

Esta situación se agrava en estos momentos por la presencia de tropas norteamericanas, hondureñas y guatemaltecas en las zonas fronterizas de El Salvador, por los bombardeos realizados por pilotos norteamericanos y por la colaboración en la masacre de salvadoreños por la unidad de élite guatemalteca «Los Keimiles».

* Comité integrado por cuarenta organizaciones (partidos políticos, ONGs, sindicatos, grupos de solidaridad, cristianos, etc.) que coordinó los actos de solidaridad con el pueblo salvadoreño en la ciudad de Madrid a raíz de los asesinatos, por personal uniformado, de seis jesuitas y dos mujeres en la UCA.

CONDENAMOS:

— La intervención de la política norteamericana como gran responsable de esta represión del pueblo salvadoreño y por su ayuda económica, militar y de asesoramiento.

— Al gobierno salvadoreño y al régimen que lo sustenta, por ir contra las normas del Derecho Internacional y atentar contra los derechos fundamentales de la población salvadoreña.

EXIGIMOS:

— El cese inmediato de los bombardeos contra la población civil.

— Se permita y salvaguarde a Cruz Roja Internacional la atención de todos los heridos y personal civil necesitado de asistencia sanitaria.

— El respeto a la vida y al trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.

— La adopción de medidas urgentes para garantizar la vida de los líderes de organizaciones populares, especialmente en las zonas tomadas por el ejército tras haber estado en poder de la guerrilla.

PEDIMOS:

— Al gobierno español y a los gobiernos de la CEE que ejerzan las presiones necesarias para favorecer la solución política y negociada al conflicto y a sus causas.

La mujer en el contexto centroamericano: el caso de Guatemala

Marta Elena Casaús Arzú *

A. Recorrido histórico del rol de la mujer en América Central

a) *Epoca prehispánica*

La sociedad maya, especialmente la Maya Quiché y Cakchiquel, era matriarcal en sus orígenes y con clara descendencia matrilineal, tal y como lo describen sus principales textos, el «Popol Vuh» y «Anales Cakchiqueles».

Es importante resaltar el papel de la abuela Ixmucané, como el centro de la familia y la diosa lunar y del maíz.

«Comenzaron sus trabajos para darse a conocer ante la abuela y su madre. Lo primero que hacían era la milpa» (1).

En la sociedad Maya Quiché y Cakchiquel todo el culto al maíz surge en torno a la mujer, especialmente a la abuela. El cambio de una sociedad nómada a sedentaria, lo que ellos denominan como la tercera edad del mundo, corresponde al ciclo matriarcal hortícola, en donde la figura de la mujer ocupaba un lugar predominante.

Así Ixmucané pasa a ser en la cosmogonía maya la diosa luna terrestre y la diosa del maíz. Esta estaba representada por una mujer con un tocado anudado en la cabeza de una serpiente, tocado que aún se conserva y se elabora mediante cintas entrelazadas.

Durante todo este ciclo la mujer ocupa el centro de la sociedad y del universo. Las huellas de este período aún son perceptibles en las sociedades Quiches, Tzutujiles y Chortís, en donde predominan claros resabios matriarcales en sus rituales, en la estructura social y en la vida cotidiana. Ejemplo de ello es el municipio San Antonio Aguascalientes, en Sacatepequez.

En la cuarta edad del Popol Vuh se modifica la estructura sociofamiliar pasando a ser la descendencia patriarcal y la residencia partilocal, con la llegada de los hijos de Ixquic, Hunaphú e Ixbalanqué. La estructura social de la época estaba compuesta por cuatro familias fundadoras, trece jefes guerreros, siete tribus y siete señores principales. La tribu formaba una confederación de clanes como elemento central de la estructura social.

* Investigadora de CEDEAL.

Diagrama 1

SIGLO XV

FAMILIA DIAZ DEL CASTILLO: BECERRA Y SU VINCULACION CON LOS PRINCIPALES CONQUISTADORES Y POBLADORES DE GUATEMALA: ESTRADA MEDINILLA, LEON, PEREZ DARDON, LOBO, LIRA CARCAMO.

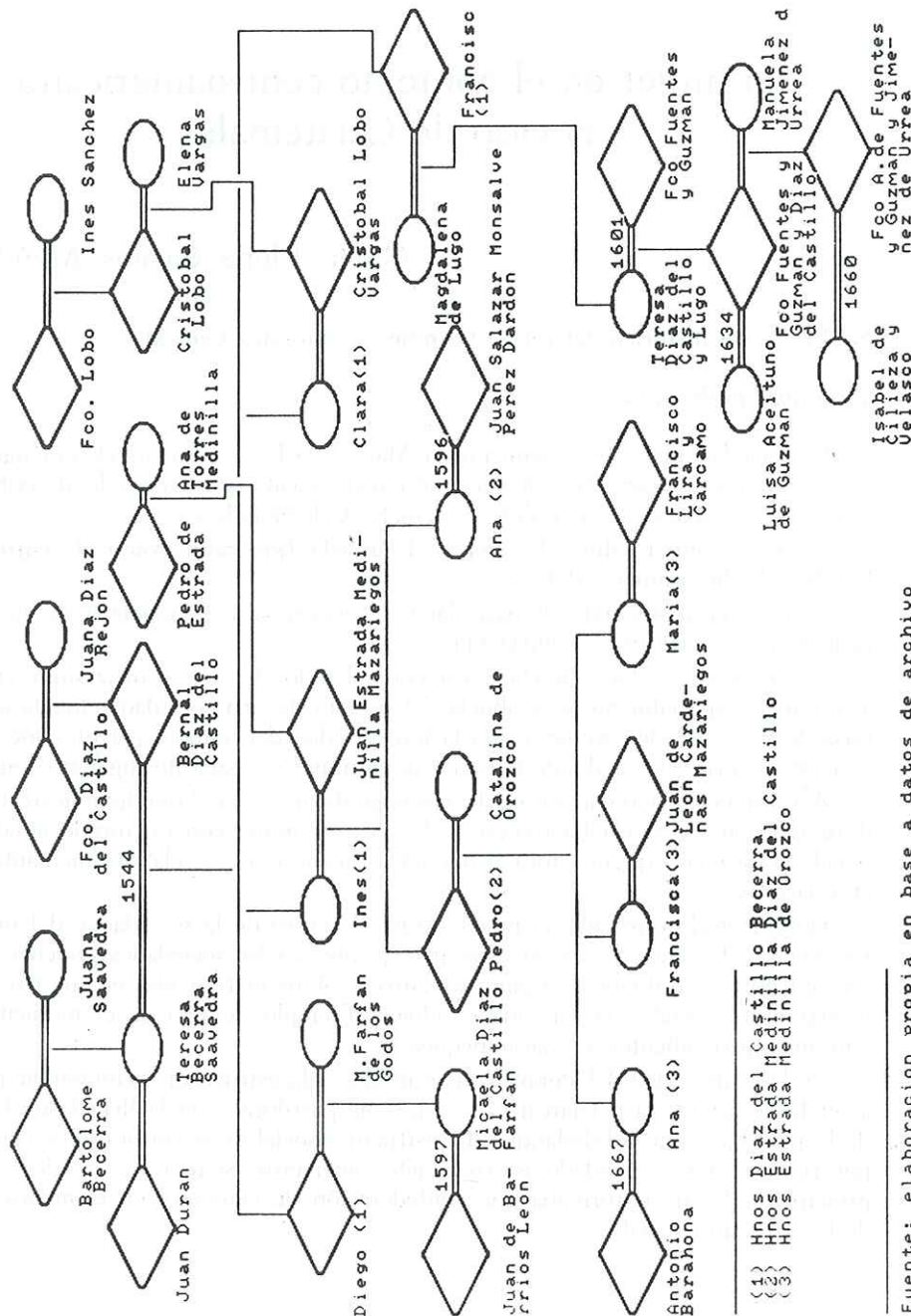
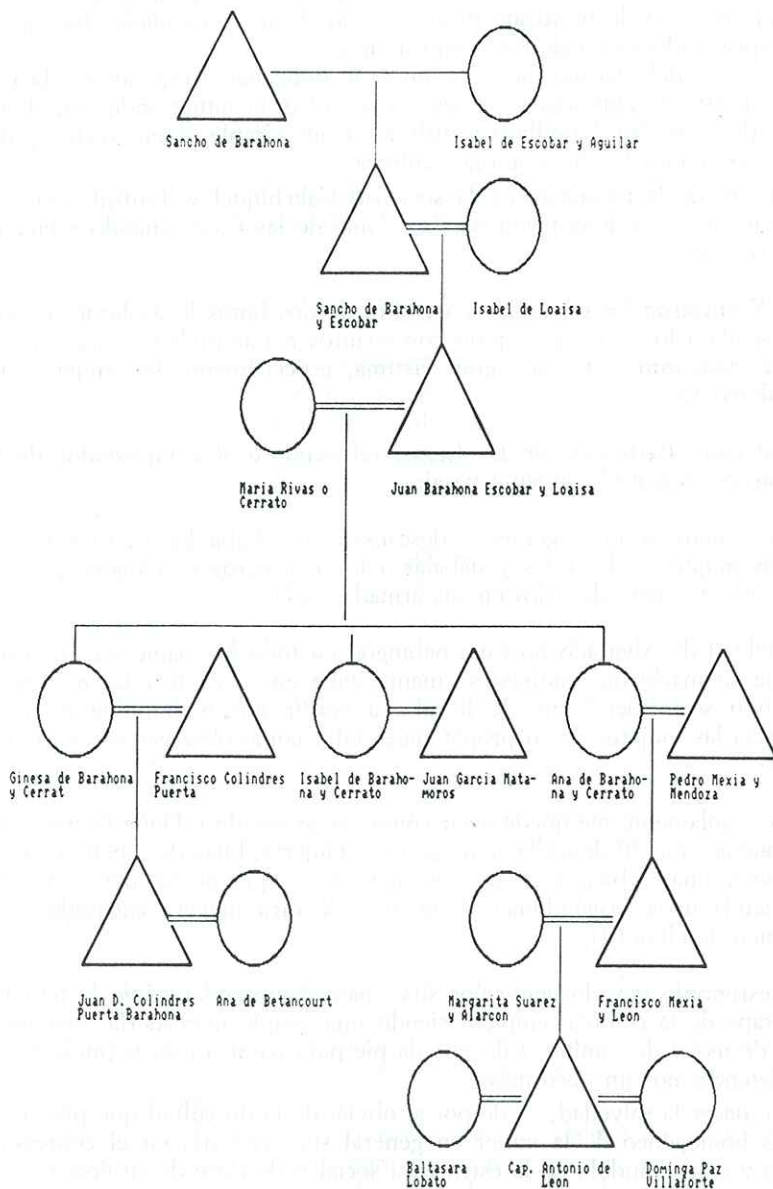


Diagrama 2.

Siglo XVI - XVII



Fuente: elaboracion propia en base a datos de archivo.

B. La conquista

La conquista supuso un choque traumático para las culturas mesoamericanas, en donde la mujer es una de las más afectadas por este hecho, por varias causas, a saber:

- 1) La violencia y despojo de sus riquezas y de su núcleo familiar.
- 2) La violación y humillación a que son sometidas como parte del botín del conquistador, dado que éstos, al carecer de mujeres a su llegada a América, inician un acelerado proceso de mestizaje producto más de las necesidades biológicas que de la concepción ideológica de los conquistadores.
- 3) El inicio del racismo hacia los hijos de indígenas y españoles y la humillación que a partir de entonces va a tener que sufrir la mujer indígena, desclasada y apartada de su medio, humillada y utilizada como simple objeto sexual y desintegrada de su comunidad y de su antigua cultura.

El impacto de la conquista en la sociedad Cakchiquel y Tzutijil tuvo que ser enorme, a tenor de la descripción de Bartolomé de las Casas cuando relata la conquista de Atilán:

«Y entraron los españoles y en obra de dos horas lo asolaron metiendo la espada a los niños y mujeres con cuantos matar pudieron que huyendo no se escaparon... Es una gran lástima, especialmente las mujeres con sus niños» (2).

Más adelante Bartolomé de las Casas, refiriéndose al conquistador de Guatemala, Alvarado, relata el siguiente pasaje:

«... mató infinitas gentes... descansaba y robaba los casados tomándoles las mujeres y las hijas y dábales a los marineros y soldados por tenerlos contentos para llevarlos en sus armadas» (3).

La crueldad de Alvarado no tuvo parangón en todo Mesoamérica, pero hay que señalar que su machismo también se manifestaba en relación a las mujeres de su propio grupo sociorracial, que le llevaba a emitir juicios humillantes y despreciativos hacia las mujeres de su propia clase, tal y como observamos en el siguiente documento:

«... solamente me queda decir como vengo casado y Doña Beatriz está muy buena: trae 20 doncellas muy gentiles mujeres, hijas de caballeros y de muy buen linaje; bien creo que es mercadería que no se me quedará en la tienda nada, pagándomela bien, que de otra manera excusado es hablar bien de ella» (4).

Este testimonio tan elocuente nos sirve para comprender cómo la mujer, en la primera etapa de la colonia, empieza siendo una simple mercadería, una mercancía con valor de uso y de cambio. Ello nos da pie para pasar a esta segunda fase, en la que nos detendremos un poco más.

Merece hacer la salvedad, ya de por sí obvia, de la dificultad que presenta hacer un análisis homogéneo de la mujer en general sin insertarla en el contexto social e histórico y enmarcándola en la estructura social o de clase de su época.

De ahí que nos detengamos a analizar brevemente la mujer en función del lugar que ocupó en el proceso de producción y del rol que le tocó jugar durante diversos períodos de la historia.

C. La colonia

En la etapa de asentamiento y estructuración de la sociedad colonial, la mujer desempeñó un papel determinante en la preservación y reproducción de su especie, máxime en la América colonial.

c.1. *El papel de la mujer en la estructuración del núcleo oligárquico*

En 1539 llegaron las primeras mujeres de origen hispánico a Guatemala, quince años después de iniciada la conquista. Durante ese largo interregno se produjo un amplio y vasto mestizaje, cuyos resultados fueron los primeros matrimonios mixtos y los primeros hijos mestizos, que posteriormente, y para borrar su impureza de sangre, recibieron bula papal y fueron elevados al rango de criollos por decreto de la Real Corona; ése fue el caso de los hijos de Cortés, Alvarado, Barahona, Pedro Cueto, etc.

La estructuración del núcleo oligárquico se inicia aproximadamente en 1540, con la llegada a Centroamérica de las 22 primeras españolas, que relata Alvarado, y que son rápidamente vendidas o canjeadas a los conquistadores que habían accedido a los puestos de mayor relevancia en la sociedad colonial. De este modo se inició la estructuración de los que hemos denominado como «las redes familiares oligárquicas» (5).

Los conquistadores empiezan a emparentar con estas mujeres y a trazar una larga y extensa tela de araña, con rasgos eminentemente racistas y endogámicos, cuyos principales patrones matrimoniales estaban regidos por:

- La limpieza y pureza de sangre y abolengo de las mujeres.
- El rango del conquistador o poblador y su influencia económica y política en la sociedad colonial.
- La capacidad reproductora de la mujer o de su familia que le augurará una extensa descendencia que posibilitará la sobrevivencia de su red familiar en el espacio y en el tiempo.
- El principio de la mejora de la raza, como elemento sustancial a la hora de ir contrayendo nuevos enlaces.

Era más importante casar con un peninsular que con un criollo, mejor con un criollo advenedizo que con uno viejo, nunca con un mestizo y mucho menos con un indígena.

En el diagrama que presentamos se puede observar los principales enlaces matrimoniales del período de constitución del núcleo oligárquico.

Relatamos dos casos por considerarlos como prototipo para entender la estructuración de la red oligárquica:

- El de Catalina Díaz del Castillo y Cárcamo.

Esta mujer fue nieta del cronista de la colonia Bernal Díaz del Castillo y de doña Teresa Becerra. Su padre, Francisco Díaz del Castillo, hereda gran parte de las encomiendas de sus padres. Doña Catalina Díaz del Castillo y Cárcamo, rica encomendera y familia criolla de abolengo, casa con uno de los más ricos comerciantes de la época, don Pedro Lira, quien antes de contraer matrimonio exige a su mujer informe de limpieza de sangre.

Este matrimonio, realizado en las postrimerías del siglo XVI, se puede considerar como prototipo de mecanismo para concentrar y acumular fortuna, ya que mediante el mismo se produce la vinculación de la tierra y el trabajo forzado, como dote de doña Catalina, al que se suma el capital que aporta don Pedro Lira, considerado como uno de los cinco hombres más ricos de Santiago de los Caballeros.

- El de Catalina Salazar Monsalve.

María Salazar es hija de doña Catalina Salazar Pérez Dardón, biznieta de uno de los más importantes encomenderos de Guatemala, Juan Pérez Dardón. María casa con otro rico comerciante, hijo de don Pedro Lira y doña Catalina Díaz del Castillo, produciéndose de nuevo la vinculación de tierra, capital y trabajo, y además la unión de dos de las más poderosas redes oligárquicas del momento, los Castillo Lira y los Salazar Pérez Dardón. La conjunción de cuatro familias, dos criollas encomenderas, los Díaz del Castillo y Pérez Dardón, y dos ricos comerciantes, los Lira y Núñez, se vuelven a unir en la persona de Catalina Salazar Monsalve, viuda rica de Bartolomé Núñez, quien en segundas nupcias casa con don Francisco Delgado de Nájera, nueva red oligárquica de origen vasco y riojano, que servirá de bisagra entre los siglos XVII y XVIII, y que a través de su prolífica descendencia, diecisiete hijos, la mayor parte de ellos hembras, entroncará con las principales redes vascas que se insertarán en el núcleo oligárquico a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

Indudablemente, las mujeres fueron un elemento determinante para preservar el *status*, el poder económico y político de su red y asegurar la supervivencia de su estirpe a lo largo de los siglos. De ahí que afirmemos que la mujer y el núcleo familiar constituyen el mejor instrumento de preservación del *status*, de la riqueza, así como la conservación de la raza, en la sociedad colonial.

El criterio de endogamia y pureza de la raza en los matrimonios de la oligarquía se intensifica con la llegada de los vascos a Centroamérica en 1700. La incorporación de los vascos al bloque de poder exacerbó aún más la endogamia en los enlaces matrimoniales como elemento clave para preservar su especie y para distanciarse del indígena. Claro ejemplo de ello lo tenemos en tres familias: los Urruela, los Batres y los Aycinena. En el caso de los Urruela, el 80 por 100 casan entre primos hermanos.

c.2. *La mujer en las capas medias*

Estas estuvieron compuestas básicamente de mestizos y otras castas y no podían acceder al *status* superior por tener mezcla de sangre y no estarles permitido poseer una encomienda o título de nobleza.

A lo largo de la colonia este sector es el que se encuentra más desplazado y desclasado, y es el que sufre una gran marginación por parte de los dos grupos socioraciales, españoles y/o criollos, e indígenas.

Es en estas capas medias en donde se produce un verdadero mestizaje, ya que los grupos anteriormente mencionados, una vez pasada la primera etapa de la conquista, cierran filas y vuelven a ser endogámicos para preservar su cultura y su forma de vida.

Según unas tablas de matrimonio elaboradas por Christopher Lutz de la sociedad colonial, en Santiago de los Caballeros, la ciudad más grande de toda Centroamérica, entre 1577 a 1790, matrimonios mixtos entre blancos e indígenas sólo se produjeron 13; entre blancos y mestizos, 55, y entre españoles y negros, 5.

En realidad el mestizaje se produjo entre los mestizos y otras castas o entre ellos mismos.

De nuevo la mujer desempeña un papel bastante humillante y degradante en este estrato social, debido a que es desplazada y humillada por la clase dominante y marginada por su grupo sociorracial de origen. Tal vez las palabras y la intención política del obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, describan esta situación. Este obispo propone a la Corona la creación de un colegio para niñas mestizas debido a que éstas andan desparradas por todo el reino:

«Un colegio para recoger a las mestizas que ya son grandes y están sin doctrinar, porque de sus padres y de sus madres no han heredado cosa buena, ni de la leche que mamaron, que todas han sido criadas con leche de indias» (5).

Juicios de carácter racista hacia los indígenas y hacia los mestizos abundan en la documentación de la época y son una prueba de la profunda discriminación y humillación de que fue objeto la mujer.

En cuanto a los principales oficios de las mujeres mestizas de las capas medias en las sociedades urbanas tenemos a las masegualas, curanderas, comadronas y nanas. Todos estos trabajos eran catalogados como «oficios femeniles».

Análoga situación es vivida en otras regiones de América Latina y descrita por sociólogos e historiadores como Lipschutz, Morner o De la Peña, en Chile, Perú y México.

La política de la Corona, que en un primer momento fue de apertura hacia los matrimonios mixtos, debido a la ausencia de mujeres, muy pronto, a partir de 1578, prohíbe por medio de cédulas reales estos enlaces, lo que provoca una mayor rigidez en la estratificación social de la colonia.

c.3. *Las clases populares*

Durante toda la época colonial, este sector, en especial la mujer y en particular la mujer indígena, fue el más afectado y castigado por las leyes, las instituciones y por la Iglesia.

Algunos ejemplos nos ilustran esta situación:

— A lo largo del siglo XVI las indias eran trasquiladas en señal de castigo o para diferenciarlas de un repartimiento a otro. Se da una orden en 1565 para evitar esa vejación, pero testimonios de la época indican que continuó la costumbre.

— Aparte de los tributos que todos los campesinos indígenas tenían que entregar a la Corona, al encomendero o a la Iglesia, las mujeres tenían que realizar dos tipos más de trabajos o repartimientos:

1. El de hilados: que consistía en convertir el algodón en hilo, y entregar al corregidor cuatro repartimientos al año.

2. Los servicios personales: el caso de las tezines, que eran mujeres indígenas obligadas por los alcaldes o sacerdotes a realizar trabajo doméstico sin remuneración y a desgranar el maíz.

Los vejámenes y abusos a la población indígena se centraron más en la mujer, sobre la cual se ejercía el derecho de pernada, estableciéndose desde el inicio hasta nuestros días claras relaciones de servidumbre y dominación.

Esta situación se prolonga a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. La Independencia sólo significó un cambio de dominación de los peninsulares a los criollos, pero fueron las principales familias oligárquicas centroamericanas quienes llevaron a cabo la emancipación. De los próceres de la Independencia centroamericana, la mayor parte de ellos pertenecían a estas redes familiares y estaban emparentados entre sí; tal fue el caso de los Aycinena, Beltrán, Del Valle, Arce, Matías Delgado, etc. La participación de algunas mujeres, como el caso de doña Dolores Bedoya, fue bastante excepcional y estaba vinculada a uno de los próceres, don Pedro Molina.

La revolución liberal sólo viene a empeorar la situación por diversos factores:

— La venta de tierras comunales de los indígenas.

— La desamortización y el censo enfitéutico.

— La introducción del café y el cultivo extensivo.

- La institucionalización del trabajo forzado y las leyes del peonaje.
- La irrupción del mestizo en la clase dominante.

Todo ello trae un nuevo reacondicionamiento de la población rural y urbana y nuevos desplazamientos para la mujer, en la medida en que se instaura el eje latifundio y la recolección y cosecha periódica de café, en zonas diferentes al *habitat* de las comunidades indígenas.

La irrupción del extranjero en la clase dominante y la inmigración alemana también marcan una nueva fase, que no modifica sustancialmente la estructura social, sino que la refuerza en los aspectos endogámicos y racistas.

En las clases populares se producen innumerables rebeliones a lo largo del siglo XIX, en las que en muchas de ellas se produce una fuerte presencia femenina como en las rebeliones de Patzún, Comalapa, Chimaltenango, Totonicapán.

D. La mujer en la estructura social contemporánea en Guatemala

La primera mitad del siglo XX no supuso ninguna modificación en las mujeres; los vientos sufragistas y liberadores de la mujer en Europa no parecen tener ningún impacto en la región, aunque no existen estudios al respecto.

Lo que empieza a aparecer es una mayor participación política de la mujer en contra de las dictaduras de la época, y así fueron los casos de doña Dolores Batres o doña María Cobos, que lucharon contra las dictaduras de Estrada Cabrera y de Ubico, sucesivamente. También se recrudecen las rebeliones indígenas en Patzún y Patzún con fuerte presencia femenina.

Durante la revolución de 1944-54, la llamada primavera democrática, se produjeron algunas leyes que favorecieron a la mujer, como

- Derecho al voto.
- Ley del divorcio.
- Igualdad ante el trabajo y la educación.
- Seguridad social.
- Decreto 900 sobre reparto de la tierra.

Similares reivindicaciones políticas también tuvieron lugar en Bolivia, Perú, Costa Rica, Brasil, etc.

Muchos de estos decretos fueron derogados con la contrarrevolución y otros se mantuvieron vigentes, aunque no se cumplieron.

Con la contrarrevolución y el largo interregno militar de 1963 a 1983 se produce un nuevo agravamiento de las condiciones económicas, políticas y sociales de la mujer guatemalteca en general, pero que afecta de un modo especial a las clases medias y populares, que son las que más sufren el impacto de la crisis económica y de la represión a lo largo de estos años.

Nos centraremos en las últimas tres décadas, 1960-1990, por considerarlas de vital importancia en la historia del país y por los efectos que ello tuvo en la mujer.

De nuevo se hace necesario enmarcar a ésta en la estructura de clases, no sin antes perfilar someramente los rasgos que caracterizaron esta época:

- Militarización de la sociedad y del Estado.
- Una pauperización generalizada en el campo y en la ciudad.
- Una desarticulación del tejido social y desmovilización de los movimientos populares y de masas.
- Un conflicto armado entre la guerrilla y el ejército.
- Una represión selectiva, sistemática y generalizada hacia las clases populares que se convierte en un auténtico etnocidio a partir de 1981, llegando a sus momentos álgidos en 1983, con la política de tierra arrasada.

d.1. *La mujer de la oligarquía en Guatemala*

Esta mujer continúa reproduciendo los patrones de vida y de matrimonio anteriormente citados e incrementa su aislamiento y racismo frente al resto de la sociedad. Una encuesta realizada por nosotros (6) a este grupo social nos aporta los siguientes resultados:

En la pregunta realizada a este grupo sobre «¿Usted qué se considera?» o «¿En qué grupo étnico se enmarca?», un 56 por 100 de las mujeres entrevistadas se consideran blancas y sin mezcla de sangre, por creer que descienden de españoles o de europeos. Ninguna se considera indígena y sólo el 13 por 100 ladina o mestiza.

Respecto de «¿Le molestaría que su hija contrajera matrimonio con un indígena?», el 35 por 100 respondió que sí, y las principales razones fueron los prejuicios sociorraciales, con un 22 por 100, y el pertenecer a distinta clase, con un 19 por 100.

En lo referente a las principales ventajas e inconvenientes de la conquista y colonización española, el 53 por 100 de las mujeres encuestadas afirmó que la mejora de la raza, seguida de un 22 por 100 que consideraban que el aporte principal fue una cultura superior.

Un 10 por 100 llegó a manifestar su consternación por no haber sido conquistadas por una raza superior como la alemana o la anglosajona.

El mestizaje como inconveniente es una opinión compartida por ambos sexos.

Una mujer de cincuenta y nueve años, esposa de ganadero, que se considera blanca, refiriéndose a la cultura indígena afirmó: «Los indígenas no pueden tener cultura, ya que son cerrados analfabetos, atrasados y haraganes, y encima de todo, ladrones.»

Aquí observamos nítidamente el profundo prejuicio racista y el estereotipo que posee la mujer oligarca hacia el indígena, estereotipo que no varía mucho del que tenían sus antepasadas.

d.2. *La mujer en las clases medias*

Posiblemente constituya uno de los sectores que se ha visto más golpeado por la crisis económica y por la represión en los últimos años. La represión ha costado la vida a más de 100.000 personas y que ha dejado más de 35.000 detenidos desaparecidos, en Guatemala. Un amplio número procedía de esta clase social, concentrado en su mayor parte en sectores sindicalistas, estudiantiles, universitarios y administrativos.

El sufrimiento de la mujer en estas clases se da por la triple vía:

— Como mujeres, al ser secuestradas, violadas, brutalmente torturadas y posteriormente asesinadas, como ha sido el caso de Rogelia Cruz, Miss Guatemala; Irma Flaquer, fundadora de la Comisión de los Derechos Humanos, y Alaidé Foppa, escritora y poetisa.

— Como esposas, a las que les han secuestrado o hecho desaparecer a sus maridos sin saber nada de su paradero, como cientos y cientos de casos denunciados; como mejor ejemplo, Nineth García de Montenegro o el de la Asociación de Viudas de Conavigua.

— Como madres, en sus dos vertientes: en el caso de haber perdido a un hijo, por estar secuestrado o por haber sido raptado para dedicarlo al tráfico de niños o de sus órganos.

Estos hechos patéticos han dado lugar a un movimiento organizado que tiene sus raíces en este grupo social, pero que posteriormente se extiende al resto de la sociedad, y es el GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, cuyo equivalente son las Madres de Mayo, en Argentina, y cuya misión principal es tratar de denunciar y averiguar

el paradero de sus seres queridos. Este grupo, que surge en 1981, con otro nombre, y a partir de 1983 como GAM, ha generado un fuerte movimiento político y social que ha puesto en jaque muchas veces al gobierno.

Por otra parte, el proceso de pauperización de las clases medias ha provocado una cierta proletarización de este sector, lo cual le ha llevado a lo largo de estas décadas a radicalizarse políticamente y a engrosar en gran medida las filas del movimiento guerrillero de la década de los ochenta y a protagonizar un amplio movimiento estudiantil de alumnos del ciclo medio que han provocado fuertes contestaciones al gobierno a lo largo de 1988, liderado en su mayor parte por las alumnas del centro Belén y otros institutos de enseñanza media. La huelga de maestros en 1989 ha sido liderada en su mayor parte por mujeres.

Qué duda cabe que las propias circunstancias histórico-políticas del país han radicalizado a la población y en especial a las mujeres, que se han visto abocadas a participar en el movimiento de contestación armado y popular que se ha dado en el país en los últimos treinta años.

d.3. *La mujer en las clases populares*

La mujer de estas clases ha sido sin duda la más afectada por la represión, opresión y discriminación en las últimas décadas, porque a los problemas socio-económicos y políticos que venía arrastrando históricamente, se han añadido nuevos que han venido a empeorar cuantitativa y cualitativamente su situación.

Ya en 1973, en seminarios realizados sobre la mujer indígena, se denunciaba la situación de discriminación de que ésta era objeto, en la educación, en el derecho a la vida y a un trabajo digno y en la obligatoriedad de la planificación familiar a que estaba siendo sometida por proyectos de control de la natalidad llevados a cabo por la AID.

Ya entonces se recomendaba un trato real más igualitario, exigencia de tierra, fomento de la agricultura, ganadería y artesanía, eliminación de la discriminación en la cultura, las costumbres, la lengua y la educación y una mayor participación indígena en la vida política y social de la nación.

En la década de los ochenta, la mujer trabajadora de la ciudad y campesina indígena se incorporan masivamente a la lucha revolucionaria y participan activamente en las organizaciones de masas y de lucha armada, llegando a ocupar importantes cargos en las direcciones de estos movimientos, tal y como lo confirman algunos testimonios de mujeres involucradas en la lucha armada, como Lupe, del EGP, que plantea cómo se incorporó a la guerrilla y cómo dentro de ella empezó a luchar contra la discriminación de la mujer en ese campo:

«Ibamos luchando contra la discriminación también; cuando llegaban los compañeros a una casa, siempre ayudaban en la cocina y yo ayudaba en el campo en la siembra» (7).

Otra mujer, Teresa Xiloj, explica cuál fue su experiencia en el campo y por qué se incorporó al movimiento popular. Relata cómo los soldados se aprovechaban de ella en el comedor donde servía y cómo tuvo que trabajar en condiciones infra-humanas en una algodонера.

Pero sin duda el testimonio más esclarecedor de todos sea el caso de Rigoberta Menchú, cuyo padre fue asesinado en el asalto a la Embajada de España en Guatemala y posteriormente su madre torturada y asesinada brutalmente por el ejército, y su largo peregrinar hasta que pudo incorporarse al CUC, Comité de Unidad Campesina. Su testimonio, presentado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en Madrid, en 1983, empieza de la siguiente forma:

«Me llamo Rigoberta Menchú, tengo veinticuatro años de edad; soy indígena quiché, campesina y cristiana; me ha tocado vivir la represión en carne propia» (8).

Esta mujer es actualmente miembro de la RUOG, Representación Unitaria de Oposición Guatemalteca, y ha sido la que ha llevado a cabo gran parte del trabajo político-diplomático en Naciones Unidas durante todos estos años. De alguna manera representa el símbolo de la mujer indígena que lucha por el advenimiento de una sociedad más justa, por mantener su dignidad como mujer y por conservar su identidad como etnia. Su libro *Me llamo Rigoberta Menchú, y así nació mi conciencia* es una buena prueba de ello.

Otros ejemplos similares podemos encontrarlos en Bolivia con Domitila, en Nicaragua con Dora Téllez, en El Salvador con Ana Guadalupe, en Argentina con las Madres de Mayo, etc.

Probablemente la época más siniestra y de mayor impacto para la mujer haya sido la etapa de Ríos Montt, en 1982-1983, cuando se produjo un auténtico genocidio contra la población indígena, en donde miles de mujeres tuvieron que abandonar sus hogares, presenciar la muerte violenta de sus niños recién nacidos y ver cómo arrasaban sus cultivos, viviendas y animales. Esta política de tierra arrasada causó el desplazamiento de más de 100.000 refugiados a México, en su mayoría mujeres y niños, y más de medio millón de desplazados internos que huyeron a la montaña para protegerse de las masacres colectivas ejecutadas principalmente en la época de Ríos Montt.

Los testimonios de Naciones Unidas de los años 1983, 1984 y 1985 son una prueba de ello, así como los resultados del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Los principales efectos de esta situación devastadora aún siguen siendo aterradoros y vívidos patéticamente por las mujeres:

— El desplazamiento masivo e inmigración a otros países u otras zonas del territorio nacional.

— Su reubicación en aldeas estratégicas denominadas «polos de desarrollo», con la consabida pérdida de sus costumbres, cultura, y el adoctrinamiento a que son sometidos.

— La pauperización creciente de esta población, que en cinco años perdió lo poco que tenía. Pauperización que se manifiesta en las dramáticas condiciones de salud, alimentación, vivienda, educación, etc., retrocediendo diez años respecto a su situación, ya de por sí alarmante, de la década de los setenta.

— La existencia de más de 100.000 niños huérfanos, sobre los cuales se ha montado el macabro negocio de tráfico de niños o de sus órganos al extranjero para ser vendidos para trasplantes o para cosmética.

— La desvertebración del núcleo familiar y de la comunidad de origen, con el riesgo de perder su identidad histórica y su memoria colectiva.

E. La situación actual (1985-1989)

A partir del advenimiento de un gobierno civil y con cuatro años de ejercicio en el poder no parece que las cosas hayan cambiado demasiado para las mujeres de las clases populares; probablemente se esté produciendo un cierto viraje que permita pasar a esta población del terror al miedo y del hambre a la miseria, viraje que aún no es del todo perceptible ni cuantificable, pero que los datos generales pueden estar apuntando hacia allí.

Las mujeres de las clases medias parecen ser las más beneficiadas de este cambio, que no parece que haya afectado en nada a las clases populares, pero que en el

caso de estos sectores medios aparecen más combativos en la reorganización de los sindicatos y movimientos populares, especialmente en el sector informal, en las áreas marginadas y en los sectores estudiantiles de ciclo medio y GAM.

Merece destacar una importante presencia de mujeres en el gabinete presidencial, situación poco común en los anteriores gobiernos. Si bien es verdad que esta situación parece estar provocada más por razones sexistas y machistas que como parte de una política encaminada a dar un espacio y participación a la mujer.

Según los últimos estudios realizados sobre la mujer en Guatemala (9), más de la mitad de la población es femenina y de raza indígena. En los últimos años registra una alta participación en la actividad económica, aunque sigue siendo baja en relación a otros países del área. La mujer guatemalteca presenta una elevada tasa de analfabetismo, 50 por 100, y una tasa muy baja de escolaridad, 60 por 100, sus condiciones de salud son muy deficientes y presenta una de las tasas más altas de mortalidad infantil y de mortalidad por maternidad, esta mortalidad infantil y materna indígena superior en un 50 por 100 a la ladina.

Todos estos índices indican una clara discriminación de la mujer en los principales aspectos socioeconómicos, desigualdades que parecen muy difíciles de erradicar a corto plazo, a menos que se produzca un cambio sustancial en la legislación y en las estructuras económicas del país.

NOTAS

(1) Anónimo: «Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché», México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

(2) De las Casas, Bartolomé: «Brevisima relación de la destrucción de Indias», Madrid, Anja, 1983.

(3) De las Casas, Bartolomé, op. cit., pág. 49.

(4) Sánchez Rubio, Manuel: «La mujer en Guatemala», Guatemala, SIGS, 1976, pág. 133.

(5) AGI, Audiencia de Guatemala, 156, Carta del obispo Marroquín a Su Majestad.

(6) Casaús Arzú, Marta Elena: «La ideología de la clase dominante guatemalteca: Estructura, práctica política e ideología del núcleo oligárquico», tesis doctoral, abril 1989, en impresión. En la tesis se realizó una encuesta a una muestra de 110 miembros de la oligarquía, el 50 por 100 mujeres, acerca de su autoadscripción y en relación al indígena.

(7) Revista Compañero del EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, Guatemala, 1981.

(8) IEPALA: «Tribunal Permanente de los Pueblos: Sesión Guatemala», Madrid, IEPALA, 1983.

(9) García, Ana Isabel, y Gomáriz, Enrique: «Mujeres centroamericanas», San José de Costa Rica, Flacso, 1989.